

LEGALIDAD

DERECHO Y SOCIEDAD



***45 años
En defensa de la
legalidad***

MEMORIAS pág 4-27

**XIV Encuentro
Internacional Ciencias
Penales y II Evento
Legalidad, Derecho y
Sociedad**

ARTÍCULOS pág 50-60

**La Constitución de un país
es la voz del pueblo.
Yo apoyo la Reforma
Constitucional**
pág 55-57

PONENCIAS pág 72-92

**Necesidad de una
profunda reforma en
nuestro sistema de
justicia penal**
pág 72-83

45 AÑOS

**FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DE CUBA**

#JuntosSomosMás

LEGALIDAD DERECHO Y SOCIEDAD

PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

DIRECTOR EJECUTIVO
Yamila Peña Ojeda

CONSEJO EDITORIAL
Alina Montesino Li
Cor. Juan Raudel Rissell Collazo
Marcos Caraballo de la Rosa
Carlos Concepción Rangel
Arnel Hernández Marrero
José Antonio Castro Galán
Joaquina Naranjo Gómez
Edward Roberts Campbell
Caridad Sabó Herrera

REDACCIÓN, EDICIÓN Y DISEÑO
Lic. Jessica Rivero Rodríguez

CORRECCIÓN
Lic. Juan Carlos Santos

FOTOGRAFÍA
Adrián Lago del Valle
Carlos Pujols Santana

DIRECCIÓN
Calle 34 No. 1801 e/. 3.^a y 5.^a,
Miramar, Playa, La Habana.
CP. 11300

TELÉFONO
(537) 206 1034

E-MAIL
jessica@fgr.gob.cu

RNPS: 0653
ISSN: 1819-6543

La Revista Legalidad, Derecho y Sociedad constituye la publicación oficial de la Fiscalía General de la República de Cuba, editada con una frecuencia cuatrimestral. Es un espacio donde se presentan artículos, ponencias, noticias y secciones con informaciones de interés social.

Nota al Lector
pág. 3

Memorias del XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad
pág. 4

Noticias
pág. 28

Breves
pág. 46

Artículos
pág. 50

Ponencias presentadas en el XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y el II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad
pág. 62

Ponencias
pág. 72

Los fiscales responden
pág. 92

¿Sabías que?
pág. 93

Glosario de términos jurídicos
pág. 94

Normas para publicar en la revista Legalidad, Derecho y Sociedad y otros espacios de la Fiscalía General de la República
pág. 95



NOTA AL LECTOR

En la presente edición de la revista “Legalidad, Derecho y Sociedad”, publicación oficial de la Fiscalía General de la República, ponemos a su disposición las memorias del XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2018 y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que sesionó del 14 al 16 de marzo de 2018, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Contó con la participación de un gran número de delegados nacionales y extranjeros, de más de 28 países y organizaciones cubanas e internacionales.

Este constituyó un espacio para reflexionar acerca de los problemas actuales del quehacer jurídico, en relación al Derecho Penal, y abordar algunas de las manifestaciones del delito en el ámbito internacional.

Fueron debatidas, desde diferentes enfoques jurídicos, temáticas de gran vigencia e incidencia para todas las naciones, con énfasis en la prevención y el enfrentamiento a delitos de trascendencia global.

El evento devino fructífero intercambio de experiencias, que esperamos favorezca la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a nuestros países y tienen su expresión en los pueblos.

Agradecemos y brindamos nuestras más sinceras felicitaciones a todos los participantes, especialmente a los que con sus intervenciones realizaron importantes aportes. Aprovechamos para convocarlos a participar en el XV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2020 y III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad.

En esta edición, además, mostramos el quehacer de la Fiscalía en disímiles espacios y ponemos a su disposición informaciones que esperamos contribuyan a elevar la educación jurídica de todos los ciudadanos y promuevan el conocimiento de la actividad fiscal a favor de la sociedad y al alcance de todos.

FRATERNALMENTE,

YAMILA PEÑA OJEDA
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

MEMORIAS DEL

XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL

CIENCIAS PENALES

II EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

Precongreso: El DERECHO y la ECONOMÍA



El taller precongreso “Economía cubana actual y delitos económicos” sesionó el 13 de marzo, en la jornada previa al XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, con el objetivo de propiciar el más fructífero intercambio de experiencias entre los delegados nacionales asistentes.

Los debates se centraron en torno a los paneles “Papel del Derecho en el proceso de transformaciones de la economía cubana actual” y “Corrupción y delitos económicos”. El encuentro también contó con intervenciones especiales a cargo de prestigiosos profesores universitarios y profesionales del Derecho y la Economía.

Los delitos económicos y las conductas asociadas a la corrupción constituyen una preocupación del Estado cubano y de los estudiosos y operadores del Derecho y la Economía que se relacionan con estos temas, y su enfrentamiento en el escenario actual en el que se implementan los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución resulta una prioridad; de ahí la importancia de los debates que se suscitaron en estos espacios.

LAS CIENCIAS PENALES A DISCUSIÓN EN CUBA



La Habana se convirtió en la capital de las Ciencias Penales en el mundo, entre el 14 y el 16 de marzo de 2018, con la realización del XIV Encuentro Internacional dedicado a esta materia y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que sesionó en el Palacio de Convenciones de esta ciudad.

“...Somos un montón de países con intereses comunes, ansías de progreso y desarrollo, ... hay que trabajar, persuadir, luchar y perseverar. Jamás desalentarse”, con esta frase de Fidel Castro Ruz concluyó el Fiscal General de la República de Cuba, Darío Delgado Cura, el discurso inaugural del encuentro.

En el evento, auspiciado por la Fiscalía General de la República de Cuba, más de 400 participantes, de ellos 109 extranjeros de veintiocho países, reflexionaron sobre las problemáticas que en el campo del Derecho compete actualmente a la sociedad a nivel mundial.

En las sesiones participaron diez fiscales o procuradores generales, cinco vicefiscales generales, así como representantes de la Asociación

Internacional de Fiscales, la Unicef, la Organización Mundial de la Salud, el Comité para el Derecho Constitucional de Rusia, el Tribunal Supremo Popular de Vietnam, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Muestra de las alianzas fructificadas entre la Fiscalía cubana y los ministerios públicos, procuradurías, fiscalías e instituciones de estas naciones.

A la variedad y profundidad de los debates contribuyó la asistencia de fiscales, abogados, jueces, funcionarios, profesores, estudiantes y otros especialistas del Derecho o relacionados con esta ciencia en Cuba y otros países. Así como representantes de instituciones, órganos y organizaciones con los que la fiscalía cubana trabaja.

Como parte del programa colateral se ofreció una gala de bienvenida a los delegados en la Basílica San Felipe Neri.

Además, se realizó un foro-debate donde los ciudadanos pudieron intercambiar con especialistas del Órgano desde el portal web institucional y los perfiles en las redes sociales.

PALABRAS DE APERTURA

INTERVENCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

En un día especial para nuestro país, en que celebramos el aniversario 126 de la Prensa cubana, en homenaje a la publicación del primer número del periódico *Patria* por el Héroe Nacional José Martí, el más universal de los cubanos, en la ciudad de Nueva York, felicitamos a todos sus trabajadores, que con su obra mantienen vivo el pensamiento del Apóstol, que en uno de los artículos de esa primera publicación, escribió y cito: “*Patria* nace para juntar y amar y para vivir en la pasión de la verdad”. Fin de la cita.

Compañeros de la presidencia:

Distinguida Dra. Kenia Isolda Porcell, Procuradora General de la República de Panamá y Presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Distinguidos fiscales y procuradores generales, jefes e integrantes de delegaciones.

Distinguidos representantes de Naciones Unidas, Unión Europea y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

Estimados catedráticos, colegas, estudiantes, delegados e invitados, amigos todos.

Constituye un alto honor y motivo de sincero regocijo contar con su presencia en el XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, y en nombre del Comité Organizador y de las institu-

ciones que los coauspician, les doy la más cordial bienvenida a esta tierra que los acoge con la calidez y hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo, y que supera en belleza a la mejor obra de la naturaleza en Cuba; deseándoles un fructífero y provechoso intercambio profesional y una grata estancia en nuestro país.

Las sesiones del evento, donde se discutirán diferentes temáticas relacionadas con el Derecho Penal, los retos frente a la corrupción, el delito transnacional y el medioambiental; la protección a la familia, especialmente a los menores de edad, mujeres, ancianos, discapacitados y otros sectores vulnerables; entre otros tantos temas de interés, estarán enfocadas a propiciar el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias, para desde el Derecho contribuir a la solución de los problemas comunes que se nos presentan e impactan en nuestras sociedades, procurando su mejoramiento constante y la justicia que merecen nuestros pueblos, en lo que Cuba, humilde y modestamente exhibe y comparte lo alcanzado, sin ser perfecto.

En ese sentido, les expresamos de antemano nuestro merecido agradecimiento a los autores de las intervenciones especiales y ponencias y a los participantes en los debates que se producirán en las sesiones del evento, que han contribuido decisivamente a la conformación del programa científico y aportarán a la difusión de sus conocimientos y experiencias; así como a los que nos han apoyado material y logísticamente para el logro de los objetivos.



Estimados delegados, colegas y amigos:

El contexto internacional en el que se desenvuelven las ciencias penales y el Derecho, en sentido general, continúa siendo cada vez más complejo; el acelerado proceso de globalización del delito y los avances de las tecnologías han transformado la criminalidad de manera ostensible; la existencia de una economía cada vez más interdependiente, la desigual distribución de las riquezas, la proliferación de conflictos armados, la violencia, el terrorismo, los efectos del cambio climático, el saqueo de los recursos naturales y las migraciones masivas, el tráfico internacional de drogas y la trata de personas, con todas sus secuelas, han hecho que el delito deje de ser un problema nacional para convertirse en una amenaza mundial, que no conoce límites ni fronteras, y donde las víctimas principales no son precisamente los más poderosos y los que detentan las

mayores riquezas, sino los niños, niñas, mujeres y ancianos.

El fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, cuyo estudio surgió en el seno de las ciencias criminológicas y por sus implicaciones legales se desplazó hacia la esfera penal, plantea serias dificultades en el desciframiento de sus códigos, que sistemáticamente sobrepasan, por su capacidad mimética, mutante y dinámicas delictivas, las formas, métodos y vías con las que tradicionalmente la hemos prevenido y enfrentado, y en lo que gradualmente vamos tomando conciencia y sacudiendo rutinas, con todas las garantías del debido proceso, pero procurando agilidad, efectividad, eficacia y eficiencia, pues de lo contrario seremos rebasados por la criminalidad.

Una de nuestras conquistas más importantes es la seguridad ciudadana, y en Cuba no existe el crimen organizado, pero sus diversas manifesta-

ciones en el entorno geográfico que nos circunda, la incidencia de personas residentes o que viajan con determinada frecuencia a otros países y se vinculan a diferentes delitos, como el tráfico de drogas, personas, obras de arte y fraudes financieros, que tratan de invertir sus ilícitas ganancias en nuestro territorio, vulnerando o tratando de vulnerar las disposiciones y controles establecidos, y aprovechando la diversificación de las relaciones económicas en la sociedad cubana, como parte de la actualización del modelo económico, nos impactan directa o indirectamente, comportando un reto para nuestro sistema legal y para la Fiscalía General de la República.

Ante esta realidad, comprendemos y ponderamos la importancia que reviste la actualización y perfeccionamiento del sistema de derecho para prevenir y combatir eficazmente estas manifestaciones delictivas, no solo desde el Derecho Penal, que debe preservarse para las mayores amenazas.

El papel de la colaboración internacional, bajo el principio de responsabilidad común y compartida de nuestros ministerios públicos y sistemas judiciales, debe alcanzar el protagonismo que nuestras sociedades demandan.

Cuba es parte de varias convenciones de las Naciones Unidas: contra la Corrupción, contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Nuestro país ha firmado más de cien acuerdos de cooperación, sobre drogas, asistencia jurídica y judicial, traslado de sancionados, extradición, entre otros y permanentemente promueve e intercambia, favoreciendo esta práctica con los estados que en igualdad de condiciones muestran su interés y disposición.

Cuba trabaja con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Comité para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (COPLAFT), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), entre otros mecanismos de cooperación internacional de autoridades especializadas.

La Fiscalía General de la República está integrada a varios mecanismos regionales e internacionales de cooperación jurídica, para el enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas, el cibercrimen, entre otros, participando con expertos en la mejor implementación y cumplimiento de las obligaciones como país y la protección de los derechos humanos de nuestros ciudadanos, al tiempo que ha suscrito 15 acuerdos de colaboración con otras ministerios públicos y en el marco de este encuentro se firmarán otros.

En la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con nueva metodología enfocada al riesgo de las jurisdicciones, nuestro país recibió el reconocimiento expreso al sistema legal y a su estructura de órganos del Estado que implementan de forma coordinada las políticas para prevenir y enfrentar la criminalidad.

Distinguidos delegados e invitados:

Otro de los grandes retos comunes que enfrentamos es, sin dudas, la corrupción administrativa.

El triunfo de la Revolución permitió la erradicación de la corrupción política, propugnando nuevos valores en sustitución de aquellos que establecían la supremacía de la riqueza y el lucro para una minoría.

No obstante, nuestras propias carencias, la situación internacional y el recrudescimiento del criminal bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos de América, influyen en la existencia de una corrupción administrativa, básicamente en los niveles intermedios y de base, sin llegar a ser sistémica ni estructural ni tener en el ámbito interno el respaldo en el crimen organizado, que es uno de sus pilares; adoptándose medidas de prevención y enfrentamiento desde las diferentes estructuras de nuestra sociedad, y con una legislación penal y

administrativa que lo hacen posible en todas sus formas y manifestaciones, cualquiera que sea la persona que los cometa y su jerarquía, evitando que el fenómeno se entronice en la sociedad, sobre lo cual existen ejemplos elocuentes, tanto pasados como recientes, evidenciándose en toda su intensidad la voluntad política, estatal y gubernamental.

Delegados e invitados:

En el ámbito de la justicia penal, Cuba cuenta con una larga experiencia, que data de finales del siglo XIX, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882 se hizo extensiva a nuestro país por Real Decreto de 19 de octubre de 1888, la que mantuvo su vigencia durante 85 años y constituyó un paradigma para su época, al exponer la ruptura de las ideas liberales con el modelo inquisitivo predominante, separando las funciones de la instrucción, la acusación y el juzgamiento, e instaurando la institución del juicio oral y público desde esa fecha, lo que nos distinguió por más de un siglo del resto de América Latina, estando regido actualmente el proceso por la Ley de Procedimiento Penal

De conformidad con el artículo 59 de la Constitución de la República de Cuba, nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y las garantías que estén establecidas, teniendo todo acusado derecho a la defensa, correspondiendo a la Fiscalía, como objetivos fundamentales, según el artículo 127 de la propia Constitución, el control y la preservación de la legalidad, y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

Puede afirmarse que el proceso penal cubano, a tono con las exigencias universales del debido proceso, y con los límites necesarios en el *Ius Puniendi del Estado*, garantiza la realización del principio universal de justicia, mediante la protección de los intereses sociales y los individuales del acusado y de la víctima, procurando un vere-

dicto justo, que es la imagen final de una justicia garantista, segura y ágil.

Convencidos de que la realidad supera siempre el concepto que intenta contenerla, no creemos que pueda encerrarse la percepción de la justicia en el estrecho marco de la legalidad y del derecho y mucho menos limitarla al Derecho Penal, que lejos de cumplir uno de sus postulados más esgrimidos en el discurso de académicos y operadores del Derecho Penal, el de *última ratio*, no ha podido despojarse de su expansión.

La exclusión social en algunos países, entendida como falta de participación de personas o sectores en la vida social, económica, política y cultural, debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas, como el acceso al trabajo, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y la seguridad ciudadana, por solo citar algunos, constituye la mayor evidencia de cuáles son las barreras que debemos superar para acercarnos objetivamente al ideal de la justicia.

Nuestro Estado protege, constitucionalmente, la familia, la maternidad y el matrimonio; la enseñanza es función del Estado y es universal y gratuita; la niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad; todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes; la discriminación por motivo de raza, color de la piel, orientación sexual, género, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley; las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos; la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar; creando el Estado las condiciones para propiciar la realización del principio de igualdad.

La Ley de la Fiscalía General de la República, establece entre los objetivos del órgano, además de su rol controlador de la investigación penal y sus amplias facultades en esta materia; velar por los derechos constitucionales y las garantías establecidas y procurar el restablecimiento de la legalidad frente a las infracciones de organismos

del Estado y entidades económicas y sociales, la atención de las reclamaciones de los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos y velar por el respeto a los derechos de los detenidos, entre otras.

Para el cumplimiento de esas funciones, tradicionalmente ha existido un sistema de atención directa y personal, incrementado en los últimos tiempos, que funciona diariamente en todas las instancias de la Fiscalía, lo que se complementa con otras vías, para efectuar consultas de temas jurídicos y plantear quejas sobre la perturbación del ejercicio efectivo de los derechos en cualquier materia.

En el perfeccionamiento de nuestro sistema de gestión, hemos consolidado la función constitucional de control de la legalidad, prestándole mayor atención a la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, mediante las visitas periódicas a los hogares para niños sin amparo familiar y otras instituciones educacionales que atienden a menores de edad, acciones preventivas y punitivas contra los padres y representantes legales que incumplen sus obligaciones y deberes, protección a menores víctimas de hechos delictivos y otras formas de violencia, entre otras.

Igualmente velamos por la protección de los derechos de los ancianos y de otros sectores vulnerables, en desventaja o con limitaciones para su ejercicio, como las personas detenidas o privadas de libertad; e intervinimos en los procesos judiciales en materia civil, de familia, administrativo o económico, así como en los asuntos notariales, en los casos expresamente previstos en la ley.

Distinguidos delegados e invitados:

Nuestra legislación y práctica jurídica no son perfectas, y trabajamos para mejorarlas y actualizarlas, con la voluntad de todos, apropiándonos de lo que consideramos conveniente de las mejores prácticas internacionales, pero afincados en nuestra larga y rica práctica del derecho y la justi-

cia; así es Cuba, esta es nuestra realidad, a veces desconocida, a veces incomprendida y a veces ocultada o tergiversada.

Concluyo así, con la seguridad de que este evento será cada vez más un pequeño aporte en esa aspiración de construir y luchar por sistemas jurídicos que sean auténticos, no importados, que se parezcan a nuestras realidades, y con capacidad de integración y cooperación para hacer frente con eficacia a los fenómenos sociales y retos que nos ocupan, recordando las premonitorias palabras del compañero Fidel, cuando expresó, y cito:

“...somos un montón de países con intereses comunes, ansías de progreso y desarrollo,... hay que trabajar, persuadir, luchar y perseverar. Jamás desalentarse.” Fin de la cita.

Queridos invitados, colegas, amigos, bienvenidos a Cuba y a este evento.

Muchas gracias a todos.



CONFERENCIAS MAGISTRALES

14 de marzo de 2018

Kenia Isolda Porcell

Procuradora General de la República de Panamá y Presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)



Durante su intervención en Ciencias Penales 2018 se refirió a los desafíos de las investigaciones de lavado de activos para la cooperación jurídica internacional en materia penal. Señaló las acciones concretas emprendidas por la República de Panamá para combatir este delito. Mostró los modos en los que se realiza el lavado de activos, identificando las conductas que generan mayor riesgo para el país y los tipos penales que más producen dinero ilícito.

Tarek William Saab

Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela



Intervino acerca del enfrentamiento que realiza el Ministerio Público de la nación venezolana contra la corrupción y el narcotráfico. Señaló las acciones que en este sentido efectúan, especialmente, en las relacionadas con el petróleo. Manifestó que el flagelo de la corrupción es una especie de mal que corroe no solamente al Estado, las instituciones y las empresas privadas, sino que daña la ética y la moral pública, y enferma a una nación entera.

Kim Myong Gil

Representante de la Fiscalía Suprema de la República Popular Democrática de Corea



A nombre del máximo representante de la Fiscalía de la República Popular Democrática de Corea, garantizó una estrecha colaboración con Cuba para el avance exitoso del evento, previendo que fuera un espacio para compartir experiencias en el mejoramiento de la responsabilidad de los funcionarios judiciales y garantizar el desarrollo seguro de la sociedad. Se refirió a los delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, los cuales catalogó como temas de importancia

nacional e internacional. Manifestó que la lucha contra estos delitos es un trabajo esencial para salvaguardar el Socialismo, la propiedad del país, de la sociedad y los intereses del pueblo. En su intervención también hizo alusión a la posición de su nación en la lucha contra la corrupción financiera.

Mercedes López Marrero

Superintendente del Banco Central de Cuba y Coordinadora del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica



Abordó el papel de Cuba en la red de países que combaten el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Se refirió al marco regulatorio vigente sobre este fenómeno, la necesidad de la cooperación entre las naciones y la integración de Cuba a organismos internacionales rectores en dicha materia y los desafíos que ello impone. Cuba es Estado parte de dieciocho convenios internacionales relativos al terrorismo.

Dra. María Alcaide Sánchez

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, España



Su intervención versó sobre la corrupción, abordando esta desde diversas aristas, entre ellas la criminológica y la penal. La especialista realizó una analogía entre el código penal español y el cubano en relación con los delitos vinculados a este fenómeno. Además, se refirió a la prevención para evitar cualquier manifestación al respecto.

15 de marzo de 2018

Dr. Peter Polt

Fiscal General de la República de Hungría



El máximo representante de la fiscalía húngara se refirió al enfrentamiento al crimen trasnacional y el cibercrimen, temas que son vitales en la actualidad, por su manifestación creciente en la sociedad, mostrando las experiencias de su nación. De igual forma, abordó las nuevas oportunidades de las tecnologías de la información y las convenciones e instrumentos de cooperación contra el crimen internacional organizado y la corrupción, como importantes herramientas.

Dra. Xenia Dimitriou- Vassilopoulou

Fiscal General de la Corte Suprema de la República Helénica, Grecia



Sobre la familia y la relación entre padres e hijos, versó la conferencia impartida por la Fiscal General de Grecia, refiriéndose a la violencia doméstica, el abuso infantil y otros temas asociados. Señaló las características de la familia como institución en la actualidad. Manifestó que, de acuerdo a la Constitución griega, la familia, el matrimonio, la maternidad y la niñez están bajo la protección del Estado, el que toma las medidas apropiadas para proteger la juventud. Precisamente, efectuó un llamado a proteger la niñez y la juventud.

Nikolai Aleksandrovich Vinichenko

Vicéfiscal General de Rusia



Disertó sobre el rol que desempeña la Fiscalía de la Federación de Rusia en la política anticorrupción que implementa el Estado, como una prioridad, obteniendo un carácter sistemático y de ofensiva. Señaló que la principal tarea de todos los órganos estatales y municipales es la prevención de la corrupción, la lucha contra sus manifestaciones y la eliminación de las consecuencias de los delitos. Presentó los principales objetivos del plan de la lucha contra la corrupción aprobado por el Presidente de la nación para varios períodos.

María Machicado Terán

Representante de la Unicef



objetivo. La ponente identificó los peligros a los que se enfrenta este segmento en América Latina y los desafíos de la protección de la niñez y la adolescencia a nivel global y llamó a protegerlos.

Dr. Juan Antonio Lascuraín Sánchez

Catedrático de Derecho Penal y Coordinador de la Introducción al Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, España



Manifestó la importancia de la protección integral a la niñez y la adolescencia, señalando el mandato que tiene la Unicef de la Asamblea General de las Naciones Unidas para abogar por la protección, el respeto y garantía de los derechos de todos los niños y niñas. Hizo referencia a los propósitos, estructura y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), al ser el marco jurídico internacional para trabajar en materia de derechos humanos de los menores de edad y el primer tratado con este

El profesor debatió sobre la responsabilidad penal individual en los delitos de empresa. Determinó que la empresa es una organización compleja en cuyos procedimientos se concitan distintas conductas activas y responsabilidades que pueden dar lugar a omisiones relevantes para el Derecho Penal. En la intervención abordó una cuestión hoy candente en los sistemas que han acogido la responsabilidad penal de las personas jurídicas: qué responsabilidad penal puede tener el responsable de cumplimiento respecto a los delitos de terceros que no evite.

Adriano Cunha

Viceprocurador General de la República Portuguesa



Mostró la experiencia portuguesa en la suspensión provisional del proceso penal, que existe en otras jurisdicciones, apuntó que fue el tema seleccionado pues es un instrumento que en los últimos tiempos ha tenido un importante desarrollo en Portugal y ayuda cuando tienen, como es su caso, en el ejercicio de la acción penal pública el principio de la legalidad. En la intervención señaló los tipos de crimen en los que esta suspensión fue más aplicada en el periodo 2016 – 2017 por determinación del Ministerio Público, al ser titular de la acción penal en la nación portuguesa.

Andrei Klishas

Presidente del Comité para el Derecho Constitucional de la Duma de Rusia



Se refirió a la corrupción como amenaza al Estado moderno y al papel del poder legislativo en el enfrentamiento a esta manifestación. Comentó las medidas adoptadas para desarrollar la base jurídica contra la corrupción y habló sobre los problemas que interfieren en el cumplimiento de la legislación de Rusia en este sentido.

Dr. C. Leonardo Pérez Gallardo

Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y Presidente de la Sociedad Iberoamericana del Notariado



El tema presentado por el profesor fue el ejercicio de las funciones notarial y fiscal, buscando elementos comunes de actuación entre ambas. Manifestó que el notario es el garante por excelencia del tráfico jurídico privado, en el cual intervienen no solo personas físicas, sino también jurídicas, pero estas actúan esencialmente como entes de Derecho Civil y Derecho Mercantil. Declaró que los actos que se conciertan en sedes notariales necesitan la presencia de un controlador del principio de legalidad, un ejercicio común entre la función notarial y fiscal.

16 de marzo de 2018

Dr. Arkel Benítez

Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, COMJIB



Comentó sobre las características del mecanismo que dirige, los cambios legislativos que realiza y el rol que desempeña en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, señaló el poder de la ciudadanía para preservar el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica en la lucha contra la corrupción. Manifestó que Cuba ha sido un país generoso en la transferencia de su conocimiento, en términos de la apertura para conocer muchas de sus diversas prácticas.

Dr. Ramiro José Guerrero Peñaranda

Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia



Comentó sobre el papel del Ministerio Público y el Sistema Judicial en el enfrentamiento a la corrupción, los cambios estructurales en la constitución política de Bolivia en la lucha contra este flagelo y el tratamiento normativo aplicable. Hizo referencia a la creación de la Fiscalía de Delitos de Corrupción y otras estructuras para estos objetivos, así como la implementación del “Código de Ética” al interior del Ministerio Público. Amplió sobre la labor de prevención en estos delitos. El Fiscal General de Bolivia señaló que aprecia una transformación de la justicia en nuestros países.

Dr. Gerhard Jarosch

Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales



Explicó la organización de la Fiscalía de Chile para enfrentar el fenómeno de la corrupción con un enfoque multidisciplinario y un equipo conformado por profesionales de otras instituciones del Estado y perfiles. Otro punto de debate fue la cooperación internacional en materia penal y las vías utilizadas en dicho propósito por la asociación que dirige, que cuenta con más de 20 años de existencia.

Dr. Erdenebat Ganbat

Vicefiscal General de Mongolia



Intervino sobre las cuestiones relacionadas con la confesión en las ciencias penales. Manifestó que el enfrentamiento a la criminalidad en las entidades legales es importante en el combate contra el delito. Señaló las características de Mongolia en la lucha contra las nuevas formas de delitos y la creación de un laboratorio de criminalidad.

Nguyen Tri Tue

Vicepresidente del Tribunal Supremo Popular de Vietnam



Reflexionó sobre las disposiciones de la legislación vietnamita en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica y los procedimientos para enjuiciar a estos entes infractores.

Dra. Patricia Faraldo Cabana

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de la Coruña, España



Desarrolló su presentación a partir de la pregunta ¿cómo hacerse con las ganancias ilícitas derivadas del delito? Versó sobre la obligación de tributar por ingresos de procedencia delictiva, el delito de enriquecimiento ilícito, la compatibilidad de multas elevadas y el decomiso. Asimismo se refirió al lavado de activos y el delito previo, valorando la necesidad de una interpretación restrictiva en casos de posesión y utilización por el interviniente en el delito previo.

Dr. Khamsan Souvong

Procurador Supremo del Pueblo en la República Democrática Popular Lao



El fortalecimiento de la cooperación en el combate efectivo al tráfico transnacional de drogas fue el tema a debate por el representante de la Procuraduría de Lao. Señaló que las drogas han dejado de ser un asunto local para convertirse en nacional e internacional. Apuntó que está entre los delitos que han proliferado y cuya presencia provoca daño a la vida, la salud y la propiedad de los ciudadanos y, además, es un elemento insatisfactorio que crea disturbios sociales, por lo tanto, para poder combatirlo de manera eficiente se requiere aumentar la colaboración entre todos los países.

Dr. Julián Sánchez Melgar

Fiscal General del Estado del Reino de España



Planteó la nueva perspectiva punitiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la experiencia española al respecto. Señaló que si en la teoría jurídica del delito de la persona física, después de siglos, nadie ha dicho la última palabra, en la teoría jurídica del delito de las personas jurídicas, que está surgiendo ahora mismo, tampoco podemos establecer esa última palabra. Manifestó que debemos construir la nueva teoría jurídica del delito de las personas jurídicas utilizando las aportaciones que sean aprovechables de la dogmática tradicional de las personas físicas.

Dr. Norberto Javier de la Mata Barranco

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, Bilbao, España



En su intervención hizo referencia al modelo del cumplimiento normativo sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, señaló que debe verse esa responsabilidad dentro de las actuaciones y actividades que le son propias a esa persona jurídica, el cual es un modelo de autorresponsabilidad. Además, planteó ideas para la organización de las empresas en aras de evitar la comisión de actividades delictivas.

Dr. C. Mayda Goite Pierre

Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Habana



Durante su intervención se refirió a la sociedad de riesgo y al programa *Compliance* o cumplimiento, a partir de una mirada desde la criminología. Señaló los antecedentes del tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Cuba y la evolución de las estructuras económicas y sociales al respecto. Manifestó que la responsabilidad de las personas jurídicas va en el camino de la necesidad de introducir en cada momento cuáles son las figuras delictivas que atañen a estas personas, atendiendo a sus propias características. Manifestó las particularidades de la sociedad y economía cubana actual, que representan riesgos y retos a tener en cuenta por el Derecho.

VÍA DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS



*Puede contactarnos desde cualquier
municipio o provincia del país.
Las 24 horas, todos los días.*



las diversas aristas del **Derecho**

Un variado programa científico tuvo el XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad. Durante sus sesiones se realizaron intervenciones especiales y paneles, y se presentó una amplia cantidad de ponencias.

En las tres jornadas de trabajo, fiscales, profesores, jueces, estudiantes, catedráticos y juristas de diversos países discutieron sobre temáticas de gran actualidad y de medular importancia para el contexto nacional e internacional.

1.^a jornada

En la primera jornada de Ciencias Penales 2018 se presentó la experiencia italiana en la recuperación de activos y enfrentamiento a la delincuencia organizada; se debatió sobre el papel que desempeñan el Estado, la sociedad y el Derecho en la lucha contra la corrupción en Panamá; especialistas cubanos presentaron trabajos sobre las negociaciones ilícitas en Cuba, el control de los procesos penales asociados a la corrupción derivados de la contratación internacional y reflexionaron en torno al delito de malversación en el Código Penal cubano a la luz de los postulados doctrinales.

También se presentó el panel “El interés superior del menor: una visión multidimensional” en el que se analizaron apuntes para un estudio sobre el Derecho de Familia y la figura de la adopción en Cuba y se realizó una mirada crítica del matrimonio de los menores de edad. Además, se debatió sobre la guarda, cuidado y comunicación con los hijos menores de edad tras el divorcio o separación de los padres.

De igual forma, se presentaron los paneles “Perfiles jurídicos de la responsabilidad”, sobre las responsabilidades contractual, ambiental y administrativa; “Envejecimiento poblacional: entre la vulnerabilidad y el Derecho” en el que se

analizó la contribución de la Fiscalía cubana a la protección a las personas de la tercera edad ante el envejecimiento poblacional en el país, así como los mecanismos tutelares para el adulto mayor en el ordenamiento jurídico cubano.

En los paneles “Género, Derecho y prevención de la violencia” y “Delitos sexuales en Panamá y sus consecuencias”, los presentes intercambiaron respecto a los derechos sexuales y la violencia de género, la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, inclusión de las perspectivas de género en la investigación y juzgamiento en Argentina.



2.ª jornada

Tras las intervenciones especiales, el segundo día del evento científico inició con una ponencia sobre la presunción de inocencia en la ejecución provisional de la pena en Brasil y los impactos de la oscilación jurisprudencial.

Le siguió el panel “Fundamentos criminológicos para el enfrentamiento a nuevas formas delictivas”, en el que se debatió sobre la prevención de la criminalidad informática, la trata de personas, la criminología mediática, el enfoque criminológico del lavado de activos en actividades ilícitas, los testaferreros en delitos económicos

y la corrupción privada como interrogante criminológica o presupuesto sustantivo.

En otra de las comisiones los participantes comentaron sobre los delitos económicos y funcionariales en el Derecho Penal panameño, la prescripción tributaria en el delito fiscal, y las experiencias y retos internacionales de la mediación en materia civil y mercantil. También se presentó el panel “Prevención y enfrentamiento en Cuba al fenómeno de la prostitución, la trata de personas y las drogas, y sus efectos nocivos para la salud”.



Jornadas para **FORTALECER LA INTEGRACIÓN**

*Reunión del Comité Ejecutivo de
la AIAMP*

Foro internacional de la COMJIB

Durante Ciencias Penales 2018 resultó trascendente el desarrollo, en paralelo, del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que sesionó el día 15

de marzo. El encuentro, preparatorio para la XXVI Asamblea General Ordinaria de la asociación, sirvió de tribuna para llamar a la integración de las fiscalías y pueblos de las 21 naciones que conforman el mecanismo.

En el encuentro participaron representantes del Comité Ejecutivo, el cual está integrado por la Procuraduría General de la República de Panamá, la Fiscalía General de Cuba, la Procuraduría General de la República de Portugal, la Fiscalía Nacional de Chile, la Fiscalía General del Estado del Reino de España y la Procuraduría General de la República Mexicana.

Kenia Porcell, máxima representante de la procuraduría de Panamá y Presidenta de la AIAMP, ofreció detalles de las acciones que efectuará el mecanismo en la etapa precedente, así como propuestas para implementar con vistas a la Asamblea General Ordinaria.



Por su parte, el Fiscal General de España expuso un grupo de iniciativas que contribuirán a una mayor concreción en la cooperación jurídica y el intercambio entre los Ministerios Públicos de Iberoamérica.

En su condición de Vicepresidente de la AIAMP, Darío Delgado Cura, agradeció la presencia en el país de las fiscalías y ministerios públicos de la región, como participantes en el encuentro internacional y en la reunión del Comité Ejecutivo de la asociación. El máximo representante de la Fiscalía cubana reflexionó acerca de la necesidad de la unidad y recordó las palabras del General de Ejército Raúl Castro en la II Cumbre de la Celac, cuando se refirió a la unidad dentro de la diversidad.

Exitosa fue esta reunión, en la que sus participantes abogaron por la integración de las fiscalías y procuradurías de la región para alcanzar mejores resultados en la práctica del Derecho. Con la premisa de “construir y luchar por sistemas jurídicos que sean auténticos, no importados, que se parezcan a nuestras realidades, y con capacidad de integración y cooperación para hacer frente con eficacia a los fenómenos sociales y retos que nos ocupan”, tal y

como refirió el Fiscal General de Cuba en su discurso de apertura.

En la sesión final de Ciencias Penales también sesionó el Foro Internacional de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), donde se abordaron estrategias para la prevención de la violencia. Participaron magistrados de España, Honduras, Chile y representantes de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia de Cuba.

Arkel Benítez Mendizabal, secretario general de la COMJIB, manifestó que Cuba es un ejemplo en este sentido, especialmente en la protección de los menores de edad y mujeres.



NUEVOS PUENTES DE COOPERACIÓN

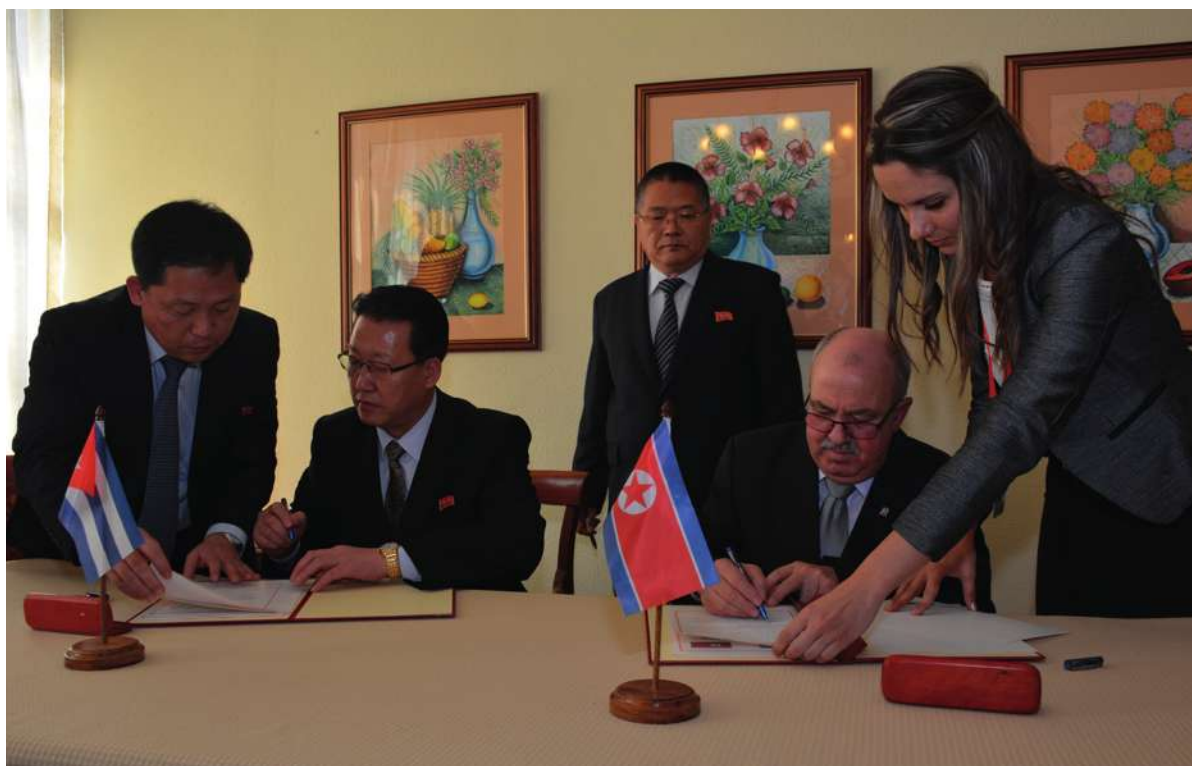
Un saldo positivo en materia de fortalecimiento de las relaciones internacionales tuvo el XIV Evento Internacional Ciencias Penales y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad. Previo y durante este espacio, la Fiscalía cubana firmó y actualizó instrumentos de cooperación interinstitucional con ministerios públicos, fiscalías y procuradurías generales.

Fueron suscritos seis acuerdos o memorandos de entendimiento con

la República Popular Democrática de Corea, Grecia, Hungría, Kazajstán, Lao y Venezuela, además, se actualizaron cuatro programas de actividades con Bolivia, España, Portugal y Venezuela, que fijan acciones concretas para venideros períodos. Con ello, asciende a veinte el número de acuerdos firmados con órganos homólogos.

El Fiscal General de la República de Cuba sostuvo encuentros con representantes de 19 de las delegaciones participantes en el evento científico. Los intercambios permitieron repasar la agenda bilateral con los órganos homólogos y, en otros casos, formalizar nuevos vínculos de trabajo y relaciones de cooperación.

Se debatieron temas de interés común y asuntos vinculados a la cooperación jurídica internacional. Los diálogos se materializaron en un clima de respeto y consideración a la labor de la Fiscalía General y, fundamentalmente, de reconocimiento a Cuba.



Como parte de las actividades colaterales, delegaciones participantes tuvieron la oportunidad de realizar intercambios académicos y conocer sobre diversos ámbitos de actuación de la Fiscalía cubana.

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, ante el claustro de profesores y estudiantes de la carrera de Derecho.

Las representaciones de Angola, Hungría y Grecia visitaron la Fiscalía Provincial de Matanzas y la especial de Varadero, donde conocieron sobre el trabajo del órgano en esos territorios.

La delegación húngara también visitó las provincias de Santi Spíritus y Villa Clara, en esta última intercambió con el Consejo de Dirección de la Fiscalía y recorrió el Memorial Ernesto Che Guevara y el Tren Blindado, espacios de alto valor histórico para el territorio y Cuba.

Porsu parte, los representantes de Grecia visitaron y sostuvieron un encuentro con las autoridades del Centro de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio del Interior, interesándose por las buenas prácticas que en este lugar se desarrollan.

La Fiscalía Provincial de La Habana acogió a la delegación de Belarús, cuyos integrantes pudieron apreciar la complejidad del trabajo que desarrollan los fiscales de la capital.

Este amplio programa de actividades derivado de Ciencias Penales posibilitó que los visitantes conocieran la labor de la fiscalía cubana y otras instituciones, sus

sistemas de trabajo y los resultados en diversas aristas del Derecho y la protección de los ciudadanos, en especial de los menores de edad.



CONVOCATORIA

XV ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2020 Y III EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

La Fiscalía General de la República de Cuba convoca al XV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2020 y III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, en marzo de 2020.

Ambos encuentros se realizarán con el coauspicio de la Unión de Juristas de Cuba, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el Tribunal Supremo Popular, la Organización de Bufetes Colectivos y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.

La convocatoria está dirigida fundamentalmente a fiscales, procuradores, abogados, jueces, policías, penitenciaristas, criminalistas, criminólogos, victimólogos, médicos legistas, psiquiatras forenses, funcionarios que atienden menores de edad víctimas y con trastornos de conducta, psicólogos, sociólogos, contralores, auditores, economistas, asesores jurídicos, profesores y estudiantes universitarios, entre otros especialistas interesados en la materia.



Principales ejes temáticos:

- Enfoque técnico jurídico de los delitos transnacionales. Medidas para su prevención y enfrentamiento
- Delitos económicos y funcionariales
- El Ministerio Público y el Sistema Judicial en el enfrentamiento a la corrupción
- Ciberdelito
- Terrorismo
- Lavado de activos y cooperación jurídica internacional
- Tutela penal del medio ambiente
- La ejecución de la pena en las personas privadas de libertad
- Responsabilidad penal de la persona jurídica. Retos de la sociedad contemporánea
- Estado, Sociedad y Derecho en la lucha contra la corrupción
- Género, Derecho y prevención de la violencia
- Protección integral de la infancia
- Relaciones paterno filiales y función tutelar del Estado
- Leyes migratorias y minoridad
- El fortalecimiento del rol del Estado como garantía de una gestión pública eficaz
- El control de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica ciudadana.

Los trabajos deberán enviarse al Comité Organizador antes del 10 de enero de 2020 para la revisión y selección de las ponencias que conformarán el programa del evento. El no resultar seleccionado para formar parte del programa científico, no excluye la posibilidad de que el autor participe como delegado.

El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar los trabajos por interés temático o institucional. La autoría de las ponencias podrá ser individual o colectiva. Su extensión no excederá las 30 cuartillas. Incluirá un resumen de hasta 250 palabras.

Se precisará el nombre y apellidos del autor o autores, el grado científico o académico, título de la ponencia, institución a la que pertenece, ciudad y país de residencia, fax, e-mail y teléfonos. Se empleará procesador de texto Word, versión 6.0 o superior.

Para asegurar la inclusión de los trabajos en el programa científico y las memorias del evento, deben enviarse en versión electrónica a las direcciones siguientes: relaciones@fgr.gob.cu / patria@fgr.gob.cu.



“Ser los fiscales que nuestro pueblo y la REVOLUCIÓN necesitan”



Lisbet Pavón Marchado, fiscal jefe municipal de Puerto Padre, Las Tunas, y joven que ascendió al Turquino, en nombre de los presentes señaló: *“En el año del aniversario 45 de la Fiscalía General de la República, los jefes de todas las estructuras organizativas, en nombre de nuestros trabajadores, ratificamos el compromiso de superación, de no dejar nunca de luchar y de creer, de construir y de vencer, ser los fiscales que la sociedad quiere, pero más aún, llegar a ser los fiscales que nuestro pueblo y la Revolución necesitan”.*

Reunión Nacional de la Fiscalía General de la República

“Defender la Revolución desde el Derecho” fue el llamado del Fiscal General de la República, durante la Reunión Nacional de la Fiscalía General de la República (FGR), que sesionó los días 20 y 21 de febrero, en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la participación del Consejo de Dirección de este Órgano, los fiscales jefes provinciales y municipales de todo el país, fiscales jefes de las fiscalías militares regionales y jubilados de la institución en diversos territorios.

El 70% del auditorio eran jóvenes menores de 35 años de edad y el 73% mujeres, muestra de la composición de la Fiscalía, donde la mayoría de los cargos de dirección son asumidos por féminas.

Con el homenaje al Héroe Nacional José Martí, en el aniversario 165 de su nacimiento, inició la primera jornada, al colocar una ofrenda floral al Apóstol en su estatua en la Plaza 13 de Marzo.

Merecido reconocimiento se brindó a los 56 jóvenes de todos los órganos del país que formaron parte del destacamento que ascendió al Pico Turquino.

A continuación, se presentaron los resultados de trabajo del año 2017, mediante un video informe, con muestras del quehacer del Órgano Central y las fiscalías provinciales y municipales, en cada una de las especialidades.

Punto esencial en esta reunión nacional fue la presentación, por parte de la fiscal jefe de la dirección de Información y Análisis,

actual Vicefiscal General, de la implementación de las recomendaciones realizadas al Órgano por los diputados en diciembre de 2017, como continuación del proceso de rendición de cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Fructíferos debates efectuaron los participantes en sesiones plenarias y en talleres. Espacio de gran relevancia resultó el taller sobre la ética en la FGR, teniendo como eje principal el comportamiento ético de los fiscales y trabajadores de esta institución para el cumplimiento de sus funciones. La ética resulta elemento esencial en la labor diaria de quienes integran esta institución, lo que cobra especial relevancia tras el llamado que nos hiciera el General de Ejército Raúl Castro Ruz, durante la clausura del X Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la ANPP, cuando manifestó: *“(...) debe exigirse a sus integrantes un comportamiento ético y el compromiso invariable con el pueblo y la Revolución.”* Este es el compromiso que tienen todos los trabajadores de este Órgano en su quehacer diario.

Estas fueron dos jornadas para intercambiar acerca del trabajo realizado, un alto en el camino para reflexionar sobre qué debemos hacer mejor y qué más nos falta para cumplir nuestra misión de velar por la defensa de la legalidad con y para el pueblo.

En la reunión participaron Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado; Gladys Bejerano Portela, contralora general; María Esther Reus González, ministra de Justicia; Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación; Dulce María Iglesias Suárez, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública; Alexis Ginarte Gato, presidente de la Unión Nacional de Jurista de Cuba (UNJC). Además, asistieron representantes de la Federación de Mujeres Cubana, el Tribunal Supremo Popular, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la Central de Trabajadores de Cuba, el Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas, con quienes la institución tiene establecidas relaciones de trabajo.



¿Qué debatimos en cada taller?



TALLER SOBRE PROCESOS PENALES: cumplimiento y control de los términos en los procesos penales, papel de los fiscales jefes municipales y efectividad de la supervisión en todos los niveles del Órgano.



TALLER SOBRE LOS RETOS DE LA INFORMACIÓN, INFORMATIZACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: experiencias de la Fiscalía cubana en relación con estas ciencias.



TALLER SOBRE PREVENCIÓN Y ENFRENTAMIENTO A LA PROSTITUCIÓN, PROXENETISMO Y DROGAS: tendencias de la prostitución, el proxenetismo y las drogas, su mejor prevención y enfrentamiento, vínculo con el alcohol y otras manifestaciones asociadas.

TALLER SOBRE EL PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO FUNCIONAL, DE ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN EN LA FGR: actualización del proceso de perfeccionamiento que realiza la Fiscalía General de la República.



TALLER SOBRE EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS (SAC) EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNA VISIÓN DESDE LA INTEGRACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES. TAREAS DE IMPACTO CON ESTUDIANTES DE DERECHO: labor del Fiscal jefe municipal en el perfeccionamiento del SAC (inserción en el programa para el desarrollo de las zonas montañosas, costeras y de difícil acceso y el trabajo con la familia). Experiencias durante el paso del huracán Irma y en la etapa recuperativa. El papel del Fiscal jefe municipal en la protección de los menores de edad y como garante de los derechos laborales de los sancionados. Plan de acción para incrementar la calidad de la actuación de los fiscales en la tramitación de quejas y reclamación en la especialidad de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios.



www.fgr.gob.cu/El Ciudadano

Un espacio para el CONTACTO DIRECTO de
los CIUDADANOS con la
Fiscalía General de la República

RUMBO A LA HISTORIA

“Llegamos a la cima de lo más alto en la Sierra Maestra para desde ahí reafirmarnos como cubanos y jóvenes comprometidos con la más genuina de nuestras raíces” (Frank Rodríguez Samón, Órgano Central)

Hermosos parajes, vistas inimaginables, flora como nunca antes disfrutaron. Pero los músculos se tensaban y los pies dolían a cada paso. El camino intrincado, angosto, casi interminable, no les permitía deleitarse. Los carteles, marcando la distancia que quedaba por recorrer, no ayudaban. Pero se impuso la ayuda y la solidaridad,

esa que brota especialmente en la adversidad. El instinto de no dejar a nadie, incluso sin conocerse, sin haber intercambiado palabra. Todos se crecieron, la misión era una: subir el Turquino, todos. Y lo lograron, por primera vez.

Esta fue la hazaña del destacamento de 56 jóvenes de todas las provincias, que en saludo a igual aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y a los 45 años de creada la Fiscalía tocaron las nubes en la elevación más alta de nuestro país: el Pico Real Turquino.



Es el cuarto año consecutivo que jóvenes de la Fiscalía realizan este viaje, siempre coincidiendo la cantidad de participantes con el aniversario de la UJC. La composición del grupo es variada: fiscales, informáticos, comunicadores, psicólogos, especialistas en ciencias de la información, economistas y otros especialistas de cada provincia, el Órgano Central y la Fiscalía Militar.

El periplo se extendió desde el día 16 hasta el 18 de febrero, y tuvo como resultado inolvidables vivencias, el encuentro con nuestra historia y la visita a lugares imprescindibles para los cubanos.

El destacamento fue abanderado en el municipio Bartolomé Masó, en Granma, con la presencia de las autoridades del territorio.

Quienes se enrolaron en esta travesía tuvieron la oportunidad de conversar con los pobladores de La Platica, comunidad enclavada en la Sierra Maestra, acerca de diversos temas de interés, siempre sobre la base de la prevención.

También visitaron la Comandancia de La Plata, el cementerio Santa Ifigenia y Birán, experiencias únicas que los acercaron a las raíces de nuestro país.

Esta actividad, que se ha tornado tradición, es una muestra de la atención que presta la Fiscalía General de la República a los jóvenes, y contribuye a su preparación política-ideológica y conocimiento de la historia de Cuba.



Recibimiento en Granma



En la comunidad La Platica



Homenaje al Comandante en Jefe en el cementerio Santa Ifigenia



En Birán, Holguín, lugar de nacimiento de Fidel y Raúl

Los JÓVENES TIENEN LA

PALABRA

Con información de las
fiscalías provinciales

El aniversario 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 57 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) resultó en una gran fiesta para la Fiscalía General de la República, cuyos integrantes realizaron variadas actividades como festejo por estas organizaciones que aúnan a niños y jóvenes cubanos.

Las fiscalías provinciales de todo el país celebraron junto a las nuevas generaciones, visitaron lugares históricos, hogares para niños sin amparo familiar y hospitales, realizaron donaciones de sangre y trabajos voluntarios, y compartieron junto a los integrantes de los círculos de interés. La alegría se extendió a cada espacio, celebraciones que se venían realizando desde el ascenso de un grupo de jóvenes al Pico Turquino en saludo a la fecha.

Compartimos muestras de la alegría y compromiso que se multiplicaron en cada uno de estos espacios.

Con inigualable visión de futuro, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro expresó en 1962: “... las revoluciones no trabajan para hoy, trabajan para mañana y los jóvenes son el mañana, y la vida de ellos es el mañana”. Es así que la celebración el 4 de abril, de los aniversarios de estas dos organizaciones que aúnan en sus filas el futuro de Cuba, cobra vital importancia.

CIENFUEGOS

El Comité de Base de la UJC de la Fiscalía Provincial de Cienfuegos sostuvo un intercambio con los militantes de la Dirección Provincial de Justicia y de la Refinería de Petróleo “Camilo Cienfuegos”. Ello permitió el acercamiento al trabajo de los centros de cada uno de los participantes, así como a las realidades comunes de todos.

También como homenaje a un eterno joven, en el año que celebramos el aniversario 90 del natalicio de Ernesto Guevara, jóvenes de las fiscalías cienfuegueras visitaron la vecina provincia Villa Clara, para rememorar la fructífera vida del Che desde la Loma del Capiro y el Tren Blindado.

Los pioneros también vivieron intensas jornadas, con la celebración del III Encuentro Provincial de Círculos de Interés “Pequeños Fiscales”.



CIEGO DE ÁVILA

Celebrando los aniversarios de la UJC, la OPJM y el 45 de la Fiscalía General de la República, treinta trabajadores de la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Municipal de Ciego de Ávila, entre ellos militantes de la organización juvenil y el Partido Comunista de Cuba, dedicaron una jornada de trabajo productivo en la Unidad Empresarial de Base Piña, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Ceballos.

De igual forma, los colectivos de estos órganos realizaron un trabajo voluntario en la institución e intercambiaron con los pioneros.



CAMAGÜEY

Los trabajadores de Camagüey también de manera voluntaria contribuyeron con su trabajo a importantes tareas en el organopónico “Tínima”, demostrando el espíritu de nuestra juventud en su aniversario.

También efectuaron otras actividades con los pioneros que forman parte del círculo de interés “Pequeños fiscales”. Los integrantes del Comité de Base del órgano municipal de Camagüey visitaron el Hospital Pediátrico “Eduardo Agramonte Piña”, en el cual intercambiaron con los niños hospitalizados.



MAYABEQUE

Los trabajadores de la Fiscalía Provincial de Mayabeque realizaron un cambio de labor y en función de contribuir a la economía del país participaron en la recogida de papa en la Cooperativa de Producción Agropecuaria “Amistad Cubano- Búlgara”. Fue una jornada provechosa en la que reinó la alegría y el compromiso.

También en este día, miembros del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, compartieron con niños y adolescentes internos en el hogar de niños sin amparo familiar del territorio.

MATANZAS

La Fiscalía matancera realizó disímiles actividades en la que participaron estudiantes y profesores de la escuela primaria Leonor Pérez Cabrera, entre ellos los integrantes del círculo de interés que atiende el órgano provincial.

Como parte de la conmemoración se reconocieron a jóvenes destacados de las fiscalías provincial y municipal, quienes conforman el Comité de Base del centro.

Se escucharon palabras de compromiso en la voz de la joven fiscal Guadalupe Borrego Fernández. Primó la alegría por la celebración del aniversario de la OPJM y la UJC.



SANTIAGO DE CUBA

Jóvenes de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba visitaron el cementerio patrimonial Santa Ifigenia donde rindieron tributo a nuestros héroes y mártires.

Además, militantes de la UJC y otros trabajadores realizaron donaciones de sangre en saludo a la fecha, con el lema: su aporte importa, ayudemos a salvar vidas.

La Dirección del Comité Provincial de la UJC reconoció al Comité de Base de la Fiscalía santiaguera, con la entrega de la bandera distintiva de la organización.

GRANMA

Militantes de la UJC y del Partido intercambiaron experiencias en la Fiscalía Provincial de Granma, y compartieron con niños, también celebrando el aniversario de la OPJM.



LA HABANA

Las fiscalías municipales de La Habana se incorporaron a los festejos por los aniversarios de la UJC y la OPJM con actividades para los infantes y adolescentes que se encuentran en casas de niños sin amparo filial y en escuelas de conducta y de formación integral en el territorio.

Además, los jóvenes de la sede provincial visitaron el Memorial Celia Sánchez en el Parque Lenin, en el que reafirmaron su convicción revolucionaria y participaron de un recorrido por el lugar histórico.

También una representación de las nuevas generaciones de la Fiscalía habanera visitó la sala de Pediatría del Hospital Oncológico, en el que compartieron con los pequeños.



VILLA CLARA

Por el aniversario de la organización de los más pequeñitos, la Fiscalía Provincial de Villa Clara realizó el Evento Provincial de Círculos de Interés “Pequeños fiscales”, con la participación de los familiares de los pioneros y una representación de los profesores.

La jornada del 4 de abril concluyó con la subida a la emblemática Loma del Capiro, Monumento Nacional del territorio que constituye sitio histórico de alto valor, decisivo en el triunfo de la Batalla de Santa Clara y para el posterior triunfo de la Revolución en enero de 1959. Este espacio sirvió para la reafirmación del compromiso de los pioneros con la OPJM en su aniversario.

El Consejo de Dirección de la Fiscalía villaclareña, de conjunto con los comités de base de la Fiscalía provincial y la Fiscalía municipal de Santa Clara y otros jóvenes trabajadores, rindieron homenaje al Guerrillero Heroico en la estatua erigida en la sede del Comité Provincial del Partido. El grupo también visitó el Museo Casa Abel Santamaría, del municipio Encrucijada, como homenaje a este joven en el cual Fidel depositó su total confianza y lo nombró segundo jefe del Movimiento 26 de Julio.

Posteriormente, realizaron un recorrido por el Consejo Popular Emilio Córdoba, en

la propia localidad, que resultó de los más afectados por el huracán Irma, donde intercambiaron con los pobladores y conocieron de las transformaciones tras la recuperación, así como el trabajo que aún se acomete por el Partido y el Gobierno para continuar mejorando las condiciones existentes.



SANCTI SPÍRITUS

La Fiscalía espirituana se sumó a la celebración con actividades para sus trabajadores, sus hijos y los pioneros integrantes del círculo de interés “Pequeños fiscales” del territorio, a quienes regalan una fiesta.



ÓRGANO CENTRAL

Los jóvenes del Órgano Central para celebrar el aniversario de la UJC, el 4 de abril, ascendieron la Loma del Taburete, situada en Artemisa, donde recordaron al Guerrillero Heroico en el año en el que se conmemora el aniversario 90 de su natalicio. Fue una jornada de profundo significado histórico, donde demostraron su júbilo, responsabilidad y compromiso.

El día anterior, el grupo fue abanderado con la insignia nacional, la bandera de la UJC y del Órgano, por el Fiscal General de la República, un miembro del Comité Nacional de la UJC y las secretarías generales de la or-

ganización en La Habana y el municipio Playa. También los jóvenes realizaron donaciones de sangre y una jornada de trabajo voluntario.



un **ORGULLO** para **LA FISCALÍA**

El domingo 21 de enero de 2018, las asambleas municipales del Poder Popular de Cuba, en sesión extraordinaria, nominaron a 605 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y a delegados a las asambleas provinciales. Estos fueron elegidos en los comicios generales en los que participamos los cubanos el 11 de marzo.

Constituye un orgullo para la Fiscalía General de la República que quince de nuestros trabajadores, provenientes de disímiles órganos provinciales y municipales, fueran seleccionados como candidatos a diputados y a delegados de las asambleas provinciales.

Tan solo su nominación resultó un honor para ellos y la institución, es un reflejo del compromiso, lealtad y valores humanos y profesionales de quienes laboran en la Fiscalía, además de una muestra del trabajo realizado en sus comunidades, municipios y provincias.

Les presentamos a quienes al ser elegidos tienen el reto de continuar con la Revolución y seguir fortaleciendo nuestra nación en cada espacio.

Diputados:

- Yoraida Núñez Bello, *vicefiscal jefe provincial de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba*
- Yenisey González Rodríguez, *fiscal jefe del departamento de Formación y Desarrollo, Fiscalía Provincial de Granma*

Delegados:

- Lisnay M. Mederos Torres, *fiscal jefe provincial de Villa Clara*
- Lázaro Guzmán Díaz, *fiscal jefe provincial de Pinar del Río*
- Roberto Ramos Delgado, *fiscal jefe provincial de Matanzas*
- Idelsys Martínez Laurencio, *fiscal jefe provincial de Camagüey*
- Barbarita Pacheco Fonte, *fiscal jefe provincial de Sancti Spíritus*
- Elda Barreiro Faraldo, *fiscal jefe provincial de Holguín*
- Maritza Paredes Pera, *fiscal jefe provincial de Santiago de Cuba*
- Kirenía Vizcay de la Cruz, *vicefiscal jefe provincial de Cienfuegos*
- Linet Charles Sotero, *fiscal de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba*
- Lilibet Zaldívar Mulet, *fiscal de la Fiscalía Municipal de Colombia, Las Tunas*
- Raquel Tombinson Ruiz, *fiscal de la Fiscalía Municipal de Jatibonico, Sancti Spiritus*
- Lisandra Columbié Brooks, *fiscal jefe municipal de El Salvador, Guantánamo*
- Juan M. Fuentes Guisado, *fiscal jefe del departamento de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios, Fiscalía Provincial de Granma*
- Luis V. Arzuaga Arjona, *auditor, Fiscalía Provincial de Granma*

Yoraida Núñez Bello, vicefiscal jefe provincial de Santiago de Cuba, fue seleccionada como parte de la Comisión Parlamentaria para la Reforma Constitucional, la que preside Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y que integran otros 31 diputados. Esta comisión fue la encargada de la redacción del anteproyecto de Constitución de la República, su composición fue dada a conocer el 2 de junio de 2018 por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Preparación INTEGRAL

La diversificación de las relaciones internacionales de la Fiscalía General de la República ha posibilitado la participación de especialistas de la institución de todo el país en cursos, encuentros y disímiles actividades de intercambio de experiencias y capacitación con órganos homólogos y otras instituciones.

Un momento importante resultó la quinta edición del curso de recalificación para Cuadros de Dirección en la Academia de la Fiscalía General de Rusia, en el cual participaron, del 14 de mayo al 9 de junio, diez especialistas del Órgano Central, las fiscalías provinciales, la Fiscalía Municipal de la Isla de la Juventud y la Fiscalía Militar.

Este curso forma parte del Programa de Cooperación 2017 -2018 rubricado entre la fiscalía cubana y la rusa. Según señaló en la inauguración del curso el embajador de nuestro país en Rusia, Gerardo Peñalver Portal, con este grupo suman cincuenta los altos dirigentes del sistema de órganos de la Fiscalía General de la República que participan en dicha recalificación, lo que representa un paso importante en el fortalecimiento del prestigio y el profesionalismo de las autoridades judiciales de nuestro país. Por su parte, la rectora de la universidad de la Fiscalía de Rusia, Oksana Kápinus, en sus palabras de bienvenida, señaló que ya se ha convertido en una positiva tradición la preparación de cuadros de la fiscalía cubana.

Del 7 al 11 de mayo, fiscales de procesos penales y de protección a la familia y asuntos jurisdiccionales asistieron al curso de investigación de criminalidad transnacional, en el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP), en México.

Del 27 al 31 de agosto, los fiscales Daira Lescay Bridón, del Departamento de Procesos Penales de Santiago de Cuba y Robert Matos Yadid, asistente del Vicefiscal General, participaron en el curso “Corrupción y Delincuencia Organizada”, impartido por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, situado en Querétaro, México.

De igual forma, la Vicefiscal General Alina Montesino Li asistió, del 15 al 19 de mayo, al encuentro “Justicia digital: prioridad para los gobiernos, mejor servicio para la sociedad”, en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Cartagena de Indias, Colombia.



Vicefiscal General
Alina Montesino Li

Otro espacio trascendental resultó la participación del fiscal jefe de la dirección de Atención al Ciudadano de la Fiscalía General, Rafael Soler López, en la discusión del examen periódico universal (EPU) de Cuba ante las Naciones Unidas.



Pedro Pablo Cutiño Diéguez en Italia (señalado)

El fiscal jefe de la dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Illegalidades de la Fiscalía General, Pedro Pablo Cutiño Diéguez, fue parte del curso de desarrollo de capacidades para oficiales de los estados miembros de la Caricom, Cuba y República Dominicana, en el que abordaron las técnicas de investigación sobre economía ilícita y flujos financieros, que se realizó en Italia, del 4 al 15 de junio.

Especialistas de la Fiscalía General, entre ellos fiscales, cientistas de la información e informáticos, tuvieron la oportunidad de participar en un curso de preparación en Kazajstán, en virtud del Memorándum de Entendimiento Bilateral, suscrito en el marco del XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2018 entre las fiscalías de ambos países.

En el mes de julio, el fiscal jefe de la dirección de Cuadros de la Fiscalía General de la República, Antonio Castro Galán, asistió al seminario sobre sistema integral de preparación y trabajo de los cuadros, en la República Popular China, auspiciado por la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno de Cuba.

Del 10 al 17 de julio, una delegación compuesta por fiscales de la Fiscalía General de la República y encabezada por la actual Fiscal General Yamila Peña Ojeda, visitaron el Estado Plurinacional de Bolivia para

intercambiar experiencias sobre temas relacionados con la protección de los derechos e intereses legítimos del ciudadano.

También, por una invitación del Ministerio de Informática y Comunicaciones, dos especialistas de la Fiscalía General de la República participaron en cursos de preparación en China. El primero de ellos, en los meses de junio y julio, Daniel Mateo Medina, ingeniero en Telecomunicaciones, asistió a la preparación sobre redes de información y comunicación. Mientras, en el mes de agosto, el segundo jefe de la dirección de Informática y Comunicaciones, Javier Alfonso Valdés, participó en el curso sobre diseño, desarrollo e implementación práctica del gobierno y comercio electrónico.



Delegación que visitó Bolivia

CUESTIÓN DE CONTINUIDAD

La Fiscalía General de la República realizó el acto de entrega de responsabilidades del cargo de Fiscal General de la República de Cuba y toma de posesión de los vicefiscales generales, el 6 de agosto. Continuidad y unidad fueron las palabras imperantes en este espacio, que se traducirán en hechos por quienes asumieron sus cargos y aquellos que los acompañarán en su gestión.

Según acuerdos adoptados el 14 de julio del presente año, se liberó como parte de un proceso natural de renovación, de su condición de Fiscal General de la República a Darío Delgado Cura y se designó para tales efectos a Yamila Peña Ojeda, quien hasta el momento se desempeñaba como Vicefiscal General. El proceso fue informado por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Mario Díaz- Canel Bermúdez, en su discurso clausura

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 22 de julio de 2018.

Yamila Peña resulta la primera mujer en ocupar el cargo de Fiscal General de la República, y le antecede una vasta experiencia profesional y como cuadro de dirección. Toda su vida laboral la ha realizado en la Fiscalía General, transitando desde el municipio hasta el Órgano Central y ha ocupado diversos cargos de dirección en todos los niveles.

Darío Delgado Cura manifestó que Yamila es “la mejor expresión de nuestras mujeres fiscales y no fiscales”, que en el Órgano constituyen el 80%. Además, reconoció la trayectoria y condiciones morales, profesionales y personales, y la preparación de la nueva Fiscal General. Exhortó a los trabajadores a continuar el trabajo y auguró que ella va a superar los resultados obtenidos hasta el

Yamila Peña Ojeda y Darío Delgado Cura firman entrega de responsabilidades





momento, con el apoyo de todos. Agradeció a los presentes por la labor realizada durante su gestión y señaló que cualquier resultado alcanzado fue producto del trabajo colectivo.

Por su parte, Yamila Peña Ojeda señaló que este no era un proceso de cambio sino un proceso de continuidad y citó el concepto de Revolución enunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

También como parte del acto, Alina Montesino Li y Marcos Antonio Carballo de la Rosa tomaron posesión de sus cargos de vicefiscales generales de la República, quienes reafirmaron su compromiso con los postulados del Código de Ética de los cuadros y trabajadores de la Fiscalía General de la República. Ellos se unen a Carlos Concepción Rangel y Juan Raudel

Rissell Collazo quienes también se desempeñan como vicefiscales generales.

Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Fiscalía General de la República, fue entregada a Darío Delgado Cura la Toga al Mérito, reconocimiento instituido por este órgano para trabajadores y personalidades por sus excepcionales aportes a la Fiscalía.

Se señaló que la primera de estas togas fue recibida por Delgado Cura

como reconocimiento a su labor, a los aportes realizados a la institución y a la Revolución.

En el acto participaron Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado; Regla Ochoa Laborde, jefa de departamento en la dirección de Cuadros del Estado y del Gobierno e Iván Ernand Collazo, funcionario del Consejo de Estado, también miembros del Consejo de Dirección Ordinario del Órgano, fiscales jefes provinciales de siete territorios, jefes de departamentos y representantes de las organizaciones. A este momento le siguió un intercambio con todos los trabajadores de la sede central.



BREVES

Convenio de trabajo entre la Fiscalía y Joven Club



Nuevas puertas para el trabajo conjunto y el desarrollo se abrieron cuando Darío Delgado Cura, Fiscal General de la República, y Raúl Vantroy, director general de los Joven Club de Computación y Electrónica, firmaron un convenio de colaboración entre las instituciones que ambos representan, en el marco de la Feria Informática 2018. La acción fue parte de la visita del Fiscal General a esta feria expositiva que se realizó en Pabexpo, en La Habana.

Posteriormente, el 30 de abril, se rubricó el programa de trabajo de la Fiscalía General de la República con los Joven Club de Computación y Electrónica, en la Reunión Nacional de la Dirección de Comunicación.

El convenio y las acciones contenidas en el programa facilitarán la preparación de los trabajadores de la Fiscalía en informática, redes sociales y otras temáticas similares, y la capacitación de los integrantes de los Joven Club en cuestiones vinculadas al Derecho. También permitirá aunar saberes y recursos para proyectos conjuntos en pos de la educación jurídica del pueblo y otros de beneficio social.

Las fiscalías provinciales y las direcciones provinciales de los Joven Club han establecido convenios para el trabajo mancomunado en los territorios, a partir de lo establecido en el convenio general y las particularidades y necesidades de cada provincia.

Mayor vínculo con la FMC

Las fiscalías provinciales de Villa Clara y Holguín firmaron convenios de colaboración con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en sus territorios. Este paso coadyuvará a solidificar las relaciones de trabajo existentes entre dichas instituciones, con un empeño particular en la capacitación para perfeccionar el trabajo en materia legal de la organización de mujeres y la labor de la Fiscalía en los asuntos a tratar.

De ambas partes está vigente el compromiso por apoyar las labores preventivas que desde cada campo de acción desarrollan en el tratamiento a temáticas tan sensibles como la violencia de género, la trata de personas, la prostitución y el proxenetismo. De igual forma, se establecieron vínculos de trabajo con las oficinas especializadas del Partido, el Poder Popular, el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior, lo cual permite atender de manera integral los casos reiterantes y de mayor complejidad.

Fiscalía holguinera estrecha lazos con universidad provincial

El 19 de junio, la Fiscalía Provincial de Holguín firmó un convenio de colaboración con la Universidad del territorio y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de ese centro. Fue rubricado por la fiscal jefe provincial, la Dra. C. Isabel Cristina Torres Torres, vicerrectora primera de la universidad y Glessler Ramos Giral, presidente de la FEU.

La fiscal jefe provincial explicó la necesidad de fortalecer los vínculos con dicha institución, señalando que hasta el momento se intercambia con las carreras de Derecho, Informática, Comunicación Social, Psicología, Ciencias de la Información, entre otras.

Firma de Convenio Colectivo de Trabajo

El 27 de marzo se firmó el Convenio Colectivo de Trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR), para el periodo 2018-2021, por el Fiscal General de la República y la secretaria general del Buró Sindical de la FGR, Yagnara Correa Laborí.

En la asamblea, la secretaria general expuso el resultado de la actualización del convenio, tras un proceso de análisis y revisión del que se encontraba vigente hasta el 2017, por parte de todos los trabajadores.

Tras ser sometido a votación, y con la aprobación de todos los presentes se procedió a la rubrica. Participaron los miembros del Consejo de Dirección y trabajadores del Órgano Central, y especialmente invitada Yeleine Arrastía Gurri, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública en el municipio Playa.

Ratificado convenio con Educación Provincial en Granma

A partir de la filosofía de hacer para avanzar y trabajar con orden, disciplina, rigor y exigencia, el 29 de mayo, se actualizó el convenio entre la Dirección Provincial de Educación y la Fiscalía granmense en la escuela pedagógica de Bayamo.

Con la presencia de la viceministra de Educación Margarita McPherson Sayú, el primer secretario del Partido en la provincia Federico Hernández Hernández y la directora Provincial de Educación Teresa Luisa Pérez Trinchet, tuvo lugar la rúbrica del documento, cuya línea de trabajo más conocida resulta la creación de los círculos de interés “Pequeños fiscales”, así como el apoyo, la asesoría y el vínculo constante entre ambas instituciones.



Escuela Nacional de la Fiscalía

El aniversario 45 de la Fiscalía General de la República de Cuba constituye una gran fiesta y se traduce en trabajar mejor para perfeccionar su labor. Entre las actividades en saludo a esta fecha se encuentra la creación de la Escuela Nacional de Fiscales, cuya primera etapa fue inaugurada el 30 de julio.

A partir de ese momento, un equipo de trabajo comenzó sus labores en la nueva sede, donde también radica la dirección de Formación y Desarrollo. Este centro resulta un paso trascendental para la formación profesional de los fiscales, especialistas y trabajadores.

Contar con aulas especializadas, un centro de documentación y otras facilidades, le imprimirá valor agregado a la obra, para que la preparación y superación integral tribute al mejor desempeño de la labor de la institución.

Reconocimientos a la Fiscalía de Camagüey

En la asamblea de balance de la carrera de Derecho de la Universidad de Camagüey, se reconoció a la Fiscalía de este territorio como Mejor Unidad Docente del Sector Jurídico.

De igual forma, en la asamblea anual de la delegación de la Agricultura en Camagüey fue reconocida la Fiscalía Provincial por el apoyo brindado en la superación de los juristas del sector agropecuario.

Sindicato de Pinar del Río agasajado

El Buró Provincial del Sindicato de la Administración Pública en Pinar del Río reconoció a la Fiscalía Provincial de este territorio por sus resultados sindicales y administrativos.

En el acto participaron la Secretaria General del Sindicato de la Administración Pública y los máximos dirigentes de la organización en la provincia, así como del Partido y el Gobierno en el municipio cabecera.



Homenaje a la Generación del Centenario

Conmemorando el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, trabajadores de la fiscalía cubana se reunieron el 20 de julio en el Mausoleo a los Mártires de Artemisa, donde rindieron tributo a los hijos de tan ilustre provincia que dieron su vida por la causa revolucionaria y no dejaron morir el ideario de nuestro Apóstol en el año de su centenario.

Además, en este espacio el Sindicato Nacional de Administración Pública entregó a la Fiscalía General de la República la condición de colectivo distinguido nacional.



Quienes nos acompañan cada día



Luis Alberto Pérez Morales, quien se desempeñaba como vicefiscal jefe provincial de Mayabeque, fue nombrado fiscal jefe de la dirección de Defensa, Seguridad y Protección.

Carlos Salvador Mendieta Palomino, quien se encontraba al frente de esta dirección, se trasladó para el cargo de fiscal segundo jefe de la Secretaría de la Fiscalía General. El acto de entrega de responsabilidad del cargo se efectuó el 1ro. de julio.

En la foto: Luis Alberto (derecha) y Carlos Mendieta (izquierda).



Luis Alberto Pérez López, ocupó el cargo de fiscal Jefe de la Secretaría de la Fiscalía General de la República, anteriormente era el fiscal jefe de la dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios.

En la foto: en el centro.



El 10 de agosto, Lay Trujillo González, ex fiscal jefe provincial de Ciego de Ávila, asumió la responsabilidad de fiscal jefe de la dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales.

En el acto de entrega también tomó posesión Joaquina Naranjo Gómez como directora de la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República.

En la foto: (de izquierda a derecha) Joaquina Naranjo, la Fiscal General de la República y Lay Trujillo.

Asumió como sustituta legal provisional en el cargo de fiscal jefe provincial de Sancti Spíritus, Amparo de la Caridad Pereira Rosa, al designarse a Barbarita Eliberta Pacheco Fonte, quien ocupaba esta responsabilidad, para cursar la especialidad en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional, en el período 2018-2019.

Fueron nombradas como fiscales jefes provinciales de Holguín, Matanzas y Las Tunas las compañeras Kenia Aguirre Ulloa, Daysi Ramírez Naranjo y Aymara Pérez Sobrino, respectivamente.

Tomaron posesión como fiscal jefe y vicefiscal jefe provincial de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila las compañeras María Victoria Sifonte Ayup y Gretell Rodríguez Moya, respectivamente.



Tareas con GRAN IMPACTO en el país

El vínculo de los estudiantes al trabajo durante su estancia en la universidad les permite su formación en el orden técnico- profesional. Ello tiene diferentes manifestaciones, una de ellas es la realización de tareas de impacto, en la que se inserta la Fiscalía General de la República, a partir del convenio de colaboración firmado con el Ministerio de Educación Superior (MES) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Durante el primer semestre del año 2018, 826 estudiantes y 22 profesores de Derecho y 63 alumnos de otras carreras como Contabilidad y Finanzas, Comunicación Social, Informática, Ingeniería Industrial y Sociología participaron en 101 tareas de impacto efectuadas en las fiscalías provinciales.

Las acciones que realizan los estudiantes propician el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, mediante la participación en la ejecución de investigaciones, verificaciones fiscales, procesos confiscatorios y acciones de comunicación.

Además, se involucran en actividades que contribuyen a la prevención y enfrentamiento eficaz al delito, y al control de la legalidad en establecimientos penitenciarios, hogares de niños sin amparo familiar, casas de abuelos, hogares de ancianos y escuelas de conducta y de formación integral, velando por la protección de cada uno de estos sectores.

De igual forma, se vinculan a la atención a los ciudadanos, visitan comunidades y zonas de difícil acceso, contribuyendo también a la cultura jurídica de sus pobladores.

A la ejecución de dichas acciones le antecede un proceso de preparación de sus participantes para garantizar su realización con la calidad requerida. En muchos casos los estudiantes continúan colaborando con los órganos de la fiscalía durante su etapa estudiantil.

Estas tareas tienen un alto impacto social y económico y se desarrollan con el objetivo de contribuir a la identificación y seguimiento de problemáticas en los territorios, tomando en cuenta el interés de la Fiscalía General en mantener vínculos con las universidades y fomentar la formación de valores y vocacional de los estudiantes.

Tradiciones constitucionales CUBANAS



Por: Fiscalía Provincial de Pinar del Río

La historia de Cuba ha sido enriquecida desde el ámbito constitucional, comenzando en 1812 con la promulgación de la Constitución de las Cortes de Cádiz del 18 de marzo, la que propició una organización en este sentido en el país, que en aquel entonces era parte del imperio español. Esta reforzó la soberanía nacional y la intolerancia religiosa católica. En sus 384 artículos propugnaba las ideas más avanzadas de la burguesía española y proclamaba los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Aunque persistía en mantener la esclavitud tuvo un carácter positivo.

Ya en 1834, en sustitución de la Constitución hasta entonces vigente, se promulgó el Estatuto Real relativo a la constitución y funcionamiento de las Cortes. Posteriormente, en 1837, se da inicio a la Ley Fundamental, que constituyó una revisión de la Constitución de 1812.

En 1876 se promulgó la Constitución que rigió hasta 1897, conocida como Constitución Autónoma, la que hizo extensiva la Ley Electoral de 1890, designando a un Gobernador General que pretendía dar autonomía a Cuba y Puerto Rico. Esta se mantuvo en vigor hasta la firma del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, con lo que finalizó la Guerra Hispano- Estadounidense.

A la par de la vigencia de las constituciones españolas se fue gestando un derecho constitucional propio en Cuba, por lo que no se debe dejar de mencionar la figura de Gabriel Zequeira, quien elabo-

ró el Proyecto de Ley que tenía como propósito enmendar la Constitución de 1812 y constituyó el primer intento de conformación de una organización política en Cuba.

En los años 1810 y 1812 se desarrolló el proyecto constitucional de Joaquín Infante, el cual fue considerado como el primer proyecto de carácter separatista, contaba con cien artículos. Resultó innovador, pues modificaba la estructura clásica de Montesquieu de los tres poderes al crear un cuarto poder: el militar.

Durante la gesta independentista cubana se elaboraron cuatro constituciones: Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La Yaya. La primera fue aprobada el 10 de abril de 1869, rigió en plena Guerra de los Diez Años, contaba con veintinueve artículos y establecía una sola Cámara como principal organismo del gobierno. Su objetivo principal era fijar los órganos esenciales del gobierno para el momento y como consecuencia consagró el derecho de todos los cubanos a la libertad y proclamó la abolición total de la esclavitud, refrendada en su artículo 24.

Por su parte, la Constitución de Baraguá fue promulgada culminando la Guerra de los Diez Años, específicamente el 15 de marzo de 1878, resultado de la protesta de Baraguá realizada

por el Mayor General Antonio Maceo y Grajales. Estaba compuesta por seis artículos y establecía un gobierno provisional, integrado por cuatro ciudadanos.

Con posterioridad, el 16 de septiembre 1895, entró en vigor la Constitución de Jimaguayú. Con esta se intentaba evitar los errores que se cometieron en la anterior y se adoptó una forma de gobierno distinta. En su preámbulo se exponía que la Revolución se hacía por la independencia y creación de Cuba en República Democrática, declarando la separación de Cuba de la monarquía española.

El 29 de octubre de 1897, se promulgó la última de las constituciones mambisas: la de La Yaya. En sus 48 artículos, de manera general, se percibía la influencia positiva de la Constitución de Guáimaro, al desarrollar conceptos que en esta solo se esbozaban. Incluyó un título especial sobre los derechos individuales y políticos.

El llamado Período Republicano inició con la Constitución de 1901, aprobada el 21 de febrero, que tenía un carácter liberal y democrático, y organizó el Estado de manera distinta. Contenía, además, las partes clásicas de cada constitución: Dogmática, Orgánica y la Cláusula de Reforma. A esta le fue adicionada la Enmienda Platt, la cual regulaba las relaciones de Cuba y Estados Unidos, dando el derecho a este último a arrendar determinadas partes del territorio nacional para establecer bases navales y carboneras.

En 1934, fue derogada esta Enmienda y se firmó un nuevo tratado, donde se mantenía la permanencia de la Base Naval de Guantánamo. Aunque se le realizaron ligeras modificaciones a la Constitución de 1901, ella continuó vigente hasta la promulgación de la nueva en la década del 40.

Precisamente, el 10 de octubre de 1940 se puso en vigor esta Constitución. En sus 286 artículos se fijó el carácter nacionalista, se esta-

bleció un sistema de educación libre democrática y nacionalista y una serie de derechos fundamentales, anticipándose a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

Tras el triunfo de la Revolución, el gobierno revolucionario decretó la Ley Fundamental, el 7 de febrero de 1959, que aunque fue una transcripción de la Constitución de 1940, se adaptaba a la realidad socioeconómica que se vivía en aquel entonces. Con ella se estableció la disolución del Congreso y se le atribuyó al Consejo de Ministros las funciones de Órgano Legislativo. Fue una ley objeto de continuas transformaciones.

La Constitución cubana actual se promulgó el 24 de febrero de 1976, y formó parte de un largo proceso de transformaciones sufridas por las instituciones jurídicas del Estado revolucionario desde enero de 1959 hasta el momento de su promulgación. Fue definida como de la provisionalidad y a lo largo de los años se acumularon experiencias y se propiciaron las condiciones para la futura institucionalización del país.

Ella establece que Cuba es un Estado socialista de trabajadores (Artículo 1); que el nombre del Estado es República de Cuba (Artículo 2) y que la soberanía reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado (Artículo 3).

Ha tenido tres modificaciones: en la primera se cambió el nombre de la Isla de Pinos por el de Isla de la Juventud; la segunda, en el año 1992, adecuó el texto a las nuevas condiciones económicas y la tercera, en el año 2002, proclamó la irreversibilidad del carácter socialista de la Revolución.



La reforma constitucional en CUBA

Por: Fiscalía Provincial de La Habana

Una reforma constitucional supone la modificación de la Constitución de un Estado. Tiene por objeto una revisión parcial de esta y la sustitución de una o varias de sus normas, que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional.

En los países con sistemas de Constitución rígida o semirrígida, las reformas constitucionales requieren de un procedimiento especial, diverso al que se utiliza para la aprobación de las leyes ordinarias. Existen tres mecanismos para cambiar o modificar algún elemento dentro de la Constitución, estos son enmienda, reforma y constituyente.

La tendencia del sistema político cubano al autoperfeccionamiento, su

capacidad de lograr un alto nivel de legitimidad, su gran fortaleza y apoyo popular son reconocidos, incluso, en publicaciones de algunos de los más destacados críticos del régimen político prevaleciente en Cuba, aunque le den a esto explicaciones que no siempre corresponden a la realidad política de la nación. Nuestro país se ha caracterizado por realizar procesos democráticos, en correspondencia con nuestros principios, lo que ha sido evidente en los diferentes momentos en los que han sido necesarios los criterios de la población en este sentido.

Muestra de ello fue en 1975, con el anteproyecto de Constitución de la República, el que fue sometido a discusión y en el cual participaron más de 6 millones de personas y se

formularon propuestas que llevaron a la modificación de sesenta de los artículos propuestos. El 15 de febrero de 1976 se celebró un referendo en el que votó el 98% de los electores, de los cuales el 97,7% lo hizo de forma afirmativa, alcanzando así su aprobación, mediante el voto libre, directo y secreto de la inmensa mayoría de estos.

Otro de los ejemplos que ratifican esta democracia, fue el Llamamiento del Partido, discutido con el pueblo, donde se debatieron aspectos trascendentales de la actividad de los organismos estatales, la necesidad de encontrar vías para hacer más representativas las instituciones democráticas, perfeccionar sus estructuras, atribuciones y funciones de dirección en las diferentes instancias; incluir precisiones sobre la gestión del gobierno en provincias y municipios; establecer nuevas formas de elección de los diputados a la Asamblea Nacional y de los delegados a las asambleas provinciales, y otras cuestiones de interés para la vida institucional del país. La Ley de Reforma Constitucional se aprobó el 12 de julio de 1992 en sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La Constitución también fue modificada con el fin de garantizar y ampliar el ejercicio de numerosos derechos y libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y extranjeros.

El 10 de junio de 2002, nuestro pueblo ratificó el contenido socialista de esta Constitución, en un proceso plebiscitario popular, en asambleas de las organizaciones de masas, en actos y marchas realizados el día 12 del propio mes,

donde participaron más de nueve millones de personas y para la firma pública y voluntaria de 8 millones 198 mil 237 electores durante los días 15, 16 y 17 de ese mismo mes.

Se interesó de la Asamblea Nacional del Poder Popular una reforma para dejar expresamente consignado el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social revolucionario por ella diseñado, así como que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con otro Estado no pueden ser negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera, ante lo cual el órgano supremo de poder del Estado, en sesión extraordinaria, convocada al efecto, adoptó por unanimidad el Acuerdo No. V-74, por el que se aprobó la Ley de Reforma Constitucional el 26 de junio de 2002.

A la luz de la conceptualización de nuestro modelo económico social resulta evidente la necesidad de realizar cambios a la actual Constitución, lo que se encuentra a tono con lo que el entonces presidente Raúl Castro advirtió, de que la reforma se efectuaría en el momento oportuno para no someter la Constitución a continuas modificaciones.

Hay que tener en cuenta que las normas jurídicas están sujetas a circunstancias históricas concretas y la complejidad del momento que vive la sociedad cubana no puede ser obviada a la hora de pensar, proponer e introducir algún cambio en la Constitución.

La Constitución de un país es la VOZ DEL PUEBLO

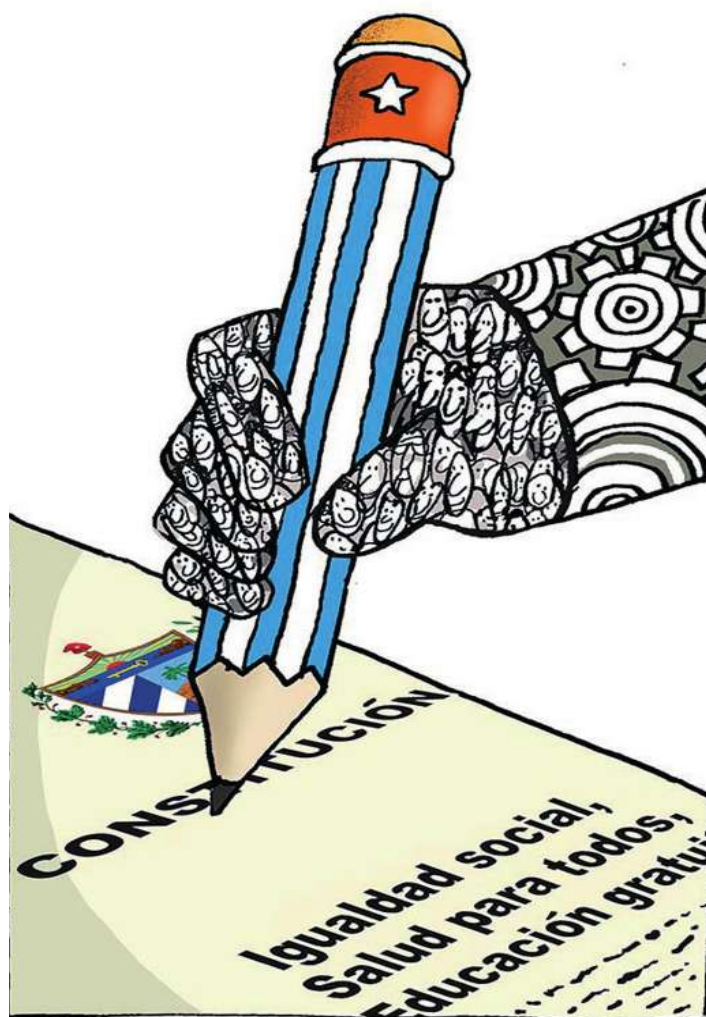
Yo APOYO la Reforma Constitucional

Por: Yamila Peña Ojeda
Fiscal General de la República

La vocación constitucionalista del pueblo cubano es ejemplar, proclamó en medio de su dura lucha por la independencia de la metrópoli española que abarcó tres guerras, cuatro Constituciones: Guáimaro en 1869, Baraguá en 1878, Jimaguayú en 1895, La Yaya en 1897.

En ellas se encuentra la declaración de que la soberanía nacional reside en el pueblo, un catálogo de derechos, la organización de una República en Armas, las permanentes discusiones por alcanzar los necesarios equilibrios entre las estructuras políticas y militares, y sobre todo, siempre, la voluntad de continuar la lucha hasta lograr una nación libre.

Cuba inició el siglo XX con el apéndice de la Enmienda Platt colgado de la Constitución de 1901, condición ignominiosa que siempre tuvo el rechazo del pueblo, o acaso los cubanos debemos perder la memoria y olvidar la afrenta que significó permitir el derecho de intervención de los Estados Unidos.



martirena

Posteriormente la Constitución de 1940 por primera vez refrendó los derechos, civiles, sociales y políticos de las personas, garantizó el sufragio universal para que la mujer pudiera emitir su voto, un sistema de atención a los jubilados, la aprobación de la jornada laboral de ocho horas. Pero su carácter avanzado, se vio frustrado por la corrupción de los gobiernos de turno que no les interesó la instrumentación de las leyes complementarias que la hicieran cumplir.

La ponderada Constitución de 1940 no fue sometida a referendo popular, se aprobó por los constituyentistas elegidos, quienes fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de discutir y dar criterios con relación al texto constitucional.

Al triunfo de la Revolución, en febrero de 1959 se aprobó la Ley Fundamental, que permitió ajustar la Constitución de 1940 a la realidad sociopolítica y a las necesidades que abría la construcción de una sociedad, que se erigía sobre nuevos valores que tenían al hombre en su centro.

Lo primero fue adoptar las medidas para cumplir el Programa del Moncada. En una primera etapa democrática revolucionaria, de amplio apoyo y legitimación del pueblo se aprobaron importantes instrumentos, como las leyes de reforma agraria; de nacionalización de las grandes empresas monopolistas norteamericanas de servicios públicos, petroleras y azucareras; de nacionalización de las principales industrias del país y de las empresas privadas; de reforma urbana; de la enseñanza.

A ellas se unieron las Declaraciones de La Habana, ejemplos elocuentes de democracia directa que dio el propio pueblo reunido en la Plaza de la Revolución, confirmando las consultas que el Comandante en Jefe hiciera sobre temas trascendentales para

el país, y que se adicionaron al texto constitucional, lo que considero fue un ejercicio de práctica constitucional.

No podemos olvidar que en los primeros años de la Revolución la batalla era por la sobrevivencia, se había declarado el bloqueo yanqui contra Cuba, no teníamos relaciones diplomáticas con los países del entorno regional, el terrorismo de Estado que EEUU desató cobraba las vidas de hijos de nuestro pueblo y causaba inmensos daños materiales.

Fiel a la tradición constituyente, existía el interés de construir democráticamente las formas institucionales que caracterizarían a la organización del Estado, el Partido y las organizaciones de masas en el país.

En 1968 se creó la Comisión de Estudios Jurídicos del Comité Central del Partido, presidida por el veterano luchador Blas Roca, entre las tareas prioritarias estaba asesorar lo que sería la futura Constitución, con aspectos de alta trascendencia como los sistemas económico, de gobierno, mecanismos de participación popular, división político-administrativa y el papel del Partido.

En 1973 se comenzó a preparar el experimento sobre la organización y funcionamiento del sistema de órganos representativos apoyados en la participación popular, para el ejercicio del poder soberano a nivel local, aprobado mediante una Ley en 1974, para llevarse a efecto en la provincia de Matanzas.

En octubre de 1974, por Acuerdo del Consejo de Ministros se crea la Comisión Mixta del Partido y del Gobierno encargada de preparar y redactar el anteproyecto de Carta Magna, integrada por dirigentes del Partido, el Gobierno, de las organizaciones de masas y destacados juristas.

Esta Comisión entregó el anteproyecto al Comandante en Jefe el 24 de febrero de 1975, y a partir de allí se sometió a una amplia consulta popular.

En ese proceso participaron 6 millones 216 mil 981 ciudadanos, que propusieron 12 mil 883 modificaciones, 2 mil 343 adiciones de contenido constitucional, y 84 solicitudes de aclaraciones.

El proyecto fue sometido a Referendo junto a la Ley de Tránsito Constitucional, mediante el voto libre, directo y secreto de nuestro pueblo.

Los datos resultantes fueron: de 5 millones 717 mil 266 electores, concurrieron a las urnas 5 millones 602 973 (98%). Votaron a favor 5 millones 473 mil 534 (97,7%); en contra 54 mil 70 (1%); 44 mil 221 dejaron la boleta en blanco (0,8%) y 31 mil 148 boletas fueron anuladas (0,5%).

Es decir, que el pueblo cubano intervino en dos oportunidades de manera directa, primero cuando se le consultó y después cuando ejerció el voto en el Referendo.

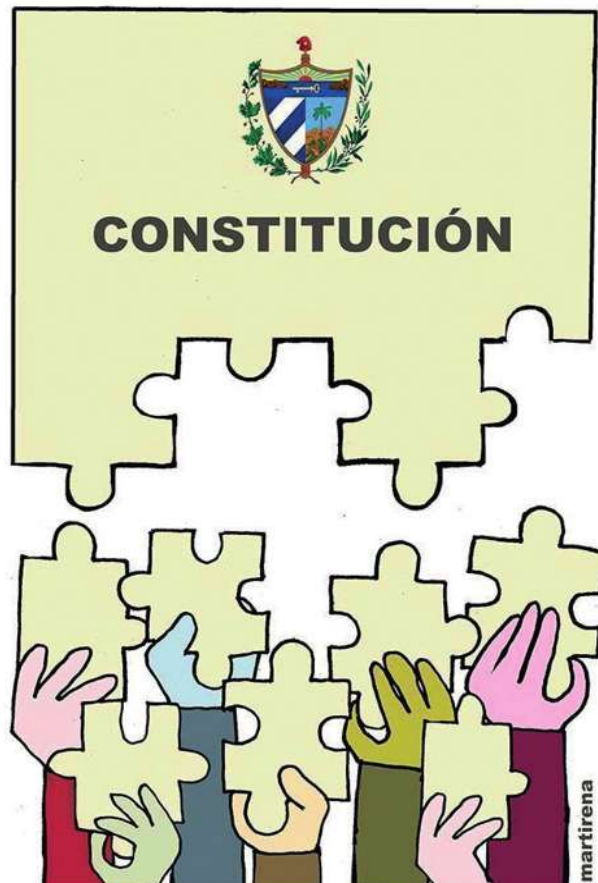
Raúl Castro Ruz, en el discurso de proclamación de la Constitución Socialista, el 24 de febrero de 1976, expresó: “Al discutir el proyecto de nuestra Constitución y luego al votar por ella nuestro pueblo ha estado decidiendo directamente sobre el régimen económico y social en el cual quiere vivir. Sobre las instituciones a través de las cuales considera que debe organizar sus actividades y dirigir el desarrollo social. Sobre el papel, facultades y funciones de esas instituciones. Sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. Sobre los deberes de todos”.

En estos momentos históricos, de continuidad en el pensamiento de la dirección del país, suscribimos lo expresado por el

General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la Primera Conferencia Nacional del Partido, el 28 de enero de 2012, cuando nos exhortó a “...dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad y forjar con intencionalidad transformadora y mucha sensibilidad política la visión hacia el presente y el futuro de la Patria, sin abandonar, ni por un instante, el legado martiano y la doctrina del marxismo- leninismo que constituyen el principal fundamento ideológico de nuestro proceso revolucionario” y manteniendo en alto los postulados del concepto de Revolución, expresado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el primero de mayo de 2000.

Hacemos Cuba al estudiar en detalle el proyecto de Constitución y prepararnos conscientemente.

Esta es mi Constitución, tú Constitución, nuestra Constitución. Yo la apoyo, ¿y ustedes?



¿Por qué votamos los cubanos?

Por: Fiscalía Provincial de Las Tunas

La Constitución de la República de Cuba es la Ley Suprema del Estado que refrenda los derechos de cada ciudadano, entre ellos, el del ejercicio al voto como expresión de la democracia que caracteriza a nuestro proceso electoral.

En esta norma se resumen los principios fundamentales que sustentan el sistema electoral, pues mediante su articulado se define el derecho de todos los ciudadanos, con capacidad legal para ejercer el voto, para intervenir en la dirección del Estado, directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular.

La posibilidad de votar, de manera libre, directa y secreta, le concede un sello distintivo a nuestro sistema electoral, convirtiendo el proceso electoral en un movimiento popular acompañado por los pioneros, quienes desempeñan la meritoria tarea de custodiar las urnas. También los jóvenes, con su alegría y dinamismo, asumen roles relevantes en la comprobación de los registros electorales, garantizando la veracidad de los datos de los ciudadanos que acuden a ejercer el voto y los más adultos, se motivan por la posibilidad de elegir a sus dirigentes, quienes serán los encargados de guiar el futuro de sus sucesores.

Existen razones suficientes para hacer del día de las elecciones una jornada de compromiso con

la Revolución; una de ellas es la posibilidad de mantener las principales conquistas alcanzadas durante el proceso revolucionario y por las cuales tantos derramaron su sangre.

La mujer desempeña un papel protagónico dentro de este proceso, dado que tiene la posibilidad de elegir y ser elegida; de ello se deriva la alta representatividad de féminas que ocupan responsabilidades a cada nivel, incluyendo el Parlamento.

De igual manera, se defienden las garantías a una educación y atención médica gratuitas, que se extienden a cada punto de la geografía cubana por difícil que sea el acceso y a otras latitudes para hacer efectivo el internacionalismo que nos distingue.

No importa cuál sea el día elegido, cualquiera que fuese tiene la impronta de cada una de las fechas en que fueron firmados textos constitucionales como el de Guáimaro, Jimaguayú y La Yaya, que con la especificidad de sus tiempos tenían la voluntad de alcanzar una sociedad más próspera y sostenible.

Los cubanos tuvimos el privilegio de ser partícipes de la constitución de nuestro Parlamento en un contexto histórico, donde se conmemoró el aniversario 57 de la victoria de Playa Girón, con el compromiso de dar continuidad al legado del invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y con la inmensa responsabilidad de mantener en alto las banderas del Socialismo que durante 60 años el pueblo ha sabido mantener bajo la guía acertada del Partido Comunista de Cuba.

Los trabajadores de la Fiscalía hemos sido protagonistas como tantos cubanos de cada momento de este proceso, satisfechos porque mediante nuestro voto reafirmamos nuestra unidad y lealtad al Socialismo desde nuestra posición de fieles defensores de la legalidad.



El papel del DERECHO en la sociedad cubana actual



Por: Fiscalía Provincial de Guantánamo

La sociedad cubana actual está matizada por un conjunto de transformaciones emanadas de los cambios económicos, políticos y por supuesto de orden social, todos respaldados por los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y los Objetivos de la Conferencia del Partido, con evaluaciones de su alcance por etapas.

El Derecho como institución es el orden normativo e institucional de la conducta humana en la sociedad. Su papel trasciende como técnica de organización social o guía para la conducta humana, esta última es una de las funciones principales, o mejor dicho su ideología principal.

Es importante conocer la distinción entre el Derecho como conjunto de normas o doctrinas y los derechos, deberes y obligaciones como componentes de ese Derecho.

Uno de los problemas en la sociedad actual es que nos enfocamos más en nuestros derechos, y olvidamos nuestros deberes, centrarnos en las obligaciones nos permitiría contrarrestar actos de corrupción, indisciplinas sociales y problemáticas familiares.

Lo antes expuesto tiene respaldo en los artículos del 45 al 65 de la Constitución de la República, que enuncia los derechos al trabajo, el descanso, atención médica, retribución salarial, seguridad social, la libertad de prensa y de palabra, entre otros.

El contexto actual nos obliga a determinar cuál papel desempeña el Derecho para que la sociedad cubana encuentre cauce a la efectiva realización del proceso de implementación de los

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, para la transformación gradual de la sociedad. En tal sentido obliga al ciudadano a:

- Respetar el principio de legalidad que orienta al Derecho.
- Estudiar desde el Derecho la efectividad de la norma y plantear propuestas para su perfeccionamiento.
- En las entidades estatales hacer cumplir las normas de control interno para una adecuada ejecución del Plan y Presupuesto, que redundan en beneficio del trabajador.
- En la comunidad exigir el respeto a las normas de convivencia social y las regulaciones urbanísticas.
- En la familia fomentar valores sobre la base de la concepción de que es y deberá ser siempre la célula fundamental de la sociedad, priorizando el respeto al interés superior del niño.

El ciudadano deberá enfocar el Derecho no como un conjunto de normas esquemáticas, sino como la vía para conocer y ejercitar en una misma proporción sus derechos ciudadanos sin descuidar las obligaciones que deberá cumplir en aras de aportar actividad útil para el desarrollo de la sociedad en que vivimos.

En pocas palabras, no habrá sociedad que por muy justa que parezca por tener un derecho altruista, sea sustentable si no se respeta por sus ciudadanos el valor de la laboriosidad para construir valores en beneficio de sus ingresos.

Un sueño hecho realidad

“Los edificios son como las palabras de los pueblos, y sus símbolos. A través de las edades cuentan su espíritu y narran su historia”

José Martí

Por: Lilian López Acuña
Comunicadora de la Fiscalía
Provincial de Matanzas

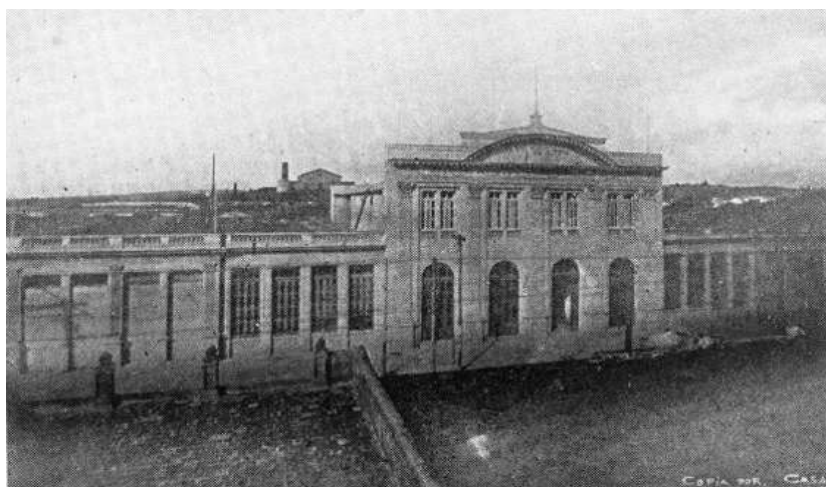
La Fiscalía Provincial de Matanzas se enorgullece de poseer un valioso reconocimiento: la Segunda Menció en la Categoría de Restauración, del Premio Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos, otorgado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. La entrega se realizó el 18 de abril de 2018 en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.

El rigor y calidad de la inversión, proyecto y ejecución de la obra fueron criterios para su elección. A dicho galardón le antecedió el Premio Provincial de Conservación y Restauración de Monumentos, concedido por el Centro

de Patrimonio Cultural de la ciudad matancera, ambos en su carácter de inversionista principal.

La edificación donde hoy se encuentra la Fiscalía Provincial de Matanzas data de la primera mitad del siglo XX, fue inaugurada en 1921 cuando comenzó a funcionar bajo la denominación de Silveira, Linares y Compañía como casa comercial, e inició sus operaciones el 1ro. de enero de 1940.

Los espacios de este edificio estuvieron destinados en su mayoría a almacenes de azúcar y víveres, además de contar con algunas oficinas administrativas en su segundo nivel.



Antigua Compañía Comercial Silveira y Linares

Es una construcción ecléctica, ubicada en una de las más importantes vías de la ciudad de Matanzas, la Calzada de Tirry, que atraviesa el barrio de Pueblo Nuevo, fundado al sur del río San Juan en las primeras décadas del siglo XIX. A partir de entonces, a los lados de dicha vía o en su proximidad se levantaron algunos de los edificios más notables de la ciudad, entre estos la formidable hilera de almacenes en la orilla sur del río San Juan, desde el puente Calixto García hasta el Sánchez Figueras.

La nueva ubicación de la Fiscalía nació de una solicitud realizada a la dirección del Gobierno de la provincia, presentada como propuesta para su emplazamiento en un sector urbano localizado en la Calzada de Tirry entre San Juan Bautista y San Sebastián, en el Consejo Popular de Pueblo Nuevo, ocupando un inmueble existente de valor patrimonial y sus áreas exteriores.

Luego de su aprobación y traspaso oficial, se iniciaron los trabajos constructivos que duraron cuatro años, se asumió como principio mantener la estructura original del inmueble. La inauguración tuvo lugar el 23 de diciembre de 2016, para orgullo de todos los trabajadores del Órgano, en un acto celebrado en la propia sede donde participó el Fiscal General de la República junto a otros miembros de la Fiscalía General y las máximas autoridades del Gobierno y del Partido en la provincia.

Este hecho constituyó un sueño hecho realidad, teniendo en cuenta que la anterior sede de la institución se encontraba en malas condiciones y el espacio era escaso, lo que afectaba el desarrollo adecuado del trabajo.

La restauración de esta obra patrimonial no solo rescata un importante inmueble en una de las arterias principales de la ciudad de Matanzas, sino que revive el valor utilitario de la edificación, respon-

diendo a las necesidades específicas de la actividad fiscal en la provincia, a la vez que representa un legado de salvaguarda en materia de conservación para las nuevas generaciones.



Entrega del premio en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. A la izquierda la vicefiscal jefe provincial de Matanzas



Actual sede de la Fiscalía Provincial de Matanzas

La Mediación Penal como forma de solucionar conflictos

Teniente Liena Rodríguez Bonne

Cátedra de Investigación Criminal y Operaciones, de la Facultad de Ciencias Jurídicas del Instituto Superior Militar Eliseo Reyes Rodríguez

INTRODUCCIÓN

La Mediación Penal como forma de solucionar conflictos, se ha utilizado históricamente para solventar disputas individuales como intergrupales e interestatales, tal es así que los orígenes de la Mediación Penal como mecanismo de gestión de conflictos con la participación de un tercero neutral se aprecia en la cultura oriental específicamente en países como China y Japón donde ha sido utilizada desde la antigüedad, ya que la religión y la filosofía asignan mucha importancia al consenso social, a la persuasión moral y a la obtención de un equilibrio o armonía en las relaciones humanas. En Japón, el líder de la aldea mediaba entre quienes tenían problemas interpersonales, como forma de asegurar la unidad de los miembros y la supervivencia de sus tradiciones.

Se habla de una necesidad objetiva de buscar nuevas soluciones que lleven a los ciudadanos a estar cada vez más cercanos al proyecto social que se tiene como país, en lo cual está claro que la imposición de una condena no es la vía más amena para que el sujeto infractor sea insertado en la sociedad como un individuo más de nuestro país.

Existen estudios basados en la Mediación Penal como una vía pacificadora o restaura-

tiva de afectos entre la víctima y el victimario; sin embargo, no se ha tenido en cuenta la esencia de esa alternativa al ver las ventajas que aportarían a los sujetos del Proceso Penal y su implementación en el ordenamiento jurídico cubano, lo que hace novedosa esta investigación.

Se puede decir que es actual la investigación pues en la esfera internacional se insume en muchas partes del mundo, donde la tendencia es a buscar un sistema más acusatorio el cual pone más cercano a las partes en el proceso de Mediación Penal y que está aterrizada a las problemáticas de la Cuba de estos tiempos.

El Objetivo General de la investigación lo constituye: Determinar las posibles ventajas que pudiera brindar la implementación de la Mediación Penal como alternativa a la punición en determinados delitos leves.

DESARROLLO

La palabra Mediación Penal proviene del latín *mediare*, lo que significa abrir al medio. Con el devenir histórico son muchos los conceptos que se han dado acerca de la mediación, por ejemplo:

* Puede consultar una selección de las ponencias presentadas en estos eventos en el libro *Memorias del XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y el II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad*, disponible en www.fgr.gob.cu.

David Pastrana, (en Aguiar: 2010. S/P) de México, plantea: *“Es una forma alternativa de solución de ciertas controversias, que requiere como presupuesto la existencia de un conflicto y la voluntad de resolverlo, así como la intervención de un tercero extraño a la controversia, llamado mediador, que a través de un procedimiento único y diferente en cada caso, tendrá como función principal proponer alternativas de solución basadas en la imparcialidad, confidencialidad, neutralidad y honestidad, cuyo fin será la elaboración de un convenio que beneficie a todas las partes en conflicto, sin que prevalezca el ánimo de ganador o perdedor en ninguna de ellas, y que no contraría a la moral y a las disposiciones de orden público.”*

La Mediación Penal puede resolver conflictos relacionados con la transgresión (infracción) de las normas de convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones que desagraden o parezcan injustas, malos tratos o cualquier tipo de problemas entre miembros de la comunidad educativa.

Según Jay Folberg y Alison Taylor (Ibídem): *“Es el proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades”.*

Para John Haynes (Ibídem): *“Es un proceso en el cual una tercera persona ayuda a los participantes a manejar el conflicto. El acuerdo resuelve el problema con una solución mutuamente aceptada y se estructura de un modo que ayuda a mantener la relación entre las partes implicadas”.*

A criterio del autor, la Mediación Penal es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador, y que pueden ser alumnos, profesores, padres, no jueces ni árbitros.

Implica aptitudes para restaurar relaciones sociales y establecer nuevos afectos entre los

individuos, tratándose de lograr una conciliación extrajudicial entre el autor de una reparación libremente consentida por ambas partes con la utilización de ese tercero, de lo que se desprende un efecto importante: no hay perdedor ni ganador, sino que se trata de un acuerdo que es fruto de la voluntad tanto de la víctima como del victimario, que se responsabilizan con respetarlo y cumplirlo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MEDIACIÓN PENAL

Después de establecer las diferentes definiciones, se impone regresar a los orígenes de dicha institución. Los inicios de la Mediación Penal como mecanismo de gestión de conflictos con la participación de un tercero neutral los encontramos en la cultura oriental específicamente en países como China y Japón. En estos la Mediación Penal ha sido utilizada desde la antigüedad, ya que la religión y la filosofía asignan mucha importancia al consenso social, a la persuasión moral y a la obtención de un equilibrio o armonía en las relaciones humanas. En Japón, el líder de la aldea mediaba entre quienes tenían problemas interpersonales, como forma de asegurar la unidad de los miembros y la supervivencia de sus tradiciones.

En la actualidad, el sistema legal chino, cuyas raíces datan de varios siglos, considera de vital importancia la autodeterminación y la mediación. Ya en los tiempos de Confucio, el filósofo hablaba de la existencia de una armonía natural en las relaciones humanas que no debía interrumpirse, protegiendo la Mediación Penal para la solución de litigios y causas criminales menores, de aquí el aspecto Penal de esta mediación, llegando hasta nuestros días en ese país, este método de Resolución de Conflictos.

Durante siglos, los grupos étnicos y religiosos, como así también las subculturas han establecido sus propios sistemas alternativos para resolución de desavenencias, siempre ante la necesidad común de resolver sus conflictos sin la imposición de una autoridad externa. Ya la Biblia afirma

que “*Jesús es el mediador natural entre Dios y el hombre*”. Y en el Nuevo Testamento se hace referencia a que la Mediación es congruente con los valores bíblicos del perdón, la reconciliación y la comunidad. “*Benditos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios*”, decía Mateo.

En el Renacimiento, la Iglesia Católica a través del clero (parroquia) ha sido la que mediaba en las disputas de familia, los casos penales y las diferencias diplomáticas entre miembros de la nobleza y en épocas más recientes creó el Servicio Cristiano de Conciliación mediante el cual se pusieron en práctica diversos proyectos pilotos para capacitar y proporcionar mediadores eclesíásticos para la resolución de desavenencias personales, siempre tendiendo todos ellos a evitar el litigio y el enfrentamiento.

En otras regiones del mundo desde tiempos muy remotos también era utilizado este método para resolver conflictos, entre los que estaban las causas criminales leves. Los primeros Estados de la comunidad internacional que han implantado en sus sistemas legales procedimientos y programas de implantación de «Justicia reparadora» son aquellos de tradición jurídica anglosajona e influencia del *Common Law*, como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra o el País de Gales, debido fundamentalmente a que en estos ordenamientos, a diferencia de los sistemas jurídicos denominados continentales, rige con menor rigor que el principio de legalidad de los delitos y las Penas, y tiene en cambio mayor autonomía el principio de oportunidad, que permite dejar de aplicar la sanción al hecho definido como delito en determinados casos, por razones de utilidad o conveniencia para la comunidad.

En la India encontramos al *Panchayats* en el cual cinco ilustres árbitros deciden con base en el sentido común, la tradición y los discursos la distribución de la razón entre las partes, constituyendo un mecanismo habitual de gestión de conflictos.

También los antiguos *lokadalats* (tribunales populares) se utilizan actualmente para resolver accidentes de automóviles y disputas familiares; en ellos

grupos de tres personas (dos jueces y un doctor o trabajador social) proveen evaluaciones sin fuerza de ley y facilitan un acuerdo; en todos estos casos aunque se hable de árbitros o conciliación estamos en presencia de facilitadores comunicacionales ya que ni proponen ni imponen una solución al conflicto, de ahí que su real naturaleza sea la de una mediación.

Existen algunos estudiosos de la historia de la Mediación Penal que afirman que en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, se solicitaba que los conflictos se dirimieran sin necesidad de recurrir a juicios, a cuyo fin encargaban a los *This motitas* la disuasión y persuasión de los espíritus en crisis.

No obstante, los historiadores concuerdan que sin distinguir en que región o civilización se utilizó primeramente la Mediación Penal como método de resolución de conflictos de naturaleza criminal, ya que la historia se pierde en caminos escabrosos, sí es cierto que el desarrollo de la institución de la Mediación Penal surge en los Estados Unidos de América, donde se crean los Institutos de Mediación Penal.

El desarrollo de la Mediación Penal en los Estados Unidos tiene fundamentos en comunidades religiosas, comenzando la experiencia con los cuáqueros en el siglo XVIII, en esta comunidad religiosa los conflictos eran remediados a través de la Mediación, existiendo los de naturaleza Penal tales como pequeños hurtos y otras causas criminales leves.

Claro está, la utilización de la Mediación solo se limitaba a los miembros de la comunidad, y posteriormente a la congregación, quienes también utilizaban estos métodos mediante uno de sus miembros, el señor Yantzi, que residía en Elmira, Estado de Ohio y que era funcionario del sistema de seguimiento de presos en libertad condicional. Debido al aumento de vandalismo juvenil le plantea a un Juez de Kitchener, en ese Estado, la necesaria pero nueva experiencia de instrumentar la Mediación Penal para tratar de resolver un gran número de delitos, ya que Yantzi había investigado sobre la ocurrencia de veintidós hechos de hurto y robo donde la suma total de perjuicio patrimonial no superaba los mil ochocien-

tos dólares, y de forma individual cada hecho no superaba los setenta dólares.

Con la aprobación del juez, Yantzi se tomó el trabajo de ir al lugar de cada hecho acercando los protagonistas, es decir a las víctimas con sus victimarios, con un óptimo resultado. Se pagó con trabajo el daño y no hubo reincidencia, el arrepentimiento fue sincero. En síntesis, este caso de Ohio es sumamente interesante y fijó pautas muy importantes sobre el ofensor, sobre la víctima y sobre el mediador.

Esta diferenciación entre sistemas legales influenciados por el *Common Law* y sistemas denominados continentales en los que funcionan procedimientos de Mediación Penal permite clasificar estos procedimientos en dos grupos:

a) Aquellos en los que el acuerdo obtenido constituye una sanción punitiva autónoma y preferente a la sanción judicial, de forma que esta última solo entra en juego en caso de incumplimiento del acuerdo alcanzado en la Mediación Penal lo de imposibilita llegar a tal acuerdo.

b) Los sistemas que atribuyen a la reparación efectuada por el autor, en el marco de una mediación a efectos de atenuación o exoneración de la sanción penal impuesta por un tribunal conforme a lo previsto en la legislación.

Ventajas que pudiera brindar la implementación de la Mediación Penal como alternativa a la punición de los delitos leves

Teniendo en cuenta todos los elementos que han sido recopilados a través de los métodos utilizados, tanto los empíricos como los teóricos y dándole cumplimiento al objetivo general de la investigación, se pueden establecer las posibles ventajas que se obtendrían si se utilizara dicha alternativa en Cuba. Entre ellas:

a) Para la víctima

- Le da la oportunidad de ser oída y decidir la solución a su conflicto más allá de la rigidez del

marco legal, con la asistencia de un tercero imparcial que le garantiza seguridad y confidencialidad frente a su victimario.

- Le da la posibilidad de lograr una reparación, entendida esta no solo como un resarcimiento económico –que también puede darse– sino como algo más integral que puede incluir la búsqueda de su satisfacción moral, el pedido de disculpas de su ofensor o el compromiso de éste de cumplir con algo que le resulte satisfactorio (compromiso de no reiterar ciertas conductas, incorporarse a estudios, planes sociales y otros).

- La víctima encuentra una solución al problema que le ha causado el delito sin necesidad de esperar el fin de un procedimiento procesal, transcurriendo por sus diferentes etapas y concluyendo en el juicio oral a la hora de aplicar la punición de determinado delito.

- La oportunidad para confrontar al autor con el verdadero impacto humano de la ofensa y a la vez para que la víctima exprese sus pensamientos y sentimientos al victimario.

b) Para el imputado

- Una extinción de la acción penal.

- La no acumulación de antecedentes penales.

- Evita el sufrimiento que conlleva la Pena.

- La oportunidad para enmendarse y rectificar significativamente el mal infligido en vez de resultar meramente castigado.

- La posibilidad de participar en la decisión sobre qué indemnización o qué modo de restauración se brindará a la víctima y de negociar un acuerdo de restitución factible de cumplir.

c) Para el Sistema Judicial

- Una justicia más cercana al ser humano.

- Descongestionamiento del sistema de justicia y los órganos de investigación a cargo de la ejecución de la sanción.

- Mayor celeridad en el proceso.

- Evita un período de juzgamiento innecesario.

- Mayor efectividad en la persecución y juzgamiento de los hechos más graves.

- Economía procesal y material en todos los sentidos, lo que trae consigo menos costos procesales.

d) Para la sociedad

- La disminución del impacto de la delincuencia al aumentar la reparación de pérdidas.

- La reducción de la delincuencia mediante la comprensión de los victimarios sobre lo que significa haber dañado o lastimado a una persona.

- El otorgamiento de un marco apropiado para mantener la paz en situaciones en que la ofensa puede repetirse porque víctima y victimario pueden reencontrarse.

CONCLUSIONES

Después de analizar aspectos determinantes sobre la Mediación Penal y su aplicación en Cuba podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1. Esta alternativa pudiera brindar una solución con mayor celeridad al problema a partir de la ejecución y/o consumación de alguno de los delitos leves, además la víctima tendrá la oportunidad de ser oída y decidir la solución más satisfactoria y de esa forma se puede apreciar una reparación del daño material y/o moral a la hora de las partes llegar a un acuerdo.

2. Teniendo en cuenta el papel que desempeña el imputado como una de las partes en esta alternativa se puede valorar como otra de las ventajas

la extinción de la acción penal y la no acumulación de antecedentes penales pues se está hablando de resolver el problema por otra vía que no es la de los tribunales, por lo tanto no se va a impartir justicia, sino a dialogar para así llegar a un consenso, y de esa forma tener una oportunidad para enmendarse y rectificar por el hecho cometido.

3. Se puede además hablar de ventajas en el sistema de justicia donde habrá una mayor celeridad en el proceso penal a partir del no involucramiento de los tribunales en la punición de estos delitos, a su vez se reduce la carga judicial.

BIBLIOGRAFÍA (SELECCIÓN):

Aguiar Pardo, Yeissel. (2010). *La Mediación Penal como alternativa al proceso Penal, análisis de nuestro ordenamiento legal*.

Atienza, Manuel. (1992). *Para una teoría general de la acción Penal. Sección Doctrinal*. Universidad de Alicante. Madrid, España.

Candia Ferreyra, José. (enero/junio 1999). *Problemas actuales del Proceso Penal en Cuba*. Ponencia presentada en la Reunión Anual de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales celebrada en La Habana en noviembre de 1998. *Revista Cubana de Derecho* (No. 13).

Código Penal. Ley 62/87. (1998). Modificado, actualizado y concordado con Instrucciones y Sentencias del Tribunal Supremo. Lic. Juan M. Regalado. La Habana, Cuba: Editorial Ciencias Sociales.

Colectivo de Autores. (2002). *Temas para el estudio del Derecho Procesal Penal. Primera parte*. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.

Ley de Procedimiento Penal. (1997). Edición actualizada, anotada y concordada. La Habana, Cuba: Editorial, Simar S.A.

Mendoza Díaz, Juan. (2002). *Principios del Proceso Penal*. [CD – ROM]. La Habana, Cuba: Facultad de Derecho de la Universidad.

Quirós Pérez, Renén. (1987). *Introducción a la Teoría del Derecho Penal*. La Habana, Cuba: Editorial Ciencias Sociales.

Quirós Pérez, Renén. (enero-marzo 1986). *Despenalización*. *Revista del Minjus* (No. 1).

La Psicología Criminal: aproximación a su definición en las condiciones del enfrentamiento del delito en Cuba

Teniente Coronel Dra. C. Oridia Gardón Carballido

Profesora e Investigadora Titular. Jefa del Centro de Investigaciones Científicas del Instituto Superior Militar Eliseo Reyes Rodríguez

INTRODUCCIÓN

En el intento de definir la Psicología como ciencia en el enfrentamiento al delito en Cuba, consideramos pertinente hacer primero algunas reflexiones sobre su conceptualización a nivel internacional y analizar el papel de otras ciencias afines que también estudian el delito.

El estudio del delito y de la criminalidad humana es un fenómeno complejo, sobre el cual distintas ciencias han aportado conocimientos y teorías explicativas, aunque la relación entre ellas no ha sido fácil, puesto que no existe trabajo interdisciplinario, muchas veces, representan una oposición en un intento de clarificar el propio campo de estudio.

En la actualidad, se reconoce la necesidad de observar el conocimiento del ser humano, como consecuencia de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales y, por tanto, la obligada necesidad de abordar el estudio y comprensión de su conducta desde una perspectiva holística, multidisciplinar e integradora.

DESARROLLO

La Psicología es la encargada de estudiar la formación, estructura y dinámica de la actividad psíquica, así

como su expresión y papel orientador en la actividad del hombre. Estudia las leyes de la psiquis, sus procesos, fenómenos y propiedades como factores condicionantes de la expresión personalógica del sujeto y su actuación en el medio que le rodea.

Como ciencia, la Psicología comparte con numerosas disciplinas el estudio del comportamiento humano, la Criminología, la Psiquiatría, la Antropología, el Derecho, la Sociología, la Medicina forense, etc. coinciden en su objeto de análisis de la conducta criminal, pero lo hacen desde perspectivas diferentes, lo que genera, en consecuencia, categorías, métodos y técnicas de estudio diferentes.

Una gran parte de la psicología criminal, conocida como *profiling* de delincuentes comenzó en 1940, cuando los Estados Unidos crearon una Oficina de Servicios Estratégicos, que encargó a William L. Langer's, un famoso psiquiatra, la elaboración de un perfil de Adolf Hitler.

Después de la 2da Guerra Mundial, el psicólogo británico Lionel Haward, el cual trabajaba para la Fuerza Aérea Real, elaboró una lista de características que los criminales de guerra nazi podían exhibir. En 1950, el psiquiatra

James A. Brussel elaboró un perfil preciso de un terrorista que tenía aterrorizado a Nueva York.

El rápido desarrollo de la Psicología Criminal ocurrió cuando el FBI (Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos) abrió una Unidad de Análisis de Conducta en su academia, en Virginia. Posteriormente, fue creado el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos. La idea era tener un sistema que pudiera encontrar conexión entre otros principales crímenes sin solución.

En el Reino Unido, el profesor David Canter fue pionero en la orientación de la policía, comenzó a intentar abordar el asunto desde un punto de vista más científico.

Entre las personas más notables que criticaron el modo en el que la Psicología y la Psiquiatría trataban el crimen, se destaca el filósofo francés Michel Foucault. Este mostró como, desde su origen, la prisión crea una clase profesional de criminales (reincidentes), separada de las clases populares, muchas veces utilizada por la policía como informantes. Foucault reveló también que, si el sistema penal en la Europa Moderna castigaba al delito o acto en sí, el nuevo régimen disciplinar castigaba a la persona y no al delito.

En esta lógica no se preguntaba: ¿qué hiciste? (como en la escuela clásica de criminología, o sea, con Cesare Beccaria y Jeremy Bentham), sino ¿quién eres tú? (como en la escuela italiana, por Ej. Cesare Lombroso). En este ámbito, el papel de la Antropología, la Psiquiatría y otras ciencias afines, evidentemente, era convertirse en herramientas usadas para crear el concepto de “personas peligrosas”.

Ante la necesidad de explicar las conductas, los fenómenos y procesos psicológicos que dan al traste con la personalidad de aquellos sujetos que delinquen, se encuentran diversos autores que denominan de diferentes maneras la ciencia psicológica, donde su objeto de estudio es el hombre que comete el delito y su personalidad, conducta

y las motivaciones que lo llevan a delinquir. En este sentido se descubre lo que Manzanero, L. A. (2009) define:

La Psicología Forense consiste en la aplicación de la Psicología (métodos y conocimientos) a la realización de pruebas periciales en el ámbito del Derecho. Es, por tanto, la Psicología aplicada a los tribunales o a aquellas actividades que el psicólogo puede realizar.

En el Programa de Psicología Criminal de la Universidad de Valencia, Garrido, V. (2005) define:

La Psicología Criminal o Criminológica es, según su étimo, el estudio del alma del sujeto criminal. Aunque aquí, el étimopsique se usa en sentido científico, es decir, aquellos rasgos de la personalidad total del delincuente y no su alma en sentido metafísico. La Psicología criminal, ha rebasado el límite de la observación individual del sujeto antisocial extendiéndose hacia estudios de la conducta criminal y de los factores psicológicos que influyen en la criminalidad, ya sean individuales o colectivos.

Se reconocen cuatro ramas científicas para la observación psicológica de la personalidad:

- *La Psicología Criminal que estudia al delincuente en cuanto es autor del delito.*
- *La Psicología Judicial que estudia su comportamiento en cuanto es imputado de un delito.*
- *La Psicología Carcelaria que lo estudia mientras está condenado, expiando una pena carcelaria.*

La autora Marchiori, H. (2007) considera que:

La Psicología criminal trata de averiguar, de conocer qué es lo que induce un sujeto a delinquir, qué significado tiene esa conducta para él, por qué la idea de castigo no le atemoriza y le hace renunciar a sus conductas

criminales; la psicología Criminal trata de averiguar su significado de manera histórico-genética. (p.92)

Por otra parte, Guardiola J.I (S/A) entiende que:

La psicología criminal se encarga de estudiar las aptitudes, los procesos mentales, la personalidad, la motivación del criminal y de su crimen. Parte de la psicología del individuo y se adentra en la psicología de los grupos sociales o antisociales. Así pues, consideramos la Psicología criminal como una ciencia social aplicada, que busca resolver problemas complejos, utilizando un método, y no actúa de forma aislada, ya que es interdisciplinar.

El Objeto de la Psicología Criminal es el estudio científico de los determinantes psicológicos del comportamiento antisocial y delictivo. Sus ámbitos de aplicación son: elaboración son las teorías sobre el conflicto, las técnicas específicas, victimización y reacción social, testimonios, investigación policial y la prevención del delito (p.11).

Consideramos que de las definiciones que diferentes autores asumen sobre la Psicología Criminal, esta es una con la que esta autora tiene más puntos de contacto, en tanto concibe la prevención consustancial al quehacer de la Psicología Criminal como ciencia, aunque no aborde en la misma la intervención preventiva y solo el enfoque teórico sobre los fenómenos.

También en este definir de las ciencias que estudian la psiquis, personalidad y conducta de los sujetos comisores de delito, se habla de Psicología Policial y Rui Abrunhosa Gonçalves y otros (1999) la definen como:

La aplicación de la Psicología Jurídica a los procesos organizativos (selección de personal, de comunicación, y socio-comunitarios...). De formación (asistenciales, manejo de estrés...) administrativos y de apoyo interno (apoyo psicológico profesional y familiares, factores familiares de riesgo...) y de refuerzo a la toma de decisiones en la investigación criminal (análisis de la conducta criminal, negociación en la toma de rehenes...)

Encontramos al español Miguel A. Soria Verde (2005) que define la Psicología Criminal como: *“aquella vertiente de la Psicología Jurídica que agrupando diversas áreas de la misma intenta abordar la comprensión del fenómeno de la delincuencia, sus causas, efectos y tratamiento, con la finalidad de ayudar a su reducción mediante métodos preventivos o interventivos”* (p.29).

En esta definición de Soria, la autora comparte el enfoque preventivo y/o interventivo para afrontar el delito, pero no coincide con el criterio de que la Psicología Criminal sea una vertiente de la Psicología Judicial, sino lo contrario. La Psicología Criminal se considera que estudia otros fenómenos y procesos vinculados a la criminalidad, a la comisión del delito y sus autores, que no solo se expresan en el contexto judicial, sino también en el origen, causas, motivos y condiciones que han llevado al sujeto cometer el delito.

Encontramos una definición compartida por diversas universidades y autores donde señalan que:

(...) la Psicología Judicial o también llamada Criminal, comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención, asesoramiento y/o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, que inciden en el compor-

1. Dpto. Psicología de la Salud Universidad de Alicante. Rui Abrunhosa Gonçalves y otros (1999) no prefácio a Crimes: práticas e testemunhos: actas do congresso “Crimes Ibéricos”. Braga: Universidade do Minho. CEP; Marchiori, Índice Definición de Psicología Criminal y su objeto de estudio en Monografía.com, Internet; La psicología de la investigación del delito por alarconflores en Monografías.com, Internet; La Psicología de la Delincuencia por Santiago Redondo Illescas y Antonio Andrés Pueyo, Universidad de Barcelona en Caminando pela Psicología, Internet.

tamiento legal de las personas, mediante la utilización de métodos propios de la Psicología como ciencia y se ocupa por tanto del estudio de distintos ámbitos y niveles de intervención: Psicología Aplicada a los Tribunales; Psicología Penitenciaria; Psicología de la Delincuencia; Psicología Judicial (testimonio, jurado); Psicología Policial y de las Fuerzas Armadas; Criminología, Victimología; Mediación de conflictos.¹

INSUFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LAS DEFINICIONES DADAS A LA PSICOLOGÍA CRIMINAL POR DIFERENTES AUTORES A NIVEL INTERNACIONAL

- Se utilizan categorías diferentes para señalar el estudio de fenómenos y procesos iguales (Psicología Judicial, Psicología Criminal, Psicología Forense, Psicología que estudia el delito).

- En su mayoría, los autores que trabajan sobre la definición de la Psicología Criminal la identifican con la Psicología Judicial. En su generalidad, asocian la Psicología Criminal al estudio del delito, en tanto procesos judiciales y su relación con las Ciencias Jurídicas y Penales, y no como una rama de las Ciencias Psicológicas. En ocasiones, restringen su campo a los fenómenos que suceden en los tribunales, el testimonio, la capacidad psíquica del delincuente para ser imputado penalmente y el propio trabajo de los tribunales y Jueces en sí mismo.

- Se tiende a no contemplar el papel que debe desempeñar la Psicología Criminal y sus especialidades afines en el trabajo de prevención social en su sentido más amplio, para contribuir en la concepción, elaboración y aplicación de estrategias preventivas del delito para la comunidad.

- No se contempla el papel de la Psicología en la actividad policial de carácter secreto, su valor en tanto descubrimiento, prevención y corte, así como el de preparación de las fuerzas y colaboradores que participan en ella.

- No siempre declaran la existencia de principios, categorías y métodos propios que hacen a la Psicología Criminal una ciencia específica dentro de las Ciencias Psicológicas.

Por otra parte, en Cuba se desarrolla una rama de la Psicología relacionada al enfrentamiento de la actividad subversiva del enemigo que se denominó Psicología Operativa y se definió como:

La ciencia que estudia los fundamentos psicológicos, tanto de la actividad operativa de los Órganos de la Seguridad del Estado y el Orden Interior como de la actividad subversiva enemiga o delictiva a la que se enfrenta y las regularidades y fenómenos psicológicos de las personas que la realizan o que caen en su esfera de atención. (Abello, 1980)

La Psicología Criminal ha sido entendida tradicionalmente como la ciencia que estudia las causas y motivos, normales y/o patológicos que conducen a una persona a convertirse en un delincuente, y la Sociología como aquella que analiza la relación entre la delincuencia y distintos segmentos de la población.

Se considera pertinente por esta autora, definir una categoría de la Psicología que estudie el delito y sus comisores en todos los contextos del enfrentamiento de este y que se adecue a las tendencias internacionales y, en especial, a Cuba, de ahí que en un acercamiento a la definición de la Psicología Criminal se comprende que:

La Psicología Criminal es la rama de la psicología que estudia, y explica los procesos y fenómenos psicológicos que se manifiestan en el enfrentamiento a la actividad delictiva común y subversiva del enemigo, así como las regularidades y fenómenos psicológicos de los sujetos que las realizan, enfrentan y/o caen en sus esferas de atención.

Esta rama de las Ciencias Psicológicas se apoya en los métodos generales de la Psicología

como ciencia, así como desarrolla principios, categorías, métodos y procedimientos propios de la Psicología Criminal y sus especialidades afines como son: la Psicología Operativa, Psicología Policial, Psicología Judicial y/o Psicología Forense, por tanto, se ocupa de distintos ámbitos y niveles de intervención, en función del trabajo de prevención, descubrimiento y corte del accionar delictivo común y subversivo.

Se considera que la definición presentada es un punto de partida en el enriquecimiento teórico y metodológico necesario para el desarrollo de la Psicología Criminal y sus ramas afines. Esta debe ser enriquecida en la continuidad de la investigación por los profesionales de la Psicología que en su esfera de actuación está el enfrentamiento a la criminalidad, en cualquiera de sus manifestaciones.

En el desarrollo del trabajo de la investigación y su impacto en el enfrentamiento a la criminalidad se ha venido trabajando en un proyecto de Maestría en Psicología Criminal, en función de la formación académica de los profesionales de la Psicología, la Sociología, Criminología y juristas que, en sentido general, enfrentan el delito en diferentes esferas de actuación. Como un resultado palpable de este intento, se han desarrollado tres Diplomados directamente relacionados con: Las Bases teórico -metodológicas de la Psicología Criminal; La Psicología Operativa y la Psicología Judicial.

CONCLUSIONES

- Se contextualiza históricamente el uso de la Psicología como herramienta indispensable en el combate al delito.
- Se hace un análisis crítico de las definiciones y posiciones adoptadas por diferentes autores a nivel internacional sobre la Psicología que se dedica al enfrentamiento al delito y sus diferentes ramas.

- Se presenta un acercamiento a la definición de la Psicología Criminal en el contexto del enfrentamiento a la criminalidad en Cuba, para la reflexión, el debate e investigación de esta ciencia por los especialistas que, desde la Psicología, estudian y afrontan el delito.

- Se desarrollan acciones de formación académica para la preparación de profesionales que enfrentan el delito en diferentes esferas de actuación.

BIBLIOGRAFÍA

- Abello Mesa, L. (1991). Introducción a la Psicología Operativa. La Habana, Cuba: ISCI “Hermanos Martínez Tamayo”.
- Garrido, V. (2005). ¿Qué es la psicología criminológica? Madrid, España: Biblioteca Nueva.
- Guardiola J.J, Nicolás. (S/A). Psicología Criminal como Ciencia. Diplomado en Criminología. UCAM. Consultado en Google Académico Internet, en febrero 2012. Disponible en: <http://repositorio.ucam.edu/discover>.
- Manzanero, L.A. (2009). Psicología Forense: Definición y técnicas. En Colectivo de autores (Ed.), Teoría y Práctica de la Investigación Criminal. Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” UNED.
- Marchiori, H. (2007). Definición de Psicología Criminal. México: Porrúa, SA
- Rui Abrunhosa Gonçalves, y otros. (1999). Dpto. Psicología de La Salud Universidad de Alicante no prefácio a Crimes: práticas e testemunhos: actas do congresso “Crimes Ibéricos”. Braga: Universidade do Minho. CEP
- Soria, M.A. y Sáiz, D. (Coords.) (2006). Psicología Criminal. Madrid, España: Pearson Educación.

Necesidad de una profunda reforma en nuestro sistema de justicia penal

MSc. José Candia Ferreyra

Fiscal de la Fiscalía General de la República

Profesor Titular. Especialista en Derecho Penal

INTRODUCCIÓN

El procedimiento penal en la República de Cuba, tanto en su rama ordinaria o común, como en la militar, es el fruto de la evolución que tuvo en nuestro país la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) del imperio español, que fuera puesta en vigor en 1882 y extendida varios años más tarde a los territorios coloniales de Cuba y Puerto Rico.

En el momento de su elaboración, la LECrim recogió instituciones y normas que décadas antes habían avanzado otras legislaciones de la Europa continental, especialmente las de Alemania y Austria, a partir de las importantes reformas del proceso penal que surgieron de la revolución francesa y fueron en principio plasmadas en el Código de Instrucción Criminal francés de inicios del siglo XIX, que pretendió establecer una alternativa de mayor modernidad en el proceso penal, conjugando instituciones y principios propios del enjuiciamiento de tipo inquisitorial que se generalizó en el continente, con las instituciones y normas que el procedimiento anglosajón preservó, de conformidad con principios asentados desde antes del Medioevo.

Elementos de particular trascendencia en esta nueva legislación fueron el establecimiento de la separación de las funciones

de acusar y juzgar y del juicio oral y público como vía mediante la cual el juzgador debía entrar en contacto inmediato y directo con el material probatorio que serviría de base a su decisión sobre el caso.

De este modo, la LECrim resultó ser uno de los códigos procesales penales más avanzados para su época en el mundo occidental de tradición románico-francesa, al momento de su promulgación.

En nuestro país tomó su propio camino de evolución al realizársele importantes modificaciones durante la ocupación militar norteamericana desde los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX y al entrar en vigor la Constitución de 1940, moderna y progresista que, en este orden de cosas, entre otras, elevó a rango constitucional el llamado recurso de Habeas Corpus, consagró el principio de presunción de inocencia y el derecho a la no autoincriminación.

Cumplidos más de 90 años de la promulgación de la LECrim en España, se produjo la sustitución de su versión criolla, por la primera Ley de Procedimiento Penal (LPP), No. 1251, promulgada en 1973 y en vigor desde 1974, la cual fue perfeccionada y a su vez sustituida en 1977 por la ley de igual denomi-

nación, No. 5 de ese año, que posteriormente fue varias veces modificada.

Con cambios dirigidos a simplificar la regulación y dotar de más agilidad los procesos, reformas en algunos procedimientos y variaciones en determinadas instituciones, estas leyes, sin embargo, mantuvieron la esencia de la vieja ley procesal decimonónica: separación de las funciones de investigar, acusar y juzgar, aunque quedando la segunda prácticamente monopolizada por el Ministerio Público, manteniendo facultades del tribunal para cuestionar el ejercicio de la acción penal y para participar en el esclarecimiento de los hechos.

Igualmente se mantuvo la división en dos fases del procedimiento en primera instancia, la igualdad de las partes y el carácter contradictorio en la fase de juicio oral, responsabilidad del tribunal en cuanto al establecimiento de la verdad objetiva como base para su decisión y predominio del recurso de derecho como medio de impugnación de sentencias.

Los cambios de mayor importancia que se establecieron finalmente fueron:

- la sustitución del Juez Instructor por el Instructor policial o de la Fiscalía, ambos actuando bajo la supervisión del Fiscal;
- simplificación de los recursos contra resoluciones interlocutorias;
- eliminación del juez personal, sustituido en todos los casos por tribunales colegiados;
- posibilidad de juicio sin formalizar el ejercicio previo de la acusación en procesos por delitos con sanciones de hasta un año de privación de libertad o multa no superior a 300 cuotas o ambas;
- impugnabilidad de todas las sentencias, con recurso de apelación, en forma exclusiva, para los procesos por delitos con sanciones inferiores a tres años de privación de libertad y una nueva primera

instancia para el caso de imposición de la sanción capital;

- ampliación de facultades del Fiscal para no ejercitar la acción penal en algunos casos y para resistirse ante el rechazo del tribunal a aceptar el sobreseimiento libre solicitado;
- aumento de la competencia de los tribunales municipales;
- incremento de los motivos de revisión de sentencias firmes y de las autoridades facultadas para promoverlo ante el Tribunal Supremo Popular (TSP);
- establecimiento de un procedimiento abreviado para delitos flagrantes, cuasi flagrantes y evidentes, en el que se dispuso la facultad del procesado de manifestar su conformidad con la acusación, posibilitando la conclusión del proceso a partir de ese acto, así como la de conformarse con el fallo dictado al momento de su pronunciamiento, haciéndolo firme de inmediato y, en el procedimiento contra acusados ausentes, la posibilidad de sancionar al acusado que no haya comparecido en juicio, en determinados casos.

Mediante disposición constitucional, desde 1975, se consagró la facultad de dictar por el Consejo de Gobierno del TSP instrucciones de obligatorio cumplimiento para los tribunales, a fin de imponer la uniformidad de la práctica judicial en la interpretación y aplicación de la Ley.

Estas modificaciones, si bien importantes, no cambiaron la esencia de nuestro proceso penal, que continuó siendo una mezcla más o menos armonizada de distintos sistemas procesales (lo que se ha llamado indistintamente –y a partir de algunos matices– como sistema mixto, inquisitivo reformado o acusatorio formal), manteniéndose en lo fundamental nuestro sistema procesal anclado en los finales del siglo XIX, vencida ya la primera década del siglo XXI, habiéndose producido un retraso en la introducción de instituciones, normas y tendencias que, de conjunto con algunas de las

que tenemos vigentes, configuran el debido proceso, de conformidad con las modernas teorías al respecto y los consensos plasmados en diversos tratados y convenciones internacionales y recomendaciones de organismos especializados de la Organización de Naciones Unidas.

Adicionalmente, el esfuerzo realizado para reducir los más de 900 artículos (muchos de ellos extensos o con varios apartados) de la LECrim a los 409 de la actual LPP, eliminando trámites que se consideraron innecesarios, además de que no fue un remedio suficientemente eficiente para eliminar el burocratismo en la administración de justicia, trajo como consecuencia la necesidad de que el CG del TSP fuera dictando sucesivamente diversos acuerdos dispositivos o aclaratorios sobre la actividad procesal, cuyo conjunto constituye actualmente una especie de reglamento de la LPP, cuando en realidad muchas de tales disposiciones deberían formar parte de la Ley.

Finalmente, cabe señalar que por haber sido realizadas las reformas de la Ley No.5 de Procedimiento Penal en oportunidades diversas y en algunos casos provocadas por situaciones coyunturales, se han generado omisiones e incongruencias en el texto de la Ley, de las que solo algunas han sido salvadas mediante acuerdos como los antes referidos u otras disposiciones de órganos del TSP.

A pesar de existir en nuestro país 169 tribunales municipales y actualmente 15 tribunales provinciales y una sala especial (en el Municipio Especial Isla de la Juventud) con competencia para el conocimiento de delitos con sanciones superiores a tres años de privación de libertad, el volumen de casos que se presentan al conocimiento de todos estos órganos jurisdiccionales y especialmente ante los de nivel provincial y las dificultades objetivas y orga-

nizativas que con frecuencia impiden concluir cada proceso en una única sesión, provocan una carga de trabajo que no resulta recomendable para la serena reflexión que requiere la solución de cada caso criminal que se someta a juicio y para la respuesta del también considerable número de recursos que se interponen contra las sentencias.

También, dada la amplitud de los motivos legales que amparan el empleo del procedimiento de revisión de sentencias firmes, la cantidad de solicitudes que deben procesar las autoridades facultadas para promoverlo sigue siendo alta y es también relativamente elevada la cantidad de procedimientos de revisión de sentencias firmes en materia penal promovidos ante el TSP y resueltos por las salas de justicia respectivas¹.

Además de todo lo anterior, se manifiestan en la práctica foral diversos indicios de que subyace entre muchos de los operadores del Derecho una interpretación inquisitorial de las instituciones de nuestro procedimiento penal, como consecuencia de la tradición secular de esa forma de enjuiciar y de la tendencia burocrática, también de larga data histórica, de otorgar enorme confiabilidad a las actas escritas, anteponiéndolas en ocasiones a lo que en el proceso se manifieste frente al juzgador.

Este panorama y, especialmente la necesidad de modernizar nuestra legislación para ponerla más a tono con las circunstancias contemporáneas, no solo en el universo del Derecho Procesal, sino también en relación con el enfrentamiento a la criminalidad (que, aunque requiere diversidad y multilateralidad, tiene en el sistema penal un instrumento fundamental, aun cuando se emplee en última instancia), justifica que no se dilate por más tiempo una profunda reforma de nuestro sistema procesal penal.

1. Antes de la publicación de este trabajo, se promulgó el Decreto-Ley 310/13, que entre otras cosas amplió la competencia de los TMP para el conocimiento de delitos y las facultades de la policía para dar solución a casos sin acudir al proceso, temas que resultarían superficialmente tratados si se pretendiera incluirlos en este trabajo, pero en nuestra opinión, tales medidas, ni solucionarán el problema del congestionamiento de los tribunales ni son las más apropiadas alternativas para, al menos, tratar de paliar esa situación.

No basta con introducir modificaciones aisladas y puntuales en la ley vigente –que, a no dudarlo, ha cumplido con cierto grado de eficiencia su papel durante algo más de 38 años, a pesar del lastre que la mantiene atada a un pasado generalmente superado, incluso por países de América que hasta hace unos veinte años todavía no habían estrenado el juicio oral y público y los jueces seguían basando sus fallos en el análisis indirecto (mediante las actas) de los medios probatorios– sino que se necesita un cambio revolucionario, que produzca el nacimiento de una nueva legislación (Código propiamente) procesal en materia penal.

En función de tal propósito, se formulan las tesis que siguen, sin la aspiración de que se tengan como únicas e invariables, sino tan solo como una referencia del camino que en nuestro criterio debería seguirse para una reforma útil y efectiva partiendo de la aplicación de determinados principios propios del derecho procesal penal, que produzca una legislación que perdure por varias décadas sin necesidad de introducir grandes cambios; si al menos las ideas expuestas sirven para promover el debate teórico que permita pulirlas y enriquecerlas y facilitar a los legisladores un esquema de pensamiento y acción coherente, preciso y fundado, habremos comenzado a andar, como dice un antiguo proverbio chino, el viaje más largo comienza con el primer paso.

Es necesario aclarar que en las tesis que a continuación se exponen, hemos tratado de referirnos a los problemas más generales que a la luz de nuestros conocimientos y experiencia hemos apreciado, sin introducirnos en detalles en cuanto a otros puntos criticables, incongruencias u omisiones de menor trascendencia que, mediante una redacción cuidadosa e inteligente del proyecto de

la nueva legislación y una posterior revisión alerta y acuciosa del texto a promulgar, podrán ser resueltos, evitando al mismo tiempo incurrir nuevamente en defectos similares a los hasta ahora existentes.

TESIS SOBRE LA REFORMA PROCESAL PENAL

1. La primera cuestión es qué clase de reforma necesita nuestro procedimiento penal; en este sentido nos inclinamos absolutamente por la idea de que los actuales problemas institucionales, organizativos y subjetivos que enfrentamos en este campo, no se resuelven con modificaciones parciales que aisladamente puedan introducirse en la legislación vigente, sino que se necesita una profunda, amplia y seria transformación del proceso penal, que partiendo de un enfoque sistémico y aplicando concepciones propias del siglo en que vivimos, produzca una ley coherente, moderna, en correspondencia con los principios universalmente aceptados sobre el debido proceso, que instrumente procedimientos dinámicos y ágiles, que elimine el exceso de burocratismo actual, aunque sin merma de las garantías para acusados y víctimas ni injustificadas limitaciones al derecho de acceso a la justicia.

2. Para comenzar los trabajos de elaboración de una nueva ley o más propiamente un código procesal penal, resulta conveniente y provechoso que la Asamblea Nacional del Poder Popular apruebe previamente las bases sobre las que deberá asentarse el trabajo y las propuestas de la comisión redactora².

Estas bases deben partir de las normas constitucionales sobre el proceso y las funciones de los tribunales y de los principios generales del dere-

2. Después de la promulgación de la Ley No. 5 en 1977, todas las reformas posteriores que se le han incorporado se han realizado mediante decretos-leyes, basados en proyectos elaborados por comisiones integradas por especialistas de las instituciones relacionadas con el proceso penal, particularmente de los tribunales, la Fiscalía y el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Justicia (aunque eventualmente se ha dado participación a la Facultad de Derecho y a la organización de los abogados), de tal manera que los propios operadores del Derecho Procesal Penal se han encargado de ajustar la legislación a sus intereses y necesidades, ante los problemas que la práctica diaria plantea y por la vía del consenso entre ellos mismos.

cho procesal penal que los legisladores determinen como sustento de las correspondientes leyes y de la concepción de la política penal de nuestro Estado en relación con cuestiones claves, tales como el tipo de enjuiciamiento deseado (balance entre autoritarismo y garantismo), si el procesamiento por delitos debe ser una función estatal (principios de oficialidad, legalidad e indisponibilidad del proceso) o quedar sujeto al interés del perjudicado (principios de instancia de parte y disponibilidad del proceso) o se opta por compartir responsabilidades entre el deber del órgano estatal y el derecho de quien resulte perjudicado por la infracción criminosa; el fin atribuido al proceso (establecimiento objetivo de la realidad histórica o restablecimiento del equilibrio o paz social o una coexistencia proporcionada de ambos fines) y otras.

Por supuesto, deberán tomarse en cuenta, adaptándolas a nuestras condiciones y características, las convenciones internacionales de las cuales nuestro Estado es parte, así como las recomendaciones de los órganos correspondientes de la ONU sobre la prevención y enfrentamiento al delito y el tratamiento del delincuente.

Adicionalmente, será necesario incorporar, en la medida en que la nueva legislación lo requiera, algunas de las muchas disposiciones que el Consejo de Gobierno del TSP ha dictado desde el año 1977 para rellenar lagunas legislativas de la vigente Ley de Procedimiento Penal.

Dado que la composición de nuestro órgano legislativo estatal es minoritariamente de juristas, resulta igualmente muy útil y conveniente que el proyecto de ley (Código) que se presente, sea acompañado por una exposición de motivos o fundamentos, en que se expliquen claramente las razones de regular de una u otra forma los mecanis-

mos e instituciones procesales y los cambios más importantes que se propongan.

3. La nueva ley o código procesal penal ha de ser concebida como un sistema de acciones y medidas dirigidas a la prevención, esclarecimiento, enjuiciamiento y represión de hechos calificados legalmente como delitos, al tiempo que permita garantizar el cumplimiento de los derechos legítimos de los que resulten acusados como presuntos responsables y los de víctimas y perjudicados, de conformidad con las modernas concepciones generalmente aceptadas sobre el debido proceso.

Con arreglo a lo anterior, el llamado principio acusatorio y la imparcialidad de los jueces deben ser elementos esenciales a fortalecer en la nueva legislación, eliminando toda institución o norma que implique al tribunal de juicio en la conformación del objeto del proceso sobre el cual deberá caer su pronunciamiento.

4. En la parte general de la nueva legislación resultaría conveniente que se expusieran los principios del Derecho procesal que sirvan de base a su conformación, de manera que los operadores de esa ley, en lo adelante, se puedan orientar por la formulación que a cada uno de tales principios se dé, para la interpretación del contenido de las instituciones y de los preceptos de la propia ley³.

5. Los principios de **legalidad**, de **oficialidad** y de **establecimiento de la verdad material** sobre el hecho imputado, constituyen la columna principal de la base del procedimiento criminal, junto con el **derecho de defensa sin restricciones indebidas**, de conformidad con el artículo 59 de la Constitución de la República de Cuba (CRC). Pero sin desconocer esos principios fundamentales y propios de nuestra tradición, la disponibilidad de las partes sobre el proceso o sobre su objeto, puede tener

3. Hay importantes principios procesales que de un modo u otro están manifestados en determinadas regulaciones de las leyes procesales penales vigentes; sin embargo, otros como la prohibición de la reformatio in pejus y de la ultra petita en las impugnaciones y el de in dubio pro reo así como el de obligación de motivar las sentencias no se expresan, con independencia de que se apliquen, generalmente, en la práctica.

alguna cabida en la ley, en función de la economía procesal, la agilización de los procesos y la mayor eficacia en la reparación de consecuencias de los hechos y el resarcimiento procedente, siempre que se evite merma en los fines de justicia material.

6. Debe perfeccionarse, sobre la base del **principio acusatorio**, la separación entre las funciones de investigación y persecución del delito y la de juzgar, fortaleciendo las medidas dirigidas a garantizar la mayor independencia y la total imparcialidad de los jueces y su autoridad exclusiva de aplicación de la ley penal y de las sanciones y medidas de seguridad en ella establecidas. Al mismo tiempo, debe definirse mejor la responsabilidad del Fiscal con el resultado de las investigaciones previas y dotarlo de toda la autoridad necesaria como titular de la acción penal y controlador del cumplimiento de la legalidad en esa fase del proceso.

7. Con independencia del objetivo fundamental de la Fiscalía General de la República de control y preservación de la legalidad y de la objetividad que debe presidir la actuación del Fiscal en el procedimiento, la supervisión del cumplimiento de las garantías y derechos durante el procedimiento preparatorio ha de estar a cargo de un juez (de garantías o de control del procedimiento) o un colegio de ellos específicamente facultado para resolver, en primera o en segunda instancia, respecto a todo aquello que implique una restricción de la libertad personal, la inviolabilidad de las comunicaciones y del domicilio, del derecho a la defensa o de los derechos patrimoniales del acusado y del derecho al proceso de víctimas y perjudicados.

El juez que en tal función intervenga en un proceso, no podrá integrar el tribunal que, en su día, deba resolver definitivamente sobre la imputación realizada ni en la solución de recursos contra la sentencia que en este proceso sea dictada.

Si bien la actuación objetiva y ajustada a la ley del Fiscal en el curso de la fase preparatoria de los procesos penales no es un imposible, resulta una evidente contradicción que el representante de la

institución encargada de reunir los elementos que permitan fundar una acusación por delito, sea, al mismo tiempo, el garante de los derechos del sospechoso o de quien resulte imputado.

El Fiscal que interviene en un proceso, por muy profesional y honesto que pueda ser, no está en una posición de imparcialidad, representa no solo al Estado, sino también a las víctimas de los delitos, con el interés del esclarecimiento y del eficaz enfrentamiento de la actividad delictiva.

8. Resulta necesario concebir medidas normativas que conlleven o favorezcan la desburocratización del procedimiento, especialmente en las actuaciones de la fase preparatoria, partiendo de que la etapa fundamental de aquel es la realización del juicio oral, en condiciones de publicidad –salvo razonables excepciones en la ley– sin perjuicio del debido aseguramiento de los medios y fuentes de prueba en la etapa previa del proceso y su práctica ante los jueces en la fase decisoria.

En la época de la informática y la digitalización, de la miniaturización de los instrumentos de grabación de audio y de video, resulta por completo obsoleta la exigencia de un acta escrita sobre el desarrollo del juicio oral que, además, no recoge más que síntesis de lo dicho a viva voz en la audiencia. La grabación de todo el proceso, por demás, puede revolucionar el modo de resolver los recursos contra las sentencias de primera instancia.

9. Se deben estudiar y precisar las diligencias realizadas con anterioridad al juicio que puedan considerarse preconstituidas y las garantías necesarias para su realización y admisión como tales, definir el tratamiento de pruebas que se obtengan de manera irregular (prueba ilícita o derivadas de ellas) y modernizar las concepciones acerca del empleo de la ciencia y la técnica en la obtención, procesamiento y evaluación de las pruebas y otros medios de evidencia.

10. A los efectos de descongestionar el trabajo de los tribunales y otros órganos que intervienen

en los procedimientos penales, ha de regularse legalmente la discrecionalidad en el ejercicio de las acciones penales por el Fiscal respecto a hechos que, aunque típicamente constitutivos de delito, hayan tenido escasas consecuencias materiales o insignificante peligrosidad social o cuando hayan conllevado para el autor efectos más graves que la propia pena que pudiera imponérsele, haciendo moral y prácticamente innecesaria la punición.

En la misma forma, deben preverse otras salidas alternativas al proceso para otros casos de más trascendencia social o con mayores perjuicios, pero que solo afectan bienes jurídicos normalmente disponibles⁴. Tales alternativas pueden contemplar medidas correctivas no penales, el resarcimiento por daños y perjuicios materiales y morales, sin necesidad de llegar a juicio, salvo el caso de que sean incumplidas las medidas y obligaciones impuestas a los responsables.

11. Con similares propósitos de economía procesal, debe preverse la posibilidad de manifestación, en cualquier tipo de procedimiento, de la conformidad con la acusación una vez que esta sea formalizada y aprobada para el examen judicial del caso, como mecanismo que puede dar lugar a la terminación del proceso sin la realización del juicio oral y a la inmediata firmeza de la sentencia dictada con arreglo a la voluntad del acusado. Posibilitar que tal conformidad pueda plantearse, cuando menos, desde que se requieran las conclusiones provisionales del defensor del acusado, de modo que, de ser admitido el consenso, se pueda prescindir también del resto de los trámites preparatorios del juicio oral.

12. Establecer formas de incorporación de víctimas o perjudicados al procedimiento como parti-

cipante con atribuciones y obligaciones, sin que su ausencia o inactividad limite las posibilidades de desarrollo del proceso ni que su intervención conlleve innecesarias dilaciones y la posibilidad del ejercicio de la acción por el perjudicado u otro acusador, con independencia del Ministerio Público o en forma adherente.

13. Determinar casos en que la falta de interés público permita que el Fiscal no participe en el juicio ordinario, si hay otro acusador. En correspondencia con ello, dar cabida al principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, en el marco de las normas que deben regular la facultad de no proceder, tanto para el Ministerio Fiscal como para el particular.

14. Tomando en cuenta los principios de imparcialidad, igualdad procesal y contradicción, moderar y perfeccionar la regulación de la cuestionable facultad del tribunal de devolver las actuaciones que presenta el Fiscal con solicitud de apertura a juicio oral o de sobreseimiento libre.

Siendo la esencia de este instituto el eludir el inicio de un juicio o la aprobación de un sobreseimiento libre sin fundamento probatorio suficiente, la decisión al respecto puede estar a cargo del Juez de Garantías o de Control o de un órgano colegiado integrado solo por jueces profesionales (con vista preliminar al respecto y escuchadas todas las partes o sin realizar audiencia), de manera que los jueces que en su día conocerán del objeto del proceso no participen en la decisión de pasar el asunto a juicio o no.

En este trámite, si hubiera audiencia, de plantearse conformidad con la imputación, podría adoptarse la decisión que corresponda por esta misma autoridad jurisdiccional, ya que, al

4. No deben, sin embargo, concederse al respecto facultades demasiado amplias a los órganos no jurisdiccionales para aplicar sanciones por vía administrativa ante determinados delitos, debiendo quedar limitada tal prerrogativa a los ilícitos de menor entidad (mínimas sanciones) y consecuencias de poca trascendencia. No se debe generalizar demasiado solucionar el conflicto social mediante medidas pecuniarias aun cuando estas fueran relativamente elevadas, pues esto privilegia a los que tienen más en desmedro de los menos favorecidos económicamente en la sociedad.

obviarse el juicio, no es necesaria la constitución de un tribunal para realizar una vista, salvo que se considere que, por alguna razón, la conformidad manifestada es inadmisibile.

En esta propia oportunidad procesal, deberá examinarse la situación del acusado y, de conformidad con lo que se decida sobre el paso o no a la fase del juicio oral, aplicar o modificar o revocar, la medida cautelar que corresponda.

15. La regulación de los trámites con el sobreseimiento libre solicitado por el Fiscal, debe hacerse de modo que no se obligue al tribunal a disponer el equivalente a una sentencia absolutoria en contra de su propio criterio sobre el caso, cuando ninguna de las demás partes acusadoras asuma el ejercicio de la acción penal.

La falta de acción por ente ajeno, impide que el tribunal entre al conocimiento y solución del asunto, pues tendría que asumir la función de acusador y delimitar el objeto del proceso y las pretensiones correspondientes; pero obligar al órgano jurisdiccional a acatar la solicitud de sobreseimiento libre a pesar de no considerarlo fundado, pone en manos del Ministerio Público el ejercicio del *ius puniendi*, que es exclusivo del juzgador.

Una posible solución, sería que el tribunal discorde, en lugar de incitar al Fiscal para que ejerce la acción, directamente ofrezca a otros posibles interesados la posibilidad de sostenerla de manera particular, pero de no hacerlo estos, debería devolver las actuaciones al Fiscal, expresando el desacuerdo del tribunal, para que archive las actuaciones, pues, el Tribunal a falta de acción acusatoria, no puede iniciar el proceso, pero ello

no debe implicar que se le imponga adoptar una resolución que tiene el mismo efecto de una sentencia absolutoria.

16. Regular de modo más apropiado y en una etapa más temprana del proceso, el momento en que se formaliza la situación del acusado como sujeto procesal, con independencia de la decisión que pueda adoptarse sobre su aseguramiento con alguna medida cautelar, delimitando además en ese acto, las imputaciones que deba enfrentar, sin perjuicio de que estas puedan ser modificadas (ampliadas o reducidas) en el curso de la fase preparatoria del proceso hasta el momento que se formule la acusación ante el tribunal.

17. El procedimiento relativo a los delitos con sanciones hasta de un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas debe ser formulado sin imprecisiones y, especialmente definiendo correctamente las funciones del fiscal, eliminando su actual facultad de sobreseer actuaciones “definitivamente” (decisión cuyos efectos son actualmente imprecisos), restituyendo al tribunal su autoridad para el sobreseimiento libre en los casos que proceda y estableciendo la obligatoriedad de fijar el objeto del proceso por el Fiscal, aun cuando sea con mínimas formalidades, al remitir al tribunal las actuaciones, órgano este último que deberá notificar de la acusación del Ministerio Público a los sujetos del procedimiento con anterioridad a la vista, teniendo en cuenta que se trata de procesos en los cuales el tribunal puede imponer sanciones hasta de un año de privación de libertad e incluso más, de concurrir determinadas circunstancias, no de juicios por faltas o contravenciones sancionables solo con multas o con pocos días de privación de libertad ⁵.

5. Es conveniente, al abordar la modernización de nuestra legislación penal sustantiva, plantearse el tema de si realmente todos los tipos de delito que tienen previstas sanciones de hasta un año de privación de libertad, requieren realmente de ese límite sancionador relativamente severo y el grupo de figuras formado por las que tuvieran tal característica, podría ser el objeto de un proceso sencillo, ágil y eminentemente oral. Téngase en cuenta que el Código Penal autoriza actualmente a la policía para “juzgar” cualquier hecho constitutivo de delito sancionable con privación de libertad de hasta un año de duración.

18. Establecer regulaciones generales sobre la obtención, custodia y traslado de piezas de convicción y otro material probatorio; sobre la validez, nulidad o anulabilidad y la inadmisibilidad de pruebas y acciones, así como las consecuencias respecto a lo que se haya derivado de una prueba ilícitamente obtenida o que haya sido declarada nula. Precisar reglas en que ha de basarse la libre valoración de la prueba por el órgano juzgador, tales como la necesaria congruencia con lo imputado y la fundamentación razonada de la valoración del material probatorio.

19. Regular las facultades del tribunal en relación con la admisión y práctica de las pruebas de modo más preciso, a partir de que el principio predominante es el de la aportación por las partes, especialmente por la acusadora; definir mejor los casos en que el tribunal puede rechazar pruebas oportunamente propuestas y ampliar las posibilidades de las partes para incorporar prueba nueva antes de que se concluya la fase de su práctica en el juicio⁶ o reexaminar a quien ya haya comparecido; definir con toda claridad que el tribunal no puede incorporar por sí mismo, en función de su obligación de esclarecer la verdad material sobre los hechos, nuevos medios de prueba antes de agotar la práctica de las pruebas propuestas por las partes que previamente haya admitido. Perfeccionar la regulación de la práctica de pruebas preconstituidas y las demás que se puedan anticipar al comienzo de la vista oral, así como la de las que resulten irreproducibles.

20. Perfeccionar la regulación de cuestiones previas al juicio que deban resolverse preferentemente, de modo incidental antes del comienzo de la vista, como, por ejemplo, incluir la cuestión de *litispendencia* y acumulación de procesos.

Igualmente, deben definirse el contenido y los efectos de la cosa juzgada en materia penal.

21. Se deberán ampliar las facultades del tribunal para intervenir activamente en el examen de las pruebas en el juicio, facultándole para formular preguntas a los acusados después del interrogatorio por las partes, disponer el reexamen de quien ya haya comparecido y, en general, favorecer que la vista se desarrolle de manera más dinámica y menos formal.

22. Fortalecer la concreción del principio de inmediación jurisdiccional en la apreciación de las pruebas, estableciendo claramente que, sin merma de la facultad de libre valoración de cada medio de prueba, el tribunal no pueda sustituir con el resultado plasmado en actas de la fase preparatoria, el resultado que haya tenido la práctica de esa propia prueba en el juicio oral. Prohibir la perniciosa práctica de requerir del acusado al momento en que le corresponde declarar en la vista para que ratifique la declaración prestada en algún momento previo, sin ni siquiera dar lectura a tal declaración.

23. En función de ampliar las garantías efectivas del ejercicio del derecho de defensa, deben preverse medidas organizativas y las atribuciones correspondientes para una participación más activa de los defensores en todas las fases del proceso, incluyendo su obligación de buscar y fijar los elementos probatorios a su alcance en función de los intereses de su representado y para posibilitar la comunicación del acusado con su defensor durante todo el desarrollo del juicio oral. Establecer la imposibilidad de designar nuevo defensor en el acto mismo de iniciar el juicio oral o durante su desarrollo y continuar inmediatamente el proceso sin facilitar el tiempo y las condiciones

6. En la actualidad, salvo limitadas excepciones previstas en el art. 340 de la LPP, ni las partes ni el tribunal pueden incorporar nuevos medios de convicción una vez iniciada la fase de juicio y, de obtener nuevas pruebas después del auto que admitió las que el tribunal estimó necesarias y útiles para la vista, las partes tendrían que reservarlas para intentar que sea promovido por alguna de las autoridades facultadas, luego de la firmeza de la sentencia, un procedimiento de revisión, lo que evidentemente va en contra del principio de economía procesal, incrementando los costos y la demora de los procesos.

necesarias para que este nuevo representante del acusado se prepare apropiadamente para el ejercicio de su función.

24. Perfeccionar la institución recogida en el actual artículo 350 de la LPP (fórmula) a partir de que, en virtud de los artículos 120 y 122 de la CRC, corresponde a los tribunales, en exclusiva, la interpretación y aplicación de la ley penal y la facultad de sancionar, pero resulta conveniente, a los efectos de prevenir a las partes del proceso para su mejor actuación y defensa de sus posiciones y en función de la impartición de la justicia, alertarlas acerca de la posible consideración de una tesis distinta sobre el hecho (en cuanto a circunstancias no esenciales, en correspondencia con la invariabilidad del objeto del proceso) o sobre las calificaciones jurídicas planteadas, distinta de las ofrecidas por ellas.

Debe precisarse en este precepto la posible aplicación de esta fórmula no solo en caso de que el Fiscal retire la acusación, sino también cuando solicite la absolución y el tribunal no concuerde con ello, así como en el caso que estime que se ha incurrido en error en la calificación del grado de ejecución del delito.

Establecer que tal alerta se formule en cualquier momento del proceso en que el tribunal advierta la probabilidad del cambio, siempre antes de que se expongan los informes de las partes, aunque debe estudiarse, al menos como excepción, la posibilidad de volver a constituirse en la audiencia con las partes para solicitar aclaraciones sobre una nueva posible tesis, si la duda al respecto surgiera en el momento de intentar acordar la sentencia.

En el propio artículo, definir que el tribunal no podrá agravar la situación del acusado en relación con lo solicitado por las partes acusadoras en sus conclusiones definitivas, sin acudir al empleo de esta fórmula.

En función del cumplimiento del principio de igualdad procesal, debe valorarse la convenien-

cia de que el Tribunal alerte a la parte acusadora sobre la posibilidad de apreciar una eximente de la responsabilidad penal o alguna otra circunstancia excluyente de la penalidad que no haya sido calificada por ninguna de las partes.

25. La regulación del contenido de las sentencias penales debe establecer la obligatoriedad de razonar expresamente la valoración de la prueba practicada en el proceso para formar su convicción (motivación), tomando como base de la norma correspondiente las indicaciones al respecto del CG del TSP. Todos los recursos conocidos en segunda instancia deben resolverse, también, mediante sentencia con declaración de hechos probados y debidamente motivada.

26. El sistema de impugnaciones debe generalizar la doble instancia (que puede tener diversas alternativas de realización de la segunda) tomando en cuenta las exigencias de los instrumentos internacionales respecto a las sentencias de condena. Mantener la posibilidad del recurso de casación como una alternativa a escoger por el recurrente, al menos para determinados procesos y a favor de la unificación de la jurisprudencia. Analizar la posibilidad de establecer la horizontalidad de los órganos de apelación respecto al tribunal cuya resolución se recurre, con lo que se evitarán trámites, traslados de documentos y personas y dilaciones en esos procesos.

27. Las normas sobre los diversos medios de impugnación deberán establecer expresamente causales de inadmisibilidad, distinguiendo entre las perentorias y las que pudieran no serlo.

28. El recurso de casación, de mantenerse, requiere ser modernizado y ampliado, estableciendo la posibilidad de impugnar el quebrantamiento de garantías y de formalidades esenciales del proceso que hayan tenido presumible trascendencia al fallo, la incongruencia en puntos esenciales de hecho entre la imputación fáctica y el resultando probado de la sentencia y entre este y la motivación de la sentencia.

De mantenerse el actual sistema de procedimientos de instancia única con un recurso limitado a cuestiones de derecho, valorar, al menos como excepciones posibles en el procedimiento casacional, la admisión de pruebas y el cuestionamiento del relato de hechos y de la validez de pruebas de importancia que se hayan tomado como fundamento del fallo acordado.

29. El tribunal de casación, en general, no debe tener posibilidades de declarar un quebrantamiento de oficio, en virtud del principio dispositivo que conforma los mecanismos de impugnación.

Cabría como excepción a esta regla, con independencia de la existencia de una causal que autorice recurrir una resolución por tal motivo, hacerlo exclusivamente cuando aprecie por sí mismo un quebrantamiento de garantía o de formalidad esencial que haya trascendido al fallo, de modo especial cuando haya producido indefensión y, en todo caso, con la reserva de que la resolución que se dicte como consecuencia del nuevo juicio o la nueva sentencia, no perjudique al acusado, aunque no hubiera sido recurrente.

30. En la tramitación de los recursos de casación, no deben formar parte del tribunal *ad quem* jueces legos o, de estimarse su necesidad a pesar de que se trate solamente del examen de la aplicación del Derecho, deben designarse para integrar la sala que se pronunciaría sobre el caso jueces legos que sean juristas titulados.

31. El procedimiento de revisión debe quedar limitado a casos extraordinarios donde se advierta un grave error en cuanto a los hechos que motivaron la imposición de la sanción, especialmente cuando se alegue el yerro mediante pruebas obtenidas con posterioridad a la firmeza de la sentencia o resolución definitiva (hechos nuevos, demostración de falsedad en las pruebas o de corrupción o vicios de voluntad en la actuación de los jueces) y para graves quebrantamientos de garantías del proceso trascendentes al fallo acordado.

La resolución que disponga la aplicación de medidas de seguridad predelictivas (de mantenerse como un procedimiento judicial) debe también ser objeto del procedimiento de revisión; también debe ser impugnabile por esta vía el Auto mediante el cual se declare la extinción de responsabilidad penal, cuando sus fundamentos sean falsos o ilegales y el beneficiado con ello se encuentre realmente vivo.

32. En función del derecho de libre acceso a la justicia, el sancionado debe estar facultado para promover directamente la revisión ante el Tribunal correspondiente. La facultad de promover la revisión, ante instancia o de oficio, debe corresponder solo al Fiscal General y, si se estimara también procedente, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, obviando la intervención de autoridades administrativas ajenas al proceso.

Asimismo, de conformidad con el principio *favor rei* la ausencia del sancionado en el desarrollo del procedimiento promovido en su interés, no debe resultar obstáculo para que, garantizado el derecho de defensa mediante abogado designado o de oficio, el tribunal de revisión resuelva sobre la pretensión de anulación presentada a su favor; en sentido contrario, no podrá dictarse sentencia de revisión que perjudique al sancionado, absuelto o beneficiado con sobreseimiento libre, que no haya podido ejercitar personalmente su derecho de defensa en la vista de revisión.

33. La ley procesal debe garantizar adecuadamente la protección jurídica del sancionado cuya sentencia es anulada en revisión sin que se dicte directamente una sentencia absolutoria o condenatoria en sustitución de aquella, debiendo en ese caso el propio tribunal de revisión suspender de inmediato el cumplimiento de la condena y disponer la libertad del sancionado o disponiendo, si las circunstancias que para ello deban valorarse lo hacen necesario, el aseguramiento del ahora nuevamente acusado hasta la celebración del nuevo juicio.

34. Incorporar las funciones y atribuciones del juez de ejecución a las normas que regulan esta fase del proceso penal, contemplando además los recursos que puedan interponerse contra resoluciones ejecutivas del tribunal o del juez de ejecución o por falta de ellas cuando sean procedentes⁷. Igualmente, debe establecerse un recurso especial ante el tribunal correspondiente, contra las disposiciones de las autoridades penitenciarias que contravengan lo que el órgano jurisdiccional haya dispuesto respecto al cumplimiento de la sanción privativa de libertad.

35. Regular los actos que el tribunal de revisión, en su caso, o el tribunal de instancia cuando efectúe nuevo juicio, deberá ejecutar o disponer su ejecución por quienes corresponda, para asegurar la ejecución de la restitución de derechos y honores que el absuelto en el propio proceso de revisión o en una nueva sentencia como consecuencia de la

revisión deba recibir, incluyendo las reparaciones de orden moral.

Igualmente prever la solución en este orden que deba darse al caso de quien, habiendo sido anulada la sentencia que lo condenó, no resulta nuevamente juzgado al archivarse las actuaciones sin nuevo proceso, por falta de prueba suficiente u otro motivo.

36. La reforma procesal penal debe incluir la modernización y el perfeccionamiento de la vigente Ley Procesal Penal Militar, especialmente en lo referido a la competencia que se ha concedido a los tribunales militares para el enjuiciamiento de civiles aunque no haya participado algún militar en la comisión de los hechos delictivos y para eliminar algunas incongruencias que se aprecian en instituciones importantes entre una y otra ley procesal⁸.



7. Las funciones del Juez de ejecución pudieran ser recogidas en la necesaria Ley de Ejecución de Sanciones penales, ahora inexistente y, además, requeriría alguna modificación al respecto la vigente Ley de los Tribunales Populares.

8. Ejemplos de estas importantes incongruencias son que la LPPM limita en todo caso el acceso a las actuaciones para el acusado y su defensor hasta el momento en que el Instructor Fiscal declara concluido el expediente de fase preparatoria, limitando injustificadamente el derecho a la defensa y que, en abierta contradicción con los principios de derecho a la defensa y de inmediación en la asunción y valoración de las pruebas, el artículo 325 de la citada ley autoriza que el tribunal, de oficio o por solicitud del Fiscal, disponga la lectura de las declaraciones que el acusado haya prestado durante la fase preparatoria, cuando se advierta contradicción entre estas y las ofrecidas en el juicio oral y cuando el acusado se niegue a prestar declaración durante la vista. En otros aspectos, tales como que se reconoce al acusado el derecho a declarar en cualquier momento del juicio oral y que igualmente en cualquier momento de la audiencia el tribunal pueda disponer o practica cualquier prueba adicional, así como se reconozca a las partes el derecho a proponer nueva prueba que puedan considerar necesaria, una vez concluida la práctica de las previamente admitidas, la LPPM es más avanzada y garantista que la LPP.

Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ordenamiento penal cubano

Iván Ermand Collazo

Funcionario de la Secretaría
del Consejo de Estado

La responsabilidad penal de la persona jurídica (también denominada persona moral, colectiva, ficticia) es uno de los temas más discutidos y controvertido en la ciencia del Derecho Penal.

El artículo 39 del Código Civil cubano refrenda que “...son entidades que, poseyendo patrimonio propio, tienen capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones”.

A los efectos del Derecho Penal y del objetivo que pretendo analizar, me ajustaré al Código Penal cubano el que estipula en su artículo 16 apartado 4 que “...le es exigible responsabilidad penal a las personas jurídicas cuando se trate de las cooperativas, las sociedades y asociaciones constituidas de conformidad con los requisitos establecidos en las leyes, las fundaciones, las empresas no estatales autorizadas para realizar sus actividades, así como las demás entidades no estatales a las que la ley confiere personalidad jurídica”.

La literatura muestra coherencia en lo referente a la historia de la persona jurídica como sujeto activo de delito y reseña sobre los pensadores principales que en el transcurso del tiempo han rechazado o admitido su existencia en el campo de las ciencias penales.

A modo de introducción, resumidamente¹, recordamos que en Roma antigua predominó

el principio “*societas delinquere non potest*”, fundamentándose que una persona jurídica no puede ser responsable penalmente, en tanto en cuanto no puede cometer delitos por sí misma.

Posteriormente desde la Edad Media y hasta finales del siglo XVIII la visión romana se transformó y se admitió la capacidad delictiva de las personas jurídicas, aceptándose esta como una ficción jurídica.

En el siglo XVIII, se regresa a la referida concepción romana. Entre otros autores, el alemán Friedrich Karl von Savigny argumentó otro sentido de la teoría de la ficción; sustentó que la persona jurídica era una mera ficción a la que no podía atribuirse una voluntad susceptible de ser apreciada conforme al principio de culpabilidad. Hay actualmente quienes mantienen una postura similar, tal como se verá después.

Por su parte, Franz Von Liszt, a inicios del siglo XX, defendió la responsabilidad de las personas jurídicas fundamentando la peligrosidad de estas, al estimarlas como una vía o instrumento mediante el cual personas naturales pueden cometer delitos.

Lo cierto es que hoy muchos países reconocen en sus ordenamientos penales la responsabilidad de la persona jurídica.

1. Para el estudio más detallado de la historia de la persona jurídica en el Derecho Penal y del origen de las teorías que se abordarán, se podrá consultar la bibliografía que se señala al final, así como otras disponibles en internet y en nuestras bibliotecas jurídicas.

Entre ellos se encuentran el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Austria, Francia, España, Holanda, Finlandia, Italia, Suiza, Noruega, Chile y Ecuador. Reino Unido resalta por su aplicación por más de un siglo. Otros países, como Rusia, han preferido enfrentar las conductas socialmente peligrosas cometidas por la persona jurídica mediante mecanismos establecidos en la esfera del Derecho Administrativo. En Cuba estuvo reconocido en el Código de Defensa Social; posteriormente se reincorporó al vigente Código Penal mediante el Decreto- Ley No. 175 de 26 de junio de 1997.

Entre los distintos fundamentos para su regulación, como política penal, se encuentran: la participación sostenida de las empresas en hechos delictivos en el marco de actividades económicas y comerciales; la demanda de instrumentos jurídicos internacionales de una respuesta penal para las personas jurídicas; la necesidad de que los altos directivos y los socios intervengan en la prevención de conductas delictivas en el seno de la empresa; y la necesidad de incrementar el fin social del Derecho Penal.

Sobre la persona jurídica, como sujeto del Derecho Penal, se discute sobre su posible acción, culpabilidad, imputabilidad, sanción y cuestiones procesales para su incriminación. En este artículo solamente el tema se centrará en su responsabilidad, lo que hará transitar por las instituciones de la acción y la culpabilidad fundamentalmente.

Pretendo exponer mis criterios sobre la responsabilidad de la persona jurídica a la luz de lo regulado en el Código Penal cubano, con el objetivo de promover la discusión, en aras de su perfección con la contribución de todos los especialistas que lo estimen pertinente.

¿ES UNA FICCIÓN O ES REAL LA PERSONA JURÍDICA COMO SUJETO ACTIVO DEL DELITO?

En la doctrina se hallan cuatro teorías sobre este particular. La **teoría de la ficción**, aducida por Savigny y otros autores, que sustenta que la per-

sona jurídica está integrada por varias personas naturales, que ella por sí no existe, su existencia solamente es posible mediante la ley, y por tanto no puede ser sujeto de Derecho Penal.

Algunos especialistas estiman en la actualidad que la persona jurídica es incapaz de ejecutar una conducta por sí misma, porque no tiene conciencia propia. Consideran que las acciones delictivas en que ella incurre deben reprimirse mediante las normas administrativas porque estas tienen carácter impersonal y su incumplimiento depende únicamente de la producción del resultado descrito en la norma. Estos pensadores preponderan el elemento subjetivo de la culpabilidad de la persona natural, dado que el Derecho Penal estipula que los actos delictivos se ejecutan dolosa o imprudentemente. Además, alegan que para la consecuencia jurídica causada por la persona moral se prevé una sanción administrativa, la que no es una pena en sentido estricto.

En segundo lugar, aparece la **teoría de la realidad**, cuyo principal exponente se dice que fue Otto Gierke. Esta teoría reconoce que la persona jurídica se compone por personas físicas que combinan sus voluntades individuales para crear una voluntad común, unitaria, real. La unidad de las personas naturales origina una personalidad nueva; las insolubles voluntades de estas conforman la voluntad única de la persona jurídica. Los autores que representan esta teoría sostienen que la persona jurídica existe realmente y por tanto, es susceptible de contraer responsabilidad penal.

La tercera teoría la denominaré **mixta o ecléctica**. Autores contemporáneos catalogan a la persona jurídica como un ente ficticio, pero reconocen su capacidad de acción, de culpabilidad y de punibilidad.

La profesora Mayda Goite (1999, p. 9) hace referencia a las **teorías negativas**, que “tienen un punto de coincidencia con la Teoría de la Ficción”. Nos explica que “estas concepciones coinciden en señalar, que cuando se dice que una sociedad

o institución es propietaria de un bien, o ha celebrado un contrato, lo que se dice es algo que se predica de ciertas personas físicas, que en realidad son las que contrataron y tramitaron todo con los verdaderos propietarios de esos bienes. Por tanto, niegan toda posibilidad de existencia real de las personas colectivas”.

En mi criterio, la persona jurídica es una entidad real. No surge del Derecho Penal, surge del Derecho Civil. La función del Derecho Penal respecto a ella es otorgarle capacidad de acción, culpabilidad y punibilidad.

Partiendo del Derecho Civil concretamente, reitero que el Código Civil cubano, en su artículo 39 apartado 1 define que “las personas jurídicas son entidades que, poseyendo patrimonio propio, tienen capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones”. Entre las personas jurídicas que relaciona en su apartado 2 aparece en primer lugar el Estado. Si el Estado es un ente real, también lo son las personas jurídicas que surgidas del Derecho Civil hoy son sujetos de delito, conforme al Código Penal cubano, a saber: “las cooperativas, las sociedades y asociaciones, las fundaciones, las empresas no estatales autorizadas para realizar sus actividades, así como las demás entidades no estatales a las que la ley confiere personalidad jurídica”.

Los que consideran que la persona jurídica no puede ser sujeto del Derecho Penal porque su existencia es posible solamente mediante la ley, se les puede responder que las personas naturales también deben su capacidad jurídica a la ley. A los seres humanos de la comunidad primitiva no se les reconocía ninguna capacidad jurídica, pues el Derecho aún no tenía vida.

Dicha norma civil y otras normas complementarias como la Ley de la Inversión Extranjera; la Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios; la Ley de Asociaciones y el Decreto- Ley de las Cooperativas no Agropecuarias; establecen cómo y cuándo nacen y se extinguen

las personas jurídicas, la composición de sus órganos, su domicilio, denominación, la capacidad de responder por sus actos, entre otros atributos que evidencian que son reales. El Código Civil cubano en sus artículos 39 y 41 establece que la persona jurídica “tiene capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones (...) que determine la ley, sus estatutos y reglamentos”. La doctrina del Derecho Civil también reconoce tres teorías: la de la ficción, la realista y la funcional, pero al contrario de las teorías en el Derecho Penal, todas aquellas reconocen su capacidad de obrar. Los especialistas cubanos en este tema reconocen a la persona jurídica como “real y capaz” (Colectivo de Autores, 2002, p. 153 -180).

Además de lo expuesto, reafirmaré que la persona jurídica es una entidad real, al abordar seguidamente dos cuestiones muy debatidas, que tienen estrecha relación: su capacidad de acción y de culpabilidad.

¿TIENE CAPACIDAD DE ACCIÓN PUNITIVA LA PERSONA JURÍDICA?

Otro de los aspectos refutados sobre la responsabilidad de la persona jurídica es su capacidad de acción.

El Derecho en sentido general y el Penal en específico, se articulan como un sistema. Insisto en que el Código Civil cubano, en su artículo 41, refrenda que “las personas jurídicas, para ejercer sus actividades, tienen la capacidad que determine la ley y sus estatutos o reglamentos”. Asimismo, en el artículo 42 dispone que “... realizan sus actividades por medio de sus órganos de dirección legamente designados o elegidos”.

Asumiendo la **teoría de la realidad** de la persona jurídica y vinculándola con la denominada **teoría de los órganos**, de Francisco Ferrara, la capacidad de obrar debemos entenderla como el conjunto de comportamiento voluntario de las personas naturales que componen a la jurídica, que se exterioriza a través de sus órganos de dirección (**teoría de los órganos**).

Al incorporarse la persona jurídica en nuestro ordenamiento penal como sujeto de delito, se le confirió la capacidad de acción punitiva. Será responsable penalmente si durante el ejercicio de sus actividades, mediante el órgano de dirección, realiza una “acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la ley bajo conminación de una sanción penal”.

¿TIENE CAPACIDAD DE CULPABILIDAD LA PERSONA JURÍDICA?

La culpabilidad de la persona jurídica es otro de los aspectos que los autores que comparten la **teoría de la ficción** cuestionan, alegando que ella no tiene capacidad de culpabilidad por sí sola.

Respecto a este asunto existen múltiples teorías. Como podrán apreciar a continuación, la mayoría guardan relación una con las otras, porque conciben la culpabilidad sobre la base de la defectuosa organización de las empresas. Sus diferencias son casi imperceptibles.

- La culpabilidad por la conciencia especial de la persona jurídica.

Según esta teoría, la culpabilidad de la persona jurídica surge cuando el acuerdo conjunto que se adopta por ella se contrapone a la voluntad de las personas físicas que conforman la entidad colectiva. En caso de que un miembro de la entidad no coincida con la decisión adoptada por la persona jurídica, esta última tiene la preponderancia porque tiene voluntad propia.

- Culpabilidad por el espíritu normativo de la persona jurídica.

Esta teoría se sustenta en que la voluntad de la persona jurídica se deriva de la voluntad de todas las personas naturales que la componen. Si la persona jurídica resulta culpable, también serán culpables los sujetos físicos que la conforman. Su tesis coincide con la teoría de la realidad; se dice que es una de sus variantes.

- Culpabilidad funcional del órgano.

Coincide esta teoría con la anterior en que las acciones punibles de las personas jurídicas se forman por las acciones de las personas físicas que integran la entidad colectiva, pero enmarca la culpabilidad en el mal funcionamiento organizativo u orgánico de la empresa.

- Culpabilidad por no evitación de los fallos organizativos de la persona jurídica.

Con esta teoría se pretende distinguir la culpabilidad colectiva de la individual. La culpabilidad, conforme a esta teoría, se manifiesta cuando la empresa no evita el hecho delictivo por errores organizativos.

- Culpabilidad por no evitación de las influencias criminógenas de la persona jurídica.

La fundamentación de esta teoría consiste en que la persona jurídica será responsable penalmente cuando no actúe para evitar los factores criminógenos (lo que llamamos causas y condiciones) que propicien delitos. Establece la relación entre la persona jurídica y las personas físicas que la conforman. Considera que la persona jurídica tiene capacidad y posibilidad para influir en el comportamiento de los individuos que se desempeñan en la entidad.

- Culpabilidad por el carácter de la empresa.

Conforme a esta teoría, la empresa es culpable porque funciona con un sistema defectuoso de organización, lo que constituye una condición para que se generen conductas punibles. La responsabilidad de la persona jurídica no recae en sus acciones futuras, sino en su incorrecta organización, previamente concebida.

- Culpabilidad por la conducción de la actividad empresarial.

La culpabilidad por la conducción de la actividad empresarial, conforme a esta teoría, surge

cuando la persona jurídica adopta una decisión de riesgo que lesiona o pone en peligro un bien jurídico penal.

- Culpabilidad por reproche ético - social empresarial.

Argumenta esta teoría que la culpabilidad de la persona jurídica puede originarse por la deficiente estructura organizacional de la empresa o la falta de ética de la misma. Mediante esta teoría se reprocha penalmente el sistema estructural de la empresa. Admite como causa de exculpación el hecho de que la empresa logre un correcto funcionamiento a partir de la rectificación de su organización.

- La culpabilidad por defecto de organización.

Esta teoría de basa en los principios de la *actio libera in causa* y de los delitos de comisión por omisión. Considera culpable a la persona jurídica cuando omite adoptar medidas que le son exigibles para garantizar el correcto desempeño de la empresa y prevenir las conductas delictivas.

- Culpabilidad de la persona jurídica por su cultura empresarial de incumplimiento de la legalidad.

Los autores que comparten esta teoría, denominada también constructivista, razonan que la persona jurídica tiene capacidad para cuestionar la vigencia de determinadas normas de la sociedad, así como para adoptar decisiones que se correspondan con la legalidad y que no causen daños. También estiman que tiene capacidad para crear normas jurídicas. El incumplimiento de estos deberes la hace responsable penalmente.

Comprendiendo el Derecho como un sistema y reiterando la Teoría de la Realidad, estimo que la culpabilidad de la persona jurídica debe basarse en los mismos elementos de la culpabilidad clásica establecidos en el Código Penal cubano para la persona natural, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9.

Para la culpabilidad de la persona jurídica se deben valorar dos aspectos, ya mencionados: el biosicológico- social y el objetivo. El biosicológico- social son las personas naturales que conforman la entidad colectiva, y el objetivo es el órgano de dirección mediante el cual ella realiza su acción u omisión punibles. Como mismo los elementos intelectual y volitivo de la culpabilidad tienen que estar presentes en la conducta delictiva de la persona física, así estarán presentes como una unidad de voluntades en la persona jurídica; y según se comporte su previsión o designios, será juzgada su conducta delictiva como intencional (doloso) o por imprudencia (culposo).

A pesar de que ciertamente en el precepto penal (apartado 3 del artículo 16 del Código Penal) no se hace referencia al órgano de dirección, el cual posee característica material, no es óbice para apreciarlo como elemento de la culpabilidad, pues es donde se fragua la unión de voluntades, porque, repito, es la vía mediante el cual la norma civil, que da sustento al nacimiento de la persona jurídica, establece su materialización.

Para las entidades donde no existe órgano de dirección, porque recae sobre un mismo individuo las facultades de dirección, representación y adopción de decisiones, también es válida esa concepción de la culpabilidad; lo que, ante este supuesto, su aplicación resultará más sencilla.

Algunos teóricos comprenden la culpabilidad de la persona jurídica sobre la base de la teoría de la coautoría o la autoría mediata, según sea el caso. Comparto este argumento para fundamentar la unidad de voluntades a la que me referí. Si dos o más personas naturales de común acuerdo cometen un delito, estamos ante una coautoría o coparticipación; si en el otro supuesto, una persona natural comete un delito a través de otra persona, conforme a lo establecido en el artículo 18, apartado, inciso b) del Código Penal cubano, se configura una autoría mediata.

Al efecto de la persona jurídica, cuando las personas naturales que la integran deciden cometer

un delito, “dentro de la propia esfera de acción” – elemento material establecido en la norma penal– convierte la coautoría de las personas naturales en autoría de la persona jurídica, al producirse la unidad de voluntades que se manifiesta mediante un órgano decisorio. Esta misma lógica de pensamiento sería válida para explicar cualquiera de las variantes de participación que hoy prevé la citada norma penal; siempre teniendo en cuenta los dos referidos aspectos: el biosicológico- social con sus elementos intelectual y volitivo, y el objetivo (órgano decisorio), que dan paso a la culpabilidad de la persona jurídica.

La doctrina también refiere sobre otras dos teorías sobre la culpabilidad de la persona jurídica que, a diferencia de las anteriores, se fundamentan en las dos formas de culpabilidad reconocidas legalmente: intencional e imprudencia.

Entre las teorías de los que admiten que la persona jurídica tiene capacidad de culpabilidad, se hallan dos. La primera es la **teoría del reflejo o el rebote**, la que sustenta que la persona física es la única capaz de actuar por dolo o culpa, por tanto, la persona jurídica puede cometer el delito por dolo o culpa por medio del “reflejo o el rebote” proveniente de la persona natural.

La **teoría de la responsabilidad autónoma** es la segunda; la cual expresa que la persona jurídica tiene vida propia y por tanto tiene capacidad de culpabilidad intencional o imprudente. Esta teoría tiene como punto de partida la **teoría de la realidad**.

Volviendo al Código Penal cubano, en su artículo 16 apartado 3, se establece que las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos “...cuando sean perpetrados por su representación o por acuerdo de sus asociados”.

La redacción de este apartado es casi igual a la formulación del artículo 16 del citado Código de Defensa Social que estuvo vigente en Cuba. Desde entonces, en mi criterio, esa formulación

es imprecisa, porque decir “por su representación” no es lo mismo que decir “por su representante”. Representación es el sustantivo del verbo representar, mientras que representante en el adjetivo que califica al sujeto que representa. Gramaticalmente se pudiera interpretar que esa frase significa que se trata de los delitos que las personas jurídicas cometen durante un acto de representación, que no es igual a expresar que el delito se cometió por su representante. Acudiendo a la lógica y a la doctrina – la cual abordan este tema de la representación -, interpreto que se quiere decir que el delito puede ser ejecutado por el representante de la persona jurídica.

Siguiendo la lógica de lo expresado sobre este tema, considero que, a los efectos de la culpabilidad, el delito puede ser perpetrado por el representante siempre y cuando no haya actuado a título personal; dicho de otra forma, siempre y cuando represente la voluntad de las personas naturales que conforman la entidad.

La norma regula que un sujeto, persona física, que tiene la cualidad de ser representante, puede cometer un delito en representación de la persona jurídica. En este sentido, la norma está refrendando un requisito de imputabilidad no de culpabilidad, por tanto, para que la conducta del representante y por ende de la persona jurídica sea culpable, tienen que manifestarse los elementos de la culpabilidad que he abordado.

Por el contrario, la última formulación del citado apartado 3, que estipula que las personas jurídicas son penalmente responsables por delitos cuando sean perpetrados “por acuerdo de sus asociados”, sí alude expresamente al requisito de culpabilidad unitaria que he reafirmado.

La contradicción se produce cuando se intenta interpretar de conjunto los descritos elementos de imputabilidad y de culpabilidad. Analicemos: “...cuando (los delitos) sean perpetrados por su representación o por acuerdo de sus asociados”.

Es incorrecta su redacción, porque se trata, como he explicado, de dos aspectos que guardan relación, pero son diferentes: imputabilidad y culpabilidad. El uso de la preposición “o” sugiere la idea de que esos elementos pueden concurrir como una alternativa, cuando realmente no lo es. Por ello, considero que este apartado merece más precisión en su letra.

Finalmente, quiero resaltar que, siguiendo el espíritu de las teorías invocadas, la valoración de la responsabilidad penal de la persona jurídica debe transitar por cada una de las personas físicas que integran la entidad. Pueden darse los supuestos de que alguna de esas personas sea inimputable o no sea culpable y, por tanto, no es responsable.

En sentido general, a la persona jurídica como sujeto de delito, le son aplicables los principios generales del Derecho Penal sustantivo cubano, porque es un sujeto real, aunque con sus características propias.

¿LA PUNICIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DEBE SER O NO INDEPENDIENTE DE LA PERSONA NATURAL?

Este es otro de los temas cuestionados en la doctrina. El Código Penal cubano, siguiendo la misma letra del referenciado Código de Defensa Social, considera que por la perpetración de un mismo delito responde la persona jurídica y también, de forma individual, las personas físicas que la integran.

El tan mentado artículo 16 en su apartado 3 establece que las personas jurídicas son penalmente responsables por los delitos previstos “...sin perjuicio de la responsabilidad penal individual en que hayan incurrido los autores o cómplices en el hecho punible”.

Sobre este asunto también aparecen varias teorías que responden a los modelos incorporados por algunos países en sus legislaciones penales.

Estos modelos son:

1- Modelo de responsabilidad simultánea o heterorresponsabilidad

Según este modelo las personas físicas que integran una entidad reconocida como persona jurídica penalmente responsable, pueden responder por la comisión de un delito al mismo tiempo como persona física y como parte de la persona jurídica.

El mismo responde a la teoría que se basa en que las personas jurídicas no tienen capacidad de acción por sí mismas, por tanto, no pueden ser responsables penalmente. Esa capacidad solamente la posee la persona física que, al cometer un delito en ocasión de pertenecer a una persona jurídica, responde penalmente de forma individual y al unísono transfiere la responsabilidad a aquella.

2- Modelo autónomo o de autorresponsabilidad

Este modelo se fundamenta en que la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad de la persona natural. Dicha responsabilidad se asocia a acciones por defectos en la organización o dirección de la entidad que conforma la persona jurídica, cuya consecuencia no siempre constituye un hecho punible. Se afirma que los códigos penales de Austria y Suiza contemplan este modelo.

3- Modelo mixto o vicarial

Este modelo se conforma conjugando los fundamentos de los dos anteriormente explicados. Lo distintivo de él es que se puede exigir responsabilidad penal por un mismo acto punible a una persona jurídica y a las personas naturales que integran a aquella, pero la responsabilidad es de forma independiente.

Se explica que la responsabilidad de la persona jurídica no depende de la responsabilidad de la persona natural. Ello supone que puede ser sancionada una persona jurídica sin que se sancione a la

persona física, ya sea porque esta resulte inimputable o no culpable.

El Código Penal cubano acogió el modelo de la responsabilidad simultánea. Opino que no es el más adecuado, porque contradice los principios: *non bis in ídem*, la prohibición de responsabilidad penal por hechos ajenos y el de individualización de las penas; criterios que aduce una parte de la doctrina que también rechaza ese modelo.

De los tres modelos, considero que el mixto es el adecuado. Mediante él se cumplen los señalados principios generales del Derecho Penal y además se aviene con las teorías de la acción y la culpabilidad de la persona jurídica que expuse anteriormente.

Hasta aquí mis consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Espero que para algunos sirvan en función de actualizarse sobre el tema y para otros genere el debate, porque estoy seguro que debemos perfeccionar esa institución en nuestro Código Penal. Sobre la persona jurídica en materia penal quedan muchos temas por abordar en el orden sustantivo y el procesal, que bien pueden estudiarse y exponerse en trabajos futuros.

BIBLIOGRAFÍA:

Código Civil cubano. Ley No. 59 de 1987.

Código Penal cubano. Ley No. 62 de 1987.

Colectivo de Autores. (2002). *Derecho Civil, Parte General*. La Habana, Cuba: Editorial “Félix Varela”.

Goite Pierre, Mayda (julio – diciembre 1999). La responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho Penal. En *Revista Cubana de Derecho*. (No. 14). La Habana, Cuba: Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Pardo Martínez, Vicente José. (S/A). *La responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Disponible en: martinez_vicpar@gva.es. Consultado: 26 de octubre de 2017.

Quirós Pérez, Renén. (1999). *Manual de Derecho Penal. Tomo I*. La Habana, Cuba: Editorial “Félix Varela”.

Terradillos Basoco, Juan. (1995). *Derecho Penal de la Empresa*. Madrid, España: Editorial Trotta. AS.



LOS FISCALES *responden*

EN ESTA OCASIÓN RESPONDEMOS ALGUNAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS SOBRE LA FAMILIA, EL ROL DE LOS PADRES PARA CON LOS HIJOS Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS MENORES DE EDAD.

¿Cuáles son los derechos y deberes de los padres?

El Código de Familia establece que los hijos menores de edad estarán bajo la patria potestad de sus padres, los que la ejercerán conjuntamente. Esta institución incluye deberes y derechos que se resumen a continuación: tener a sus hijos bajo su guarda y cuidado, proporcionarles una habitación estable y una alimentación adecuada, cuidar de su salud y aseo personal, darles la debida protección; velar por su buena conducta y el respeto a las normas de convivencia y a los bienes y derechos de las personas y la sociedad; atender su educación y asistencia al centro educacional; administrar sus bienes y representarlos en todos los actos y negocios jurídicos en que tengan interés; entre otros.

Hace años sostuve una relación con una joven, nunca más la vi y al pasar los años conocí que tuvo un hijo, que al parecer es mío, pero no lo inscribí. Aunque otro lo inscribió como suyo no lo atiende y desde hace unos años yo me acerqué a él y lo atiendo. Deseo reconocerlo legalmente, ¿Qué debo hacer?

Se le indica contratar los servicios jurídicos de un abogado en el Bufete Colectivo y presentar, ante el tribunal competente, una demanda en proceso ordinario sobre Impugnación de Paternidad en virtud del artículo 81 del Código de Familia.

Si el hijo es menor de edad se evaluará previamente si conviene a sus intereses la sustanciación o no del proceso antes de que arribe a la mayoría de edad. De ser mayor de edad, la demanda deberá ser promovida por quien se considere con derecho a reconocer y por el hijo cuyo reconocimiento se pretenda.

¿SABÍAS QUE...?

Compartimos con ustedes algunos datos sobre nuestra historia, tras la conmemoración del aniversario 45 de la creación de la Fiscalía General de la República.

El 23 de junio de 1973 se promulgó la Ley 1250, de Organización del Sistema Judicial, cuya disposición final primera derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial del 27 de enero de 1909 y sus modificaciones posteriores. Al amparo de la Ley 1250 fueron estructurados los órganos judiciales colegiados en un sistema único y coherente, adecuado a los principios y exigencias de la Revolución cubana en aquellos tiempos.

Se incorporaron a los tribunales ordinarios los jueces legos, lo que tuvo un especial significado para el sistema judicial cubano, ya que le dio el carácter popular a la administración de la justicia en el país.

José Santiago Cuba Fernández fue designado por el Decreto 3729, del 27 de junio de 1973, Fiscal General de la República. Aprobó el Reglamento de la Fiscalía General de la República, el 25 de septiembre de 1973, el que fue publicado en la Gaceta Oficial el 21 de octubre de ese año.

El Reglamento estableció las funciones, organización y estructura de la Fiscalía, la que contaba con la Fiscalía del Tribunal Supremo Popular, las fiscalías provinciales y las regionales.

Según el Reglamento de la Ley 1250 de 1973:

La Fiscalía del Tribunal Supremo Popular estaba a cargo del Fiscal General y tenía la

estructura y composición que fijaba la plantilla aprobada.

La representación del Ministerio Fiscal ante la sala de lo militar la ostentaba el fiscal militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el fiscal del Ministerio del Interior o los fiscales por ellos designados.

Las primeras direcciones y departamentos de la Fiscalía General de la República para el cumplimiento de sus diferentes funciones fueron: Control de la Legalidad, Instrucción y Asuntos Penales y Civiles, Prevención y Reeducción, Capacitación y Administración.

En la Fiscalía General también existía un secretariado que se subordinaba directamente al Fiscal General, y en las fiscalías provinciales se establecieron departamentos homólogos a las direcciones existentes en la sede central.

Cada fiscalía provincial estaba a cargo de un fiscal jefe, quien formaba parte del Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial Popular.

Las fiscalías regionales tenían su sede en el lugar en que radicaban los tribunales regionales populares, ante los cuales y en cuyos respectivos territorios ejercían sus funciones. Cada una de ellas estaba a cargo de un fiscal jefe.

Con información del libro: Aproximación a la historia de la Fiscalía General de la República. (Colectivo de Autores. 2015. pág 111- 114).

GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

SOCIETAS DELINQUERE NON POTES

Es una locución latina que significa “la sociedad no puede delinquir”, utilizada en Derecho penal para referirse a un principio clásico sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según este principio, una persona jurídica no puede cometer delitos, pues carecen de voluntad (elemento subjetivo) que abarque el dolo en sus actuaciones. De esta forma, a las personas jurídicas no pueden imponérseles penas, entendidas como las consecuencias jurídico-penales clásicas, más graves que otras sanciones.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Societas_delinquere_non_potest

IUS PUNIENDI

Es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. De forma desglosada encontramos que la palabra “ius” equivale a decir “derecho”, mientras que “puniendi” equivale a “castigar”, por tanto, se puede traducir literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar.

La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. Por ello, si bien puede ocurrir que otros organismos o instituciones, o en otras situaciones, estén legitimados para castigar o sancionar (empleador y empleado, o padre e hijo), el ius puniendi no es aplicable a estas.

Fuente: <https://es.scribd.com/doc/103305234/Ius-Puniendi> y https://es.wikipedia.org/wiki/Ius_puniendi

IN DUBIO PRO REO

Es una locución latina que expresa el principio jurídico de que, en caso de duda, se favorecerá al imputado o acusado (reo), por ejemplo, por insuficiencia probatoria. Es uno de los principios del Derecho penal moderno donde el fiscal o agente estatal equivalente debe probar la culpa del acusado y no este último su inocencia. Podría traducirse como “ante la duda, a favor del reo”. Su aplicación práctica está basada en el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo

Normas para publicar en la revista LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD y otros espacios de la Fiscalía General de la República

La revista Legalidad, Derecho y Sociedad es la publicación oficial de la Fiscalía General de la República, tiene un perfil técnico- jurídico y social, y se edita en soporte papel y en formato digital. La publicación digital puede ser vista y descargada en PDF por números completos en el portal web (www.fgr.gob.cu) y otras vías de comunicación.

Pueden publicar especialistas, nacionales y extranjeros cuyos trabajos estén relacionados con el ámbito de la actividad de la Fiscalía, las diferentes ramas del Derecho o de ciencias afines al trabajo del Órgano. Los artículos deben ser de interés para la institución y cumplir con los requisitos de contenido, redacción y forma, con los parámetros científicos y temáticos que se establecen para la publicación en la revista.

El Consejo de Redacción de la revista aprueba las ponencias a publicar, tras la evaluación del Comité Científico, el cual emite un dictamen sobre su calidad realizando las recomendaciones que considere oportunas, las que son comunicadas a su autor a los efectos procedentes.

Aunque un trabajo sea aceptado, su inclusión en un número depende de la cantidad que sean recepcionados

en ese período, el espacio disponible y las prioridades que en cuanto a contenido estime el Consejo de Redacción de la revista. No obstante, de no publicarse en una edición, es reservado para los siguientes números.

Parámetros para su aprobación:

1. Deben referirse a temas de actualidad y que resulten de interés o prioridad para la Fiscalía o el país.
2. Ser presentados en el procesador de texto Word con letra Arial 14,



escritos a espacio y medio, y las notas a pie de página en Arial 10 puntos.

3. Las ponencias o monográficos deben tener una extensión máxima de 5 cuartillas (incluyendo las notas, gráficos, referencias bibliográficas y anexos). De considerarlo necesario, por la importancia del tema y en aras de no afectar la línea del contenido, el Consejo de Redacción puede admitir trabajos con más de cinco cuartillas. En el caso de libros y compilaciones se aceptarán artículos con hasta 20 cuartillas.

4. Pueden presentarse versiones de tesis o ponencias redactadas en forma de artículo o comentario. Cualquier gráfico, dibujo o foto debe remitirse también en un archivo independiente al Word, con la indicación precisa de su ubicación dentro del total de cuartillas y el texto en caso de llevar pie de foto. Las fotos, gráficos o dibujos que incluya el trabajo deben tener buena calidad de imagen.

5. La bibliografía debe presentarse al final del trabajo en Arial 14 puntos, la cual debe contener todos los datos necesarios para identificar la obra, siendo imprescindibles en el caso de los libros: nombre del mismo, del

autor (es), fecha de publicación, casa editorial y país; si es un material publicado en una revista debe contener el nombre del autor, de la publicación, fecha, volumen o número de la misma. Siempre debe citarse la fuente o procedencia de la información. La citación en el cuerpo del trabajo debe incorporar la página de referencia en el texto fuente. Se utilizará la norma de citación APA.

6. El trabajo debe incluir el nombre y apellido(s) del autor(es), su rango académico más elevado, la institución a la que pertenece y su cargo, así como una foto tipo carné de identidad en formato digital, la que se adjuntará independiente al Word y contará con buena calidad de imagen.

7. De resultar imprescindible el empleo de abreviaturas o siglas en el texto debe escribirse la primera vez su nombre completo y a continuación las siglas entre paréntesis.

8. El estilo de redacción debe ser conciso, fluido y coherente. Debido al carácter social de la publicación, cuando sea necesario incluir términos poco frecuentes (por estar en desuso o por ser excesivamente técnicos) es preciso referir su significado.



www.fgr.gob.cu



www.facebook.com/FGRCuba

La Fiscalía General de la República A SU ALCANCE



[www.twitter.com/
@FGR_Cuba](http://www.twitter.com/@FGR_Cuba)



YouTube

*Fiscalía General de la
República de Cuba*



EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD